

DOCUMENT TRAMÉS PER LA UNIÓ DE RABASSAIRES I ALTRES CULTIVADORS DEL CAMP
DE CATALUNYA AL GOVERN EN 13 DE JULIOL DE 1932

Excelentísimo señor:

Por la prensa se han hecho públicos los deseos de solucionar desde el poder, el espinoso asunto "rabassaire", hoy todo violencia por la situación en que ha colocado el decreto del 31 de octubre, a todo aquel que tenía contratos en los que se estipulaba el pago en FRUTOS. Nos referimos -claro está- a los de aparcería y "rabassa morta".

La diferencia que los jueces especiales hacen de los contratos de arrendamiento, a los de pago en especies, no pueden ser más absurdos, aunque sean amparados por la letra del decreto.

¿Qué culpa tiene el "rabassaire" o aparcerero de que el campo catalán no esté catastrado? Ese caso fortuito cambiaría por completo el problema, ya que entonces el cultivador debería pagar la renta legal señalada por el líquido imponible. No siendo así, y debido a la interpretación variable de los jueces, el payés catalán se encuentra en un callejón sin salida.

El hizo sus denuncias de acuerdo con un decreto anterior, y esas demandas se fallan siguiendo un criterio erróneo, aunque - de interpretación ad podem literem. Y aun entre los mismos jueces, se dan interesantes diferencias. Así, mientras en Vilafranca, San Feliu del Llobregat, y no sabemos si algún otro Juzgado, dan el fallo en masa de NO HA LUGAR A LA REVISIÓN, produciendo entonces los conflictos actuales, por las naturales represalias de los propietarios ; jueces como los de Vendrell, Villanueva, los de la provincia de Gerona y otros, dan un fallo adverso, pero con opción a la revisión.

La causa del disgusto existente puede razonarse claramente así: En lo referente a arrendamientos, existe rebaja cuando el propietario cobra más renta en pesetas que en dicho año. Si el vino, - el trigo o lo que se le entrega, ha duplicado o triplicado su valor, ¿no es ello un aumento, aunque indirecto, de renta que él percibe? Y esa renta aumentada, en realidad es para el propietario. META. En - cambio, por parte del cultivador existe una grave disminución por el aumento de precio de los abonos químicos, simientes, jornales en las épocas de recolección, y, en una palabra, por el aumento del coste de la vida, que neutralizan el aumento del precio de los frutos que a él pertenecen.

Eso es lógico y congruente para la solución de este grave - caso, que está ocurriendo en las comarcas catalanas, amordazadas hasta el 14 de abril por el caciquismo rural, pero puesto de relieve el descontento con las 50.000 demandas de revisión tan pronto se publicó el decreto de II de julio.

En cuanto a los argumentos contrarios, sólo hemos de hacer pequeñas observaciones para destruirlos.

El primero que es el de la antigüedad del contrato (muchas veces se eleva a doscientos años), a nuestro entender ya predispone en contra del mismo; es el traspaso del feudalismo, al reconocimiento mínimo de la propiedad del trabajo individual. Más antigua es la esclavitud y los privilegios señoriales, y a nadie se le ocurre salir en su defensa.

El segundo argumento es el de la bondad y ventajas que tiene el aparcerero. Si no tiene cosecha, no tiene que pagar, dicen los propietarios. Pero olvidan que si no tiene cosecha, el cultivador que no posee más que lo que su trabajo producirá, queda también, y mucho más que el propietario, en la más completa indigencia, lo cual no le reporta bien alguno, contrariamente a los años (que son los más) que le entrega el 50, el 33 o el 25 por 100 al propietario neto de una cosa que antes producía cero y ahora produce.

Otro argumento nos lanzan en cara, a los que suplicamos a la República, la justicia que no nos supo otorgar la monarquía. La palabra perturbadores ha sido lanzada contra nosotros para que la República tome medidas de represión; pero a eso hay que contestar que ya Lostau, el pasado siglo, desde el Congreso, ponía al descubierto la llaga del campo catalán, y Layret y su generación, en 1905, emprendía la cruzada, y en el año 22 se plasma el deseo unánime, con la fundación de la "Unió de Rabassaires", perseguida por los hombres de la Dictadura, como ahora

lo es por todos los sectores de las derechas catalanas, con reflejos en prensa madrileña. No podemos ser perturbadores de la República, por cuanto seguimos la misma actitud y el mismo camino que durante la monarquía y la Dictadura. Y la mejor prueba es la oposición de la F.A.I., que nos ataca desde Solidaridad Obrera. Lo que pasa es que nuestros deseos de justicia social, no pueden ser en manera alguna agradables a los sectores que, antes del 14 de abril, tenían sus deseos en una cuarta Dictadura.

Al recto proceder de V. E. y a la conciencia del hombre justo y liberal, sometemos estas consideraciones, que, más que de la avidez mecánica de la Ley, llevan consigo la emoción de la deseada paz entre los productores del agro catalán.

Viva V. E. muchos años.

Barcelona, 13 de julio de 1932.

Por la "Unió de Rabassaires i demás Cultivadors del Camp de Catalunya", El Presidente.

BASES TRAMESES AL GOVERN PER DIVERSOS SINDICATS DE TREBALLADORS EL 21

DE MARÇ DE 1933

El Sindicato que suscribe enterado por la prensa que el Gobierno empieza a discutir el proyecto de ley sobre arrendamientos de fincas rústicas, tiene el honor de comunicarle que en reunión general celebrada en el día de hoy ha acordado, con vistas a su próxima presentación a las Cortes, enviar al Gobierno las peticiones que le adjuntamos.

Con la adaptación de estas bases o peticiones entiende este Sindicato que se resolverían rápidamente los graves problemas que afectan a las comarcas españolas en las cuales las tierras están en manos de arrendatarios y aparceros, pues perseguimos con estas peticiones como puntos básicos, el que haya tierra para todos los trabajadores y el que se taseen sus rentas.

Con natural satisfacción cree este Sindicato que parte de sus peticiones están incluidas en la Ley de Reforma Agraria, mas hay algunas que de no ser acogidas por el poder público anularán cuanto se haga para proteger a la clase campesina y arrendataria de España, sobre todo las señaladas con el número 3º y 4º en las que pedimos que se reparta equitativamente la tierra y que ningún propietario pueda cultivar más tierra que la que él y su familia puedan trabajar personalmente.

Esta petición que a primera vista parece atrevidamente revolucionaria, es grandemente conservadora. Revolucionario y perturbador será dejar libres a los propietarios en este aspecto, porque nos echarán de sus tierras pues no escapará a la clara inteligencia de S. S. que si se reglamentan los arrendamientos poniéndose justas trabas a los abusos y codicias de los propietarios y la Ley no les priva en el sentido que nosotros proponemos en las bases 3ª y 4ª no pasará mucho tiempo sin que en las comarcas españolas cuya normal explotación de la tierra es en parcelas arrendadas, se generalicen las grandes explotaciones a cargo de los mismos propietarios los cuales con ayuda de asalariados y con maquinaria, sumirá las comarcas afectadas en verdaderos centros de miseria y nos veremos obligados a salir de nuestras tierras y emigrar a las ciudades la mayoría de nosotros, aumentando con ello el número de asalariados -cosa que creemos debe evitarse a todo trance- y convirtiendo nuestra relativa independencia, en esclavitud, lo cual, anularía por completo nuestras ilusiones como arrendatarios, por obra justiciera de la República.

Pedimos también en la base 5ª la abolición de los contratos en los que se paga por renta de la tierra a su propietario la mitad de los frutos que se recolecten en la finca. Esta clase de contratos muy explicable dos siglos atrás, son completamente anacrónicos y fuera de lugar en pleno siglo XX en que debe irse a que el propietario cobre solamente el interés legal que debe rendir el "capital tierra" independientemente de lo que ésta pueda producir. Pues es terriblemente injusto que cuanto más sudores y fatigas cueste al aparcerero para cosechar más, automáticamente, más cobre el propietario sin tener en cuenta el valor del "capital tierra" cosa que como decimos es lo único que en justicia debería respetar.

También pedimos encarecidamente la nacionalización de los servicios de canales de regadíos, pues algo tan importante y propulsor de la riqueza agrícola es a todas luces perjudicial para los intereses económicos de las regiones afectadas que estén en manos de particulares que los tienen abonados y que de pasar a manos del Estado o de las comunidades de trabajadores lograríase que dichos servicios rindieran absolutamente todo lo que de ellos debe esperarse.

Si con la mayor ilusión acudimos a S. S. con nuestras peticiones es porque conocemos sus trabajos en favor de los humildes y de su buena voluntad para orientar por caminos justos la vida nacional y porque creemos que con la aplicación de estas bases se logrará -libres de obstáculos- incrementar vigorosamente la producción nacional.

Por esto nos atrevemos a molestarle a S. S. solicitando su apoyo en la seguridad de que los que formamos en las filas de este Sindicato le agradeceremos eternamente sus gestiones.

Y les pedimos esperanzados que fijos los ojos en el gran bien que pueden hacer a España, sean valientes y radicales en la citada Ley.

Ullá, 21 de marzo de 1933.

Por acuerdo de la Junta del Sindicato,

El Presidente,
JOAQUÍN VALENTI

El Secretario,
JOSE VIADER

☒ ☒ ☒

Bases o proyecto de mejoras que presenta el Sindicato de Trabajadores de la tierra de Ullá y envía al Excmo. Sr. D. Luis - Companys, en súplica de que las defienda al discutirse la Ley de ordenación de arrendamientos de fincas rústicas:

1ª. Pedimos la abolición de los pagos por adelantado de los arrendamientos, por considerar que el propietario disfruta de una renta y el arrendatario tiene expuestos abonos, trabajo y frutos a la inclemencia del tiempo y, por tanto, es injusto este contrato.

2ª. Pedimos la limitación de los precios excesivos de los arrendamientos a precio fijado en metálico.

3ª. Queremos el repartimiento más equitativo de la tierra; pues mientras unos no pueden trabajarla debidamente por tenerla con exceso los otros están faltados de ella y al objeto de repartirla debidamente pedimos que se nombren unos Comités en cada localidad, a los cuales tengan representación propietarios y arrendatarios.

4ª. Pedimos que al objeto de suprimir y evitar que haya asalariados ningún propietario cultive más tierra que la que pueda trabajar él personalmente con su familia.

5ª. Pedimos la abolición de los arrendatarios de aparcería de cualquier clase que sea, por considerarlo un arrendamiento abusivo.

6ª. Pedimos la nacionalización de los servicios de los canales de regadío o que pase su explotación rápidamente a manos de los Sindicatos de Agricultores de las comarcas afectadas por -- considerar que muchísimas empresas particulares, lo tienen completamente abandonado y por este motivo causan sensibles perjuicios a la producción y economía del país.

7ª. Solicitamos que en caso de venta o traspaso de una finca y el arrendatario haya realizado mejoras en la misma, el propietario abone el importe de dichas mejoras al arrendatario.

En los casos de terrenos yermos y que el arrendatario con sus trabajos los haya puesto en plena producción, pedimos que en -- caso de venta o traspaso se abonen íntegramente al arrendatario toda la sobrevaloración que a consecuencia de dichos trabajos hayan -- sufrido estos terrenos.

8ª. En caso de venta de la finca, que sea preferido siempre el arrendatario.

9ª. Consideramos que los arrendamientos tienen que ser a largo plazo, o sea un mínimo de diez años y que no siendo por falta de pago no pueda el propietario desahuciar, a no ser que lo necesite el propietario para cultivarlo él expresamente.

10ª. Pedimos que en los casos de falta de pago en que se demande judicialmente al arrendatario para desahuciarlo no pueda ser objeto de tal si pagare lo adeudado en el plazo de cuatro días de ser citado.

Por acuerdo del Sindicato de Trabajadores de Ullá.

El Presidente,

JOAQUÍN VALENTI

El Secretario,

JOSE VIADER

CONCLUSIONS LLIURADES AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT PER LA UNIÓ DE
RABASSAIRES I ALTRES CULTIVADORS DEL CAMP DE CATALUNYA, EL 14 D'ABRIL
DE 1933, AMB MOTIU DE LA MANIFESTACIÓ QUE TINGUÉ LLOC D'ADHESIÓ AL REGIM

"Honorable senyor:

La història de la Unió de Rabassaires i altres Cultivadors del Camp de Catalunya explica i fa necessària la seva presència en aquesta manifestació d'adhesió a la República.

Tenim la certesa, i ho afirmem per la nostra part, que les Corporacions que l'han patrocinada, i els ciutadans que la formem, -- no hem vingut a desplegar les senyeres per pur passatemp espectacular, sinó al contrari, com a solemne reiteració del nostre afany i -- propòsit de realitzar per mitjà del règim republicà aquella justícia social compatible i necessària en els actuals moments.

Entenem per afiançar el règim l'acoblament dels seus compromisos, i nosaltres, que sempre estem atents a la veu dels homes responsables de la direcció dels negocis públics quan ens demanen ajut per tal de correspondre a aquells compromisos, ens creiem obligats i autoritzats per a exterioritzar els nostres plans, formular les nostres --

queixes i consignar quan calgui les nostres protestes, per tal que entre el poble i el Poder públic no s'estronqui el corrent de sinceritat i comprensió que fan possible la mútua convivència. En aquest pla aprofitem l'avinentesa d'aquesta magnífica demostració d'amor al règim i acatament a la seva legítima representació, per a fer-vos present el deute d'aquest règim vers els cultivadors del camp.

Molt s'ha fet amb la promulgació de la Llei de Bases de Reforma Agrària. No ignorem que dintre uns dies el Parlament català s'ocuparà en la discussió d'unes lleis, la finalitat de les quals és complementar la primera; però ens cal manifestar que davant la urgència i la gravetat que la realitat del Poder públic en l'adopció de mesures i la promulgació de lleis adients, resulta d'una lentitud desesperant, el mateix per als agricultors en general com per als que creiem que la revolució necessària en els moments actuals és possible sense arribar a la violència material.

Seguim orfes de legislació adequada al ritme del règim republicà. Els encarregats d'interpretar i aplicar l'esperit d'aquest règim des dels alts llocs de l'administració de la justícia, sovint, - massa sovint, el contradiuen; els propis Decrets de revisió de rendes rústegues, convertits més tard en lleis pel Parlament de la República per a satisfacció del poble agrícola i com a penyora de les lleis que han de regular el règim de la propietat en un pla de major justícia, han estat sostrets a llur pròpia finalitat. La intel·ligència del magistrat ha estat esmerçada en cercar un pretext o un detall que el rellevin de la aplicació a favor del cultivador d'aquells beneficis que la República li ha volgut reportar. Així, mentre l'enemic del règim se sent cada dia més audaciós, el poble se sent més inquiet per totes aquestes circumstàncies i la situació al camp català es fa de tot - punt insostenible. Demanem respectuosament que al servei del règim es

procedeixi amb aquella rapidesa que les circumstàncies demanen.

La nostra fe i adhesió a la República és incommovible. En tot moment li hem prestat l'auxili de les nostres masses i el sacrifici dels nostres homes. No pensem sacrificar, però, el règim republicà nascut del fet revolucionari que avui commemorem, el qual vol dir més justícia, més llibertat i que la nostra vida no segueixi subordinada a l'avarícia o al despotisme dels agave-lladors de la terra, nostra eina de treball.

Com a concreció de les nostres aspiracions, ens cal reiterar solemnement:

Redempció de la terra cultivada a rabassa.

Redempció de la terra donada sistemàticament en arrendament.

Desaparició de la ficció del contracte de societat, dit de parceria i, per tant, abolició del pagament de rendes en fruits.

Establiments, sota el patronatge de la Generalitat, del Crèdit agrari; assegurança d'accident, assegurança de collites i creació d'institucions de previsió i assistència social.

Visqueu molts anys per al bé de Catalunya i de la República.-
Ciutat, 14 d'abril de 1933.- Sr. President de la Generalitat."

Avalen les Conclusions les signatures de 240 pobles adherits.

APENDIX IV

LA LLEI DE CONTRACTES DE CONREU I EL
REGLAMENT DE LA MATEIXA, QUE INCLOU
LES ESMENES SUGERIDES A LLUHÍ PER AL-
CALÁ-ZAMORA I REDACTADES DE FET PER
ELL.

LLEI DE CONTRACTES DE CONREU

CAPITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article I^r. Són objecte d'aquesta Llei els contractes de conreu i s'entenen compresos sota aquesta denominació els de rabassa morta, parceria, masoveria, arrendament de terres i en general tots els actes i contractes, qualsevulga - que sigui llur denominació, pels quals es cedeix onerosament - l'aprofitament d'una finca rústica a persona diferent del propietari, sempre que sigui l'explotació de naturalesa agrícola.

Els contractes expressats no perden llur caràcter ni - en el cas de concórrer amb l'objecte específic de conreu, prestacions de serveis, obligacions de representació, de cria de - bestiar complementària de l'explotació. Queden exceptuats els contractes essencialment pecuaris, els quals seran objecte d'una Llei especial.

Article 2ⁿ. Els contractes de conreu, àdhuc els existents en promulgar-se aquesta Llei, han de complir-se de conformitat a l'ús i a bona fe segons els pactes convinguts, sempre i quan no estiguin en contradicció amb els preceptes d'aquesta Llei, contra la qual no podrà prevaler pacte de cap mena.

Article 3^r. Es obligació natural derivada del contracte, la de conrear segons ús i costum de bon pagès tal com s'entén en la comarca.

El conreador no podrà arrendar ni tallar cap arbre sense previ acord amb el propietari. Mancant l'acord podrà recórrer davant la Comissió arbitral, la qual resoldrà en definitiva. S'exceptuen d'aquesta limitació els contractes previstos en l'art. 57 d'aquesta Llei.

Article 4^t. Seran nuls els pactes que en els contractes de conreu obliguen el conreador al pagament de la contribució territorial, dels tributs i taxes annexos i de les càrregues reals de la finca.

Article 5^e. En el contracte de masoveria, la casa o part de la casa que habitualment habiti i altres dependències ocupades pel masover, seran considerades com accessòries de la terra arrendada i aniran compreses dins el preu de l'arrendament.

L'ocupació de la casa i de les dependències expressades haurà de seguir la sort del contracte de conreu a què vinguin afectades.

El masover podrà servir-se de les eines del mas per al conreu de la terra.

No es podran fixar en els contractes de masoveria - pagaments ni obligacions per adjutori, ni jornals especials de més a més lliurament d'espècies que no siguin a compte - del preu contractat.

Article 6^è. El pagament del preu d'arrendament es farà segons els costums de cada comarca, però ni en els contractes existents ni en els que es facin d'aquí endavant, es podrà convenir el pagament a l'avançada. Quan l'ús i costum de la comarca no sigui altrament, s'entendrà que l'arrendament s'ha de pagar per mitges anualitats vençudes.

Article 7^è. Cap contracte de conreu no es podrà - referir a una extensió de terres superior a la que requereixi, a més del treball del conreador, dels seus ascendents i descendents directes, germans o afillats de dret, el treball de jornalers en proporció superior a la de la quarta part de la feina, durant l'any agrícola.

Per excepció, quan el contracte es refereixi a terres de regadiu que siguin objecte de cultiu intens, el treball - de jornalier podrà arribar a la tercera part de la feina necessària durant l'any agrícola.

Per a determinar, en cada cas, la quantitat de treball dels jornalers en les proporcions especificades en els paràgrafs anteriors, es tindrà en compte l'extensió de totes les terres que el conreador poseeixi en propietat o en mèrits d'altres contractes de conreu.

Article 8^è. La Junta arbitral corresponent tindrà competència per a rebre les denúncies per incompliment del disposat en l'article anterior i procedir a la seva comprovació.

Les denúncies hauran d'ésser fetes per veïns de la localitat on radiqui la finca o finques objecte de la mateixa.

La Junta arbitral, un cop comprovat l'incompliment, - estarà facultada per a arrendar, en nom del propietari i a favor del denunciant, la totalitat o el sobrant de la terra - objecte de la denúncia. Cas que el denunciant, per qualsevol causa, no volgués ésser l'arrendatari, la Junta arbitral podrà exercir la facultat expressada a favor dels conreadors de la terra de la localitat per ordre de llur major necessitat o, en defecte d'aquests, a favor de les Cooperatives o Sindicats de producció agrícola de la mateixa població.

Article 9^è. Els contractes de conreu hauran de formalitzar-se en document públic o en document privat, que s'estendrà per triplicat en els impressos ajustats al model que - fixi el Conseller de Justícia i Dret.

Quan el contracte s'atorgui en document privat, un dels exemplars serà presentat al Registre de Contractes de Conreu - que la Generalitat crearà amb l'obligació de lliurar-ne còpies degudament certificades, als interessats que les sol·licitin.

CAPITOL II

DURADA DELS CONTRACTES

Article 10. La durada mínima dels arrendaments regulats en aquesta Llei serà de sis anys.

Si l'arrendatari durant el darrer any del termini contractual i almenys sis mesos abans de finir el seu venciment no avisa l'arrendador, per escrit, la seva voluntat de donar per acabat el contracte, s'entendrà tàcitament que opta per la pròrroga per un període de sis anys més, i així successivament.

Article 11. Quan, per circumstàncies ignorades, en contractar la continuació dels contractes regulats en aquesta Llei, esdevingués perjudicial al conreador, aquest estarà facultat per a fer abandó de la terra o per a fer ús del dret de revisió finit que sigui el primer any agrícola i dins del segon any.

Quan, per circumstàncies sobrevingudes, la continuació dels contractes regulats en aquesta Llei, esdevingués perjudicial al conreador, sempre que el perjudici no sigui inferior al terç del producte mitjà de la terra en un quinquenni, i sigui produït per causes extraordinàries que modifiquin la naturalesa de la terra o de la finca, aquest estarà facultat per a fer abandó de la terra finit que sigui l'any agrícola, o per a fer ús del dret de revisió, però haurà de notificar una o altra decisió abans dels sis mesos darrers de l'any.

Article 12. Tots els contractes de conreu atorgats per l'usufructuari sense consentiment del nu propietari, o - pel marit sense el de la muller, respecte de la terra aportada en dot inestimat, o pels representants legals tots sòls, o pels administradors judicials, podran ésser objecte d'una revisió especial quant al preu estipulat, que haurà d'exercitar-se pel - propietari davant de la Junta arbitral dins l'any següent - d'haver entrat en el ple domini de la seva propietat. També - tindran dret a l'exercici, dins el mateix espai de temps, - del dret de reserva establert en l'article 14 d'aquesta Llei.

Article 13. Els contractes de conreu, atorgats o - que s'atorguin per fiduciari reservista, comprador a carta - de gràcia o empenyorament, o per altres titulars de domini o dret real amenaçat de revocació, si es produeix aquesta donaran dret al propietari a la revisió especial i al dret de reserva exercits en la forma disposada en l'article anterior.

Aquesta disposició és aplicable a les situacions jurídiques d'hereu aparent o posseïdor civil.

Article 14. En acabar el termini contractual o alguna de les seves pròrrogues, el propietari podrà donar per finit el contracte i reprendre la terra quan s'obligui a conrear-la directament ell o els seus descendents o afillats de dret que facin vida comú amb ell.

El propietari cap de casa només podrà fer ús d'aquest dret pel que toca a terres a les quals pugui atendre amb el treball propi i amb el dels seus ascendents i descendents directes, germans o afillats de dret, de manera que si utilitza el treball de jornalier en proporció superior a l'establerta - en l'art. 7^e. s'entendrà que no compleix aquesta condició.

Aquesta facultat del propietari està condicionada:

a) Al requisit de notificar-ho al conreador un any abans del termini de duració del contracte o de la pròrroga en curs.

b) A conrear directament la terra per un terme no menor a sis anys.

c) A què les terres no estiguin subjectes al dret d'adquisició regulat en aquesta Llei.

d) A pagar les millores al conreador en la forma - fixada en aquesta Llei i de més a més, una indemnització equivalent a una anualitat de renda per cada sis anys que - porti de durada el contracte.

Article 15. L'arrendatari que per haver fet ús el propietari del dret de reserva establert en l'article anterior, hagi estat privat de la terra abans arrendada, podrà tornar a la terra en les condicions que la tenia abans i amb els mateixos drets anteriorment adquirits en els casos següents:

a) Si el propietari que s'hagués reservat terra - per a conrear-la directament no ho fes o no ho fes en la forma i en el període de temps fixat en l'article anterior.

b) Si el dit propietari arrendés la finca a un tercer durant els sis anys de conreu obligatori.

c) Si el propietari deixés la terra improductiva en l'esmentat període.

Si el propietari vengués la terra abans d'acabar el període obligatori de conreu directe, estarà obligat a indemnitzar l'arrendatari amb l'import d'un any del preu de l'arrendament per cada any que li manqui fins a l'extinció del dit període obligatori.

Article 16. Els drets i obligacions derivats dels contractes de conreu, subsisteixen encara que la propietat de la terra sigui tramesa a títol universal o singular, lucratiu o onerós o que s'hi constitueixi un dret real.

Article 17. El dret del conreador, derivat dels contractes de conreu, es transmet per causa de mort als seus hereus legítims o testamentaris si ho són els seus ascendents o descendents directes, la seva esposa o els seus afillats de dret i els seus adquirents queden subrogats activament i passivament en la seva condició jurídica.

Els adquirents del dret per causa de mort podran donar per finit el contracte avisant per escrit al propietari, abans de transcórrer els tres mesos següents a la mort del causant, però hauran de continuar el conreu fins a l'acabament de l'any agrícola en curs.

Article 18. El dret del conreador, derivat d'un contracte de conreu, no pot ésser embargat.

Els fruits pertanyents al conreador sols podran ésser embargats en una meitat de llur import.

Article 19. Queden suprimits els subarrendaments, i en general, tot contracte de conreu que tingui per objecte el dret derivat d'un altre contracte d'igual naturalesa, - però seran permesos els relatius a aprofitaments parcials - dels productes obtinguts i que, per a millor benefici, exigeixin la intervenció d'altri.

Els contractes de subarrendament existents es consideraran transformats en contractes d'arrendament entre el propietari i el subarrendatari, mitjançant que aquest dedueixi la corresponent petició davant la Junta arbitral durant el primer any de vigència d'aquesta Llei.

Transcorregut aquest primer any de vigència de la Llei sense que el subarrendatari faci ús del dret que li dóna el paràgraf anterior, podrà el subarrendador, durant el mig any següent, desnonar-lo.

Després del primer any i mig de vigència d'aquesta Llei naixerà a favor del propietari l'exercici del dret que li dóna l'apartat c de l'art. 22.

Per excepció, el conreador, en estat de vellesa o impossibilitat física, els representants legals dels seus hereus menors d'edat i la vídua que hagi adquirit del marit el dret de conreu, podran subarrendar. Aquests subarrendaments sols subsistiran mentre concorrin les expressades circumstàncies en els respectius subarrendadors.

Article 20. L'arrendament s'extingeix:

- a) Per l'acabament del termini establert.
- b) Per la resolució del contracte.
- c) Per la pèrdua de la cosa arrendada.

Article 21. L'incompliment d'obligacions contractuals o legals del contracte de conreu, per un dels interessats, donarà dret a l'altre a demanar la rescisió del contracte. El que hagi complert les obligacions legals o contractuals tindrà dret a demanar la indemnització dels danys i perjudicis soferts i la resolució del contracte, o sols aquella indemnització si renuncia a la resolució del contracte.

Article 22. L'arrendador podrà desnonar judicialment l'arrendatari, únicament, per alguna de les causes següents:

- a) Per haver fet ús el propietari del dret de reserva en les condicions previstes en aquesta Llei.
- b) Per manca de pagament de l'arrendament convingut en el contracte.
- c) Per subarrendament atorgat per l'arrendatari fora dels casos previstos en l'article 19.
- d) Per deixar de conrear la terra per abandó de més d'un any o per destinar-la a un ús que no sigui el de conreu.

Article 23. No es considerarà incompliment l'adopció pel conreador de noves fórmules, procediments o elements que tendeixin a intensificar o millorar la producció agrícola, sense minva de la fertilitat natural de la terra.

L'arrendatari podrà evitar el desnonament consignat en la taula del Jutjat dins els vuit dies següents a la citació, l'arrendament endarrerit juntament amb l'import de les costes causades per la seva culpa fins al moment de la consignació.

El desnonament per les causes a, b i c de l'article anterior es tramitarà per la jurisdicció ordinària seguint la Llei d'Enjuiciament Civil. El desnonament per la causa d requerirà una resolució prèvia favorable de la Junta arbitral de districte.

Article 24. En tot cas de resolució del contracte, l'arrendatari tindrà dret a continuar en la finca fins l'acabament de l'any agrícola.

Article 25. El propietari podrà donar per resolt el contracte de conreu que afecti terres que per raó de llur proximitat a poblacions, siguin o es puguin considerar com a solars urbans i tinguin un sobrepreu de més del 50 per 100 del valor que tindrien com a terres exclusivament de conreu, quan prengui edificar o hagi venut amb aquest objecte. La resolució es referirà a la porció de terreny necessària per a l'edificació, s'haurà de respectar l'any agrícola en curs i el preu d'arrendament sofrirà una reducció proporcional.

El propietari o el comprador hauran de començar les obres dins l'any següent a la data en què el conreador hagi deixat lliure el terreny expressat.

Si el propietari o el comprador incomplissin l'obligació d'edificar dins el termini assenyalat, el conreador podrà reivindicar el conreu del terreny i tindrà dret al triple del preu que, en la quantia proporcional a l'expressat terreny, hagués abonat el darrer any, o a aquella major indemnització dels danys i perjudicis soferts.

Article 26. En cas d'expropiació forçosa, l'arrendatari que porti més de deu anys en la finca tindrà dret a un quart del preu abonat al propietari.

CAPÍTOL III

MILLORES

Article 27. Extingit per qualsevol causa el contracte de conreu, el conreador podrà reclamar al propietari l'abonament de les despeses necessàries i millores útils fetes per aquell en la terra, sempre que subsisteixin en deixar la finca.

S'entén per despeses necessàries les indispensables - per a mantenir la finca en la mateixa forma en què es va contractar i les imposades per la Llei o organismes estatals dins els límits de llur competència.

S'entén per útils les millores que causin augments en la producció o valor de la finca i no siguin d'ornamentació o comoditat per a qui la gaudeixi.

La prova de les millores realitzades correspon sempre al que les reclami.

En cas de dubte envers la naturalesa de la millora, es sotmetrà a la resolució de la Junta arbitral. Serà nu el pacte de renúncia a millores, qualsevol que sigui la part a la qual pogués afavorir.

Article 28. Les despeses necessàries i les reparacions extraordinàries, la necessitat de les quals hagués estat avisada al propietari oportunament, aniran a càrrec del propietari. Si aquest no complís la seva obligació el conreador podrà realitzar-les per compte del propietari. Per a fer-ho, el conreador haurà d'obtenir el permís previ de la Junta arbitral - corresponent, la qual no podrà atorgar-lo sense haver escoltat el propietari o comprovat la seva resistència.

El conreador podrà reclamar del propietari, immediatament de fetes aquestes despeses, la quantitat esmerçada:

Article 29. Les millores útils hauran de realitzar-se per mutu acord. Cas de negativa del propietari a l'acord, l'arrendatari haurà de proposar la realització a la Junta arbitral, provant la conveniència de la millora i presentant un pressupost del seu cost. La Junta arbitral, escoltant el propietari i amb els assessoraments que estimi oportuns, acordarà o no la realització de les millores que hauran de subjectar-se al pressupost presentat o a aquell altre que acordi la pròpia Junta, la qual autoritzarà el conreador per a realitzar-les.

Article 30. Quan el propietari doni per finit el contracte, de conformitat amb aquesta Llei, el conreador no podrà reclamar l'abonament de les despeses i millores realitzades durant els dotze darrers mesos de la seva vigència.

Article 31. El propietari haurà d'abonar les millores reintegrant l'import de les inversions o aportacions fetes pel conreador.

Article 32. La rompuda de terres, les explanacions, plantacions, construccions i altres obres anàlogues efectuades pel conreador en compliment d'obligacions contractuals, hauran d'ésser abonades pel propietari si fa ús del dret de reserva de terres en la forma que li permet l'art. 14 d'aquesta Llei.

Article 33. No seran abonables en cap cas al conreador les despeses necessàries ni les millores útils ni els treballs i obres a què fa referència l'article anterior quan abandoni el conreu de la terra.

Article 34. L'acció de millores haurà d'exercitar-la el conreador en el mateix judici en què es plantegi la resolució del contracte.

Article 35. L'abonament de millores al conreador serà compensable amb les quantitats que aquest degui al propietari - per danys o deteriorament de la terra de què en sigui responsable o per preu no satisfet, sempre que hi concorrin els requisits exigits per a la compensació.

El conreador podrà retirar les millores útils que puguin separar-se sense detriment de la terra.

Article 36. El conreador haurà de permetre les millores necessàries o simplement d'embelliment i comoditat que vulgui fer el propietari.

Les millores d'embelliment donaran dret al conreador a la rebaixa del preu d'arrendament en la proporció que hagin perjudicat la producció de les finques.

CAPÍTOL IV

REVISIONS

Article 37. Els contractes de conreu regulats per aquesta Llei podran ésser sotmesos a revisió a instància del conreador o del propietari, amb subjecció a les normes establertes en els següents articles, al sol efecte de la reducció o augment del preu.

Els efectes de la revisió, un cop sigui ferma, es produiran a partir de l'any agrícola en què fou demanada.

Article 38. Les revisions hauran de demanar-se pel conreador o pel propietari a la Junta arbitral.

Seran principis fonamentals a què les revisions hauran de subjectar-se:

a) Tot contracte de conreu ha de proporcionar al conreador un benefici un cop deduïda la quantitat que representin els jornals i altres despeses inexcusables d'exploració, que necessiti el conreu de la terra objecte del mateix, calculats segons el preu de cada localitat.

b) Tot contracte de conreu ha de proporcionar al propietari una utilitat, un cop deduïda la quantitat que representin les càrregues que per contribució territorial i altres impostos gravin la terra que en sigui objecte.

Article 39. Les Juntes arbitral, dins els principis fonamentals que regula l'article anterior, procediran en la fixació de les revisions, quan no hi hagi mutu acord entre propietari i conreador, atenint-se a les següents normes:

Primera.- El preu d'arrendament no podrà excedir del 4 per 100 del valor que tingui la terra.

Segona.- On hi hagi cadastre el valor de la terra serà la quantitat resultant de multiplicar per 20 el líquid imponible.

Si el propietari ha fet millores posteriors al cadastre que representin un augment de riquesa o una transformació en la producció, el valor d'aquestes millores augmentarà la capitalització feta segons el paràgraf anterior.

Tercera.- On no hi hagi cadastre, per a fixar el valor de la terra es tindran en compte totes aquelles dades, apreciacions i assessoraments tècnics que es creguin convenients, considerant-se dades fonamentals la mitjana de la producció durant els sis anys anteriors; el valor de compra-venda durant el mateix període quan hagi existit aquest traspàs de domini; i el preu unitari per hectàrea establert pel costum en cada localitat.

Quarta.- Caldrà tenir en compte, també, les aportacions i prestacions que facin el propietari i el conreador, així com l'amortització de les plantacions i de les millores abonables a les parts contractants.

Article 40. Una vegada fixat per la Junta arbitral el preu d'arrendament, no podrà ésser demanada nova revisió fins a haver transcorregut sis anys.

Article 41. El conreador podrà reclamar la revisió al sol efecte d'obtenir una rebaixa proporcional del preu, quan per efecte d'accidents o calamitats extraordinàries hagués disminuït en més de la tercera part la productivitat habitual de la terra o s'hagués perdut més de la tercera part dels fruits, sempre que la dita pèrdua no fos imputable a negligència del conreador per no haver-les posat a resguard, segons el costum normal a la comarca.

Aquestes revisions quedaran limitades a una rebaixa en el preu, proporcionada a la disminució de la producció - habitual de la terra o a la pèrdua de fruits soferta.

No hi haurà dret a la reducció o condonació quan la collita o fruits perduts fossin susceptibles d'ésser assegurats.

Article 42. Quan durant un contracte de conreu desaparegui una part de la terra o sigui afectada d'expropiació - forçosa i resulti d'impossible conreu o hagi de destinar-se - a un altre conreu de molt inferior rendiment al previst en el contracte, o bé el propietari faci en la finca reparacions - necessàries que provoquin una disminució apreciable en la producció de la terra, el conreador podrà triar entre rescindir - el contracte o acudir a la Junta arbitral en sol.licitud d'una rebaixa proporcional de l'arrendament.

CAPÍTOL V

DRET D'ADQUISICIÓ

Article 43. El conreador de terres, a títol de contracte agrícola, té el dret d'adquisició del seu domini mitjançant l'abonament del seu valor al propietari i el compliment dels preceptes d'aquest Capítol. Aquest dret és afilladament irrenunciable i inalienable, ni és susceptible de gravamen ni pot ésser exercit per creditors en virtut d'acció subrogatòria i encara que és inscribible en el Registre de la Propietat, no és indispensable la seva inscripció per a què tingui efectivitat.

Article 44. Per a l'exercici dels drets d'adquisició és necessària la concurrència conjunta dels requisits següents:

Primer.- Que es tracti de terra conreada en virtut de contracte d'explotació agrícola regulat per aquesta Llei.

Segon.- Que els dits contractes s'hagin mantingut per un període de més de divuit anys.

Tercer.- Que la subsistència del conreu, base del dret d'adquisició, sigui pel treball directe del que vulgui fer ús d'aquest dret o pel dels seus ascendents o descendents directes, germans cònjuges o afillats de dret.

Quart.- Que el conreador estigui al corrent de pagament del preu en el moment d'exercitar el dret d'adquisició.

Cinquè.- Que les terres que pretengui adquirir el conreador, soles o sumades a les que ja posseïa en propietat, no depassin la limitació establerta a l'art. 7^è. d'aquesta Llei.

Sisè.- Que les terres que pretengui adquirir el conreador per raó de la seva proximitat a poblacions, no siguin o no es puguin considerar com a solars urbans i no tinguin un sobrepreu de més del 50 per 100 del que tindrien com a terres exclusivament de conreu.

Article 45. El dret d'adquisició s'estén a les edificacions i millores dominials que hi hagi en la terra adquirida, sempre que, segons el contracte de conreu, correspongui el seu ús al conreador.

Article 46. En els casos de subarrendament permès en l'art. 19 d'aquesta Llei, el dret d'adquisició correspon a l'arrendatari o subarrendador, comptant-se al seu favor, per a completar el termini de divuit anys que la Llei assenyala, els anys de duració del subarrendament.

Article 47. A falta d'acord entre les parts, la determinació del preu d'adquisició s'efectuarà per la Junta arbitral, aplicant les regles que per a fixar el valor de la terra estableix l'art. 39 d'aquesta Llei.

Es deduirà del preu d'adquisició el valor de les càrregues que gravin les terres.

Article 48. El conreador podrà pagar el preu d'adquisició fixat en una sola vegada o en quinze terminis anuals amb abonament d'interessos al 5 per 100 per les quantitats degudes i no pagades.

Després de pagar el primer termini anual, l'arrendatari podrà inscriure el seu dret en el Registre de la Propietat per anotació preventiva que es cancel·larà quan s'hagi pagat el darrer termini, per a convertir-se en inscripció definitiva.

El conreador perdrà el dret d'adquisició si deixés -
d'abonar dues anualitats fixades segons el paràgraf primer -
d'aquest article.

Article 49. El dret d'adquisició deurà ésser exercit
pel conreador dintre l'any següent al naixement del dret al seu
favor pel transcurs dels divuit anys de conreu continuat, en -
els termes que la Llei determina.

Respecte dels conreadors que es trobin en condicions
legals d'exercir el dret d'adquisició en promulgar-se aques-
ta Llei, el termini d'un any establert en el paràgraf anterior
es començarà a comptar al cap de dos anys de la promulgació de
la pròpia Llei.

Article 50. El conreador que no faci ús del dret d'ad-
quisició dintre el termini establert en l'article anterior per-
drà el dret d'exercir-lo fins que hagin transcorregut altres -
divuit anys de conreu continuat.

La disposició anterior no perjudica el dret d'adquisi-
ció dels ascendents o descendents directes, germans, cònjuges
o afillats de dret del conreador que siguin els seus hereus -
legítims o testamentaris i que convisquin amb ell.

Article 51. Totes les terres que el conreador adqui-
reixi fent ús del dret d'adquisició que regula aquesta Llei, -
constituiran el patrimoni familiar, que serà inembargable i que
l'adquirent no podrà transmetre a títol onerós o lucratiu o -
qualsevol altre inter-vius.

Article 52. Quan el conreador pretengui adquirir - només una de les peces de la terra que conreï d'un mateix - propietari, ja sigui per voluntat pròpia, ja sigui en mèrits de la limitació que estableix l'apartat cinquè de l'art. 44 incumbirà a les Juntes arbitrals escollir la part que deu - ésser objecte del dret d'adquisició, de no existir previ acord entre el conreador i el propietari.

Article 53. La Junta arbitral, si el conreador ho demana, podrà concedir moratòria a la quota anual d'amortització quan s'hagi produït la pèrdua de més de la meitat de la collita normal de la finca objecte del contracte a conseqüència de les calamitats previstes en l'art. 41 d'aquesta Llei.

La Junta arbitral fixarà, al mateix temps, la repartició en els anys successius de les quotes o part de quotes ajornades.

Article 54. L'adquisició es formalitzarà sempre amb escriptura pública. Si el propietari no atorgués la corresponent escriptura en el termini que li haurà fixat la Junta arbitral, el jutge l'atorgarà en judici en nom del rebel.

Article 55. El dret d'adquisició no podrà exercitar-se pel conreador quan el contracte s'hagi atorgat pels representants legals del propietari menor d'edat, incapac o absent, o pel marit, si es tracta de terra aportada en dot inestimat.

Article 56. Contra les resolucions de les Juntes arbitral en tot el que fa referència a l'exercici del dret d'adquisició, sols hi cabrà el recurs d'apel.lació davant -- el Tribunal de Cassació de Catalunya, contra la sentència -- del qual no es donarà cap altre recurs.

CAPÍTOL VI

EL CONTRACTE DE RABASSA MORTA

Article 57. Els contractes de conreu que tinguin -- caràcter emfitèutic temporal, com els de rabassa morta i altres d'igual condició jurídica, en virtut dels quals el propietari d'un terreny el cedeix a una persona per a l'explotació agrícola, quedant aquesta obligada a rompre'l i plantar-lo o sembrar-lo a expenses principalment seves, abonant al propietari un cens o quota part anual en concepte de preu, seran considerats com a censos emfitèutics redimibles a voluntat del conreador i segons les normes d'aquesta Llei, qualsevulga que sigui la denominació i terminis assenyalats en el contracte.

Per a l'exercici del dret de redempció caldrà que el rabasser estigui al corrent de pagament en el moment de fer-ne ús.

Article 58. A manca de conveni entre les parts, la determinació del preu de redempció el fixarà la Comissió arbitral atenent-se al valor de la finca en el moment d'establir-se la rabassa.

En defecte d'aquesta dada, al valor assenyalat en l'avenc cadastral. I si aquest no existís, al valor assenyalat en l'amillament anterior a l'any 1930.

Capitalitzant, en tots els casos, el líquid imponible al 4 per 100, es sumarà o restarà al capital estimat:

a) A favor del propietari, la quantitat corresponent a l'auxili econòmic (jornals, plantes o diners), excepcionalment bestrets al rabasser per tal de plantar la rabassa o replantar-la.

b) A favor del rabasser, el dret d'entrada pagat a l'establiment de la rabassa, si en pagà.

Article 59. El just preu que resulti d'aplicar les normes de l'article anterior, el rabasser el podrà pagar en una sola vegada o en quinze terminis anuals, a pagament d'interessos al 5 per 100 per les quantitats degudes i no pagades, com es fa en les vendes a pagament ajornat.

Després de pagar el primer termini anual, el rabasser podrà inscriure el seu dret en el Registre de la Propietat - per anotació preventiva que es cancel·larà quan s'hagi pagat el darrer termini, per a convertir-se en inscripció definitiva.

Article 60. Les terres que constitueixin dot inestimat o pertanyin a menors o a incapacitats, no seran susceptibles d'ésser redimides mentre el propietari tingui els expressats caràcters jurídics.

Article 61. Durant el temps en què el rabasser no faci ús del dret de redempció i continuï subjecte al pagament del cens o quota part, podrà acollir-se al procediment de revisió del preu d'arrendament establert en el Capítol IV d'aquesta Llei.

Les Juntes arbitrals aplicaran, per a fixar l'import revisionat del cens o quota part, les mateixes normes que regulen el preu d'arrendament.

CAPÍTOL VII

DRETS DE TANTEIG, RETRACTE I RESCAT

Article 62. En les alienacions de terres subjectes a contractes, el conreador tindrà el dret de prelació i el de retracte de la terra objecte de l'alienació excepte en els casos següents:

Primer.- Quan l'alienació sigui feta a favor del propietari d'una part indivisa.

Segon.- En cas d'alienació a favor d'un fill adoptiu de dret del propietari, o dels descendents d'aquest, sempre que l'adoptat visqui en companyia de l'adoptant.

Tercer.- Quan la terra hagi estat aportada en dot inestimat.

Quart.- Quan l'alienació no ha estat feta a títol oneros.

Article 67. Els contractants fixaran en el contracte l'import del 25 per 100 del capital d'explotació i determinaran la mena de les aportacions del propietari i valoraran cada una d'elles. També es puntualitzarà en el contracte la proporció en què s'hauran de partir entre els contractants - els productes de l'explotació agrícola i la forma d'intervenir el propietari en la recolecció de fruits.

Article 68. Es consideraran aportacions del propietari totes les que faci sense estar-hi obligat per altres articles d'aquesta Llei, com ara subministre d'aigua de regadiu, jornals fets pel propietari o pagats per ell, l'amortització de les plantacions fetes pel propietari, els edificis i construccions, els serveis d'instal·lacions mecàniques, els avençaments en metàl·lic o en gra de sembradors, adobs, remeis, - entreteniment de carros i altres de semblants.

Les amortitzacions de les plantacions no podran pactar-se per menys de deu anys ni per un temps més llarg de la durada normal de la planta.

Article 69. Es consideraran aportacions del conrea-dor l'import dels jornals de tota mena que faci o aboní, segons el preu de la localitat, els avençaments en metàl·lic o en gra de sembradura, adobs, remeis, l'amortització de les plantacions que hagi fet, serveis en instal·lacions, mecàniques, entreteniment de carros i altres d'anàlegs.

Article 70. El contracte de parceria es regirà per les disposicions relatives al contracte de societat, entenent-se que és una societat civil particular.

La duració del contracte s'establirà per un termini mínim de sis anys, prorrogables fàcilment per iguals períodes - contractats. Cada termini de contracte podrà rescindir-se per les parts avisant amb un any agrícola d'anticipació.

Article 71. La distribució dels productes o beneficis entre el parcer i el propietari es farà en proporció a - les respectives aportacions, però el parcer no podrà rebre - menys de la meitat ni el propietari menys d'un terç.

Als únics efectes de determinar aquesta proporció d'a- portacions, es tindrà en compte el preu d'arrendament de la - terra, calculat en la forma disposada en l'article 39 d'aques- ta Llei.

Article 72. Les Juntes arbitrals seran les úniques competents per entendre de l'import del tant per cent de capi- tal d'explotació aportat pel propietari i, per tant, per a - fixar la naturalesa jurídica del contracte. També entendran en tots els problemes econòmics que respecte a aportacions, a participació de productes o beneficis i a liquidació es sus- citin entre els contractants.

Article 73. Es considerarà causa de rescisió del contracte:

- a) Manifestes deficiències en el conreu.
- b) Perjudicis evidents i de mala fe ocasionats a la propietat.
- c) Deslleialtat en frau contra el propietari en el lliurament dels productes de la terra.

L'acció es plantejarà davant la Junta arbitral de -
districte.

CAPÍTOL IX

JUNTES ARBITRALS

Article 74. En cada cap de districte el Govern de la Generalitat organitzarà una Junta arbitral que coneixerà privativament totes les qüestions que resultin de l'aplicació - o interpretació d'aquesta Llei. Excepcionalment, quan ho determini el Govern de la Generalitat, una Junta arbitral podrà - estendre la seva jurisdicció a un o més partits judicials - limítrofs.

Article 75. Cada Junta arbitral es compondrà d'un President, quatre Vocals i quatre suplents. Actuarà de Secretari, a falta de designació especial, el que ho sigui del Jutjat de primera instància o el Secretari del Municipi del Cap de partit.

Article 76. Els Presidents de les Juntes arbitrals seran nomenats pel Govern de la Generalitat a proposta d'un Tribunal encarregat de jutjar un concurs-oposició que en cada cas es convocarà a l'efecte.

Article 77. En el Decret de la Generalitat que ordenarà la constitució d'una Junta arbitral s'obrirà un període de quinze dies, durant el qual els propietaris i els conreadors podran inscriure's en els Ajuntaments respectius per a la formació dels censos dels dos estaments de la jurisdicció territorial.

Article 78. Aprovats els censos de cada un dels dos estaments en la forma que determinarà el Reglament, la Generalitat convocarà eleccions entre els inscrits per al nomenament dels Vocals i Suplents de la Junta, la meitat per cada un dels dos estaments. Seran elegibles els que reuneixin les circumstàncies d'idoneïtat següents:

Primera.- Saber llegir i escriure.

Segona.- Tenir plena capacitat civil.

Tercera.- Residir en el territori jurisdiccional respectiu en ésser designats i durant els dos anys anteriors.

Quarta.- No haver estat condemnat per delictes comú.

Article 79. El càrrec de membre de la Junta arbitral és obligatori i durarà dos anys.

Només podran excusar-se'n els designats, per justa causa, apreciada pel President de la Junta.

El membre que degudament convocat no acudi a exercir les seves funcions, sense causa justificada, podrà ésser sancionat pel President amb una multa de 10 a 50 pessetes.

Article 80. El càrrec de membre de la Junta és gratuït. Però els Vocals tindran dret que se'ls abonin les despeses de viatge i estada, i els jornals que deixin de percebre.

Article 81. La competència de les Juntes arbitrals en el coneixement de les qüestions en què entenen segons aquesta Llei, es determinarà exclusivament, per la situació de les terres objecte del contracte de conreu.

La incompetència de la Junta haurà de declarar-la d'ofici el President, quan procedeixi.

Si no ho fa, i és estimada definitivament la incompetència pel Tribunal de Cassació, en resoldre l'apel·lació se li podran imposar les costes.

Article 82. Per a prendre acord es requerirà la presència del President i un dels membres, almenys, dels designats per cada estament.

Quan un assumpte s'hagi de sotmetre a votació deuran prendre part en la mateixa igual nombre de membres de cada estament. Els acords es prendran per majoria i el President sols tindrà vot quan hi hagi empat, en qual cas amb el seu vot decidirà la qüestió.

El President, endemés de la facultat decisòria que té en les votacions, podrà, abans d'arribar a la votació, proposar fórmules transaccionals que facin possible l'avinença entre els dos estaments, i en tot cas abans de decidir la votació podrà reclamar els assessoraments jurídics o tècnics que consideri convenientes.

Article 83. Les Juntas arbitrals en qualsevol moment de la tramitació podran invitar els interessats a l'avinença.

També procuraran indicar-los qualsevulla falta o omissió soferta en el plantejament i defensa de les qüestions per tal que puguin subsanar-les.

Article 84. Un cop acabat el judici arbitral, que no podrà durar més de trenta dies, la Comissió, en el laude dictat dintre d'aquell termini, haurà de resoldre totes les qüestions plantejades.

Article 85. Contra els laudes de les Comissions - arbitral escaurà apel.lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya, sense cap altre recurs.

Article 86. El recurs d'apel.lació haurà d'interposar-se davant del President de la Junta dintre els deu dies següents al de la notificació del laude, expressant, en forma concreta, les al.llegacions que s'estimin procedents.

D'aquest escrit es donarà vista a la part apel.lada, la qual podrà replicar dins el termini de deu dies.

Transcorregut aquest termini s'elevant els autes al Tribunal de Cassació de Catalunya.

Article 87. La Sala corresponent del Tribunal de Cassació, fins el termini de seixanta dies, podrà acordar la pràctica de proves i la celebració d'una compareixença i després - d'aquests tràmits dintre del termini expressat dictarà les resolucions definitives.

Les resolucions del Tribunal de Cassació de Catalunya seran executives per tots els procediments establerts en les - lleis processals vigents.

ARTICLES ADDICIONALS

I.- L'any agrícola s'entén que comença el dia primer - de novembre d'un any i acaba el dia primer de novembre de l'any següent.

II.- Per regular l'aplicació d'aquesta Llei, el Conseller de Justícia i Dret formularà un Reglament, del qual donarà compte al Parlament.

III.- L'aplicació i execució de la Llei correspon al Conseller de Justícia.

L'execució dels laudes fermes pertocarà a la jurisdicció civil ordinària en tots els casos que determini el Reglament d'aquesta Llei i pel procediment civil d'execució de sentències.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Tots els contractes existents a la promulgació de la Llei s'hauran d'ajustar als seus preceptes.

Des del dia de la promulgació de la Llei s'obrirà un període de revisió general de preu, durant el qual, en la forma disposada en els arts. 38 i 39, les Juntes arbitrals procediran a la revisió d'aquells contractes que, per no estar d'acord el propietari i el conreador, li siguin presentats.

Des del dia de la promulgació d'aquesta Llei fins al moment d'haver-se acceptat per les dues parts contractants la revisió, i en cas de desavinença, mentre no sigui ferma la revisió en els contractes subjectes a la mateixa, l'arrendatari pagarà a compte de l'arrendament.

a) En els contractes afectats en la Llei de Conflictes, el 50 per 100 del preu d'arrendament o quota part.

b) En els altres contractes no afectats per la Llei de Conflictes, el 75 per 100 del preu contractual o de la quota part establerta.

c) En els contractes d'aparceria compresos en el Capítol VIII d'aquesta Llei, sotmesos a la revisió, pagaran els parcers la part contractual convinguda. Els contractes de parts de fruits sense aportacions de propietari o quan aquells no arribin al mínim del 25 per 100 establert per aquesta Llei, es consideraran contractes d'arrendament i compresos en l'apartat b.

Un cop aprovada la revisió, el propietari o el conreador hauran de pagar a l'altra part la diferència entre el preu revisat i la quantitat pagada a compte.

Els beneficis inherents a les demandes de revisió que regulen les disposicions anteriors es referiran només a les que siguin presentades durant tot l'any 1934.

Segona.- Podran exercitar immediatament el dret d'adquisició regulat en el Capítol V de la Llei els que haguessin venut terres a carta de gràcia i que després de venudes les hagin continuat conreant en concepte de parcers o masovers o arrendataris.

El preu no podrà ésser superior al que s'estipulà en l'escriptura de venda a carta de gràcia.

Tercera.- En els casos que els cultivadors que menaven terres en virtut de contracte verbal o escrit de rabassa morta acreditin que han estat desposseïts de les mateixes - durant el període de 1923 a 1931 podran entaular recurs de revisió davant la Comissió arbitral corresponent per tal que es declari nul el desposseïment i sigui restablert en la possessió de què gaudia, sempre que el fet no sigui produït per falta de pagament.

Si les terres a què es refereix aquesta disposició - actualment les cultivés un altre conreador, aquest cessarà al final de l'any agrícola en curs.

Quarta.- Els conreadors que portin terres en arrendament pertanyents a col·lectivitats o organismes que no tinguin caràcter públic, les quals han d'ésser considerades com a béns de "mà morta", pel fet de no haver estat subjectes a transmissions durant els vuitanta anys darrers, gaudiran de tots els beneficis continguts en el Capítol VI, "El contracte de rabassa morta".

Cinquena.- El propietari propi conreador que dintre els cinc anys darrers i per circumstàncies d'impossibilitat física accidental o altres similars determinades pel Reglament hagi arrendat terres per contracte d'aparceria regulat pel Capítol VIII podrà donar-lo per finit en el terme contractual, sempre que vulgui novament treballar la terra directament. Si es tracta de contractes vençuts podrà fer ús d'aquesta disposició, - donant el conreador un any agrícola de pre-avis, en termini oportú a ús i costum de la comarca.

L'acció haurà d'exercitar-se davant la Junta arbitral corresponent durant l'any 1934.

Sisena.- Les Juntes arbitrals de districte constituïdes per a entendre en la Llei de conflictes continuaran actuant fins un termini màxim de tres mesos a comptar de la data de promulgació de la present Llei en el qual termini hauran d'haver resolt totes les demandes.

La Junta arbitral superior constituïda per la Llei de Conflictes continuarà actuant fins el 31 de desembre del 1934; en aquesta data hauran de tenir resoltes totes les apel.lacions.

Ni una ni altra Junta no podran entendre en altres demandes que les regulades per les disposicions de la Llei de conflictes.

Palau del Parlament, 21 març del 1934.

LLEI DECLARANT AMB FORÇA DE LLEI EL DECRET DE 6 DELS
CORRENTS APROVANT EL REGLAMENT PER A L'APLICACIÓ DE
LA LLEI DE CONTRACTES DE CONREU DEL 14 DE JUNY DEL -

1934

Art. 1^r. Es declara amb força de Llei el Decret del Govern de la Generalitat de 6 dels corrents aprovant el Reglament per a l'aplicació de la Llei de Contractes de Conreu del 14 de juny proppassat.

Art. 2ⁿ. S'autoritza el Govern de la Generalitat per a publicar un text refós que compregui els preceptes vigents de la Llei del 14 de juny proppassat i del Reglament de 6 de setembre corrent, que serà invocat davant de les Juntes Arbitrals i Autoritats judicials amb la denominació de Llei de Contractes de Conreu.

Palau del Parlament, 13 de setembre del 1934.

REGLAMENT PER A L'APLICACIÓ DE LA LLEI
DE CONTRACTES DE CONREU

TITOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1^r. Els pactes convinguts o que es convinguin en tots els contractes de conreu definits en l'art. 1^r. de la Llei s'adaptaran als preceptes d'aquesta.

Si en un contracte de conreu actualment existent, o que es convingui més endavant, hi figura algun pacte contrari als preceptes de la Llei, aquest pacte no tindrà força d'obligar, i subsistirà el contracte amb totes les seves altres condicions.

Article 2ⁿ. Les Juntes Arbitrals, que a Catalunya - assumiran les funcions que les lleis generals de l'Estat - atribueixen als Jurats Mixtos de la Propietat rústica, entendran en totes les qüestions que plantegi la força d'obligar - d'un pacte contractual pel fet d'estar en contradicció amb els preceptes de la Llei.

Les resolucions de les Juntes Arbitrals sobre aquestes qüestions seran apel·lables davant del Tribunal de Cassació.

Art. 3^r. El conreador que recorri davant de la Junta Arbitral corresponent en ús del dret que li atorga el paràgraf segon de l'art. 3^r. de la Llei, haurà de far-ho mitjançant demanda en la qual raonarà la conveniència d'arrencar o tallar qualsevol arbre de la finca per a la millor explotació econòmica d'aquesta.

La Junta Arbitral, després d'escultar el propietari, resoldrà la instància sense ulterior recurs.

Art. 4^t. Per precepte de la Llei serà nul tot pacte que estatueixi el pagament per endavant. Per adaptar a la Llei els contractes existents on figuri aquest pacte, els pagaments seran fets un cop transcorreguda l'anualitat satisfeta per endavant, per mitges anualitats vençudes.

Art. 5^è. Cap contracte de conreu no es podrà referir a una extensió de terra superior a la que requereixi, a més del treball del conreador, dels seus ascendents i descendents directes, germans, afillats de dret d'aquell o del seu cònjuge, el treball de jornalers en proporció superior a la quarta part de la feina durant l'any agrícola, o de la tercera part d'aquesta feina quan es tracti de terres de regadiu que siguin objecte de cultiu intens.

Per a comptar el treball dels ascendents i descendents directes i germans o afillats de dret del conreador i del seu cònjuge serà necessari que cooperin habitualment en les seves tasques de conreu i que llur domicili sigui de fet i de dret el del conreador.

Els dependents, mossos, empleats o qualsevol altres persones que estiguin al servei del conreador i no tinguin la condició de familiars seus, en els termes precisos que la Llei i aquest Reglament assenyalen, seran considerats jornalers als efectes de l'art. 7^è. de la Llei.

Per a calcular la part de treball de jornalers necessari per al bon conreu de la peça de terra objecte del contracte, es tindran en compte tots els jornals necessaris durant un any agrícola, als diversos cultius de què sigui objecte i la capacitat de treball dels familiars del conreador. Així mateix es tindrà en compte l'extensió de totes les terres que el conreador posseeixi en propietat o en mèrits d'altres contractes de conreu. Per al càmput de jornals s'exclouran els que siguin precisos circumstancialment per a les labors de recollida.

Art. 6^è. Les denúncies a què fa referència l'art. 8^è. de la Llei hauran d'ésser formulades davant de la Junta Arbitral corresponent per veïns de la població on radiqui la finca o finques objecte de les dites denúncies.

Aquestes denúncies seran tramitades per les Juntes Arbitrals, de conformitat amb el que disposa el cap, III del títol VIII d'aquest Reglament.

Art. 7^è. Les Juntes Arbitrals, en compliment de l'últim paràgraf de l'article 8^è. de la Llei, portaran un llibre especial on constarà la llista dels conreadors de cada localitat que, o bé per pròpia manifestació, o bé per coneixements que les Juntes posseeixin, necessitin terra per a millorar llur situació econòmica o per a sortir de llur condició de jornalers.

La classificació entre els components de cada llista es farà tenint en compte llurs majors dificultats econòmiques.

Així mateix portaran una llista de les Cooperatives o Sindicats de producció agrícola legalment constituïts a cada localitat.

Art. 8^b. Quan, en mèrits d'una denúncia feta per - infracció del que disposa l'art. 7^b. de la Llei, hi hagi sobrant d'una peça de terra objecte d'un contracte de conreu, - la Junta Arbitral, exercitant la facultat que la Llei li concedeix en el paràgraf últim de l'art. 8^b., determinarà quina és la porció de terra que cal segregat de la que fou objecte del contracte, i procurarà salvaguardar la unitat del conreu i produir el mínim de perjudici al propietari.

Art. 9^b. La Junta Arbitral, una vegada comprovada la infracció de l'article 7^b., i per al compliment de l'art. 8^b., posarà en coneixement del propietari la resolució dictada i el requerirà perquè, dintre del termini d'un any, arrendi lliurement a un nou conreador la terra sobrant, o assumeixi directament el cultiu, d'acord amb els preceptes d'aquest Reglament.

Si el propietari deixa transcórrer el termini expressat i no al·lega justa causa a judici de la Junta Arbitral, aquesta quedarà facultada per a arrendar en nom del propietari al - denunciant o a una altra persona la part de finca que resti - inculta.

Art. 10. Les resolucions de la Junta Arbitral referents a l'aplicació dels articles 7^b. i 8^b. de la Llei, podran ésser objecte de recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Cassació, únicament quan donin lloc a les denúncies formulades.

Art. 11. Quan el contracte de conreu es formuli en document privat, s'estendrà, per triplicat, en els impresos ajustats als models 1, 2, 3 i 4 que figuren com a anex d'aquest Reglament.

Dins el termini de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquest Reglament al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, tots els contractes verbals, o que constin en document privat, hauran de transcriure's d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.

L'incompliment d'aquesta obligació donarà dret a les Junes Arbitrals a fer reintegrar del doble al dècuple els contractes que se li presentin.

Transcorregut aquest termini de sis mesos, les Junes Arbitrals no podran admetre cap instància sense l'existència - de contracte escrit, a menys que es demostrï la resistència - d'una de les parts a subscriure'l; en aquest cas serà aquesta l'obligada per la sanció anterior.

Art. 12. Quan el contracte s'atorgui en document privat, s'estendrà per triplicat, en els impresos ajustats als models 1, 2, 3 i 4 a què es refereix l'article anterior i en els quals constaran les condicions bàsiques derivades de la Llei - i d'aquest Reglament, tot deixant a la lliure determinació dels contractants les indicacions especials que vulguin prester el propietari i el conreador.

Un dels exemplars d'aquest contracte serà presentat, a l'Arxiu-Registre de Contractes de Conreus que la Generalitat - crearà.

Al marge dels exemplars constarà l'exercici pel conreador del dret d'adquisició regulat per la Llei.

TITOL II

DURADA DELS CONTRACTES

Art. 13. Els contractes d'arrendament que tinguin fixat un termini de duració, es consideraran prorrogats per tàcita reconducció, any per any, a no ésser que es produïxi alguna de les circumstàncies que segons la Llei i aquest Reglament donen lloc a la resolució de contracte, o que l'arrendatari expressi per escrit la seva voluntat de donar-lo per finit.

En aquest cas durant l'últim any del termini contractual qualsevol de les seves pròrrogues, i, almenys, sis mesos abans del seu venciment l'arrendatari que vulgui donar per finit el contracte vindrà obligat a avisar l'arrendador per escrit la seva voluntat de donar-lo per finit. D'aquest escrit podrà exigir-ne rebut a l'arrendador, i en el cas que aquest no vulgui lliurar-lo formularà l'avis, per escrit també, davant de la Junta Arbitral corresponent que es limitarà a cursar-lo i estendrà el pertinent rebut a l'arrendatari.

Art. 14. L'exercici, pel conreador, dels drets que li atorga l'art. 11 de la Llei haurà de basar-se en l'existència de vicis ocults en la cosa arrendada o en el perjudici que s'hagi causat a l'arrendatari per mala fe del propietari i haurà de fer-se davant de la Junta Arbitral corresponent. L'abandó de la terra haurà d'ésser avisat amb sis mesos d'anticipació, i solament podrà realitzar-se si el conreador està facultat en mèrits de la decisió de la Junta Arbitral corresponent.

L'incompliment, per part del conreador, d'aquestes obligacions, donarà dret al propietari a les indemnitzacions corresponents de danys i perjudicis.

Art. 15. L'exercici pel propietari, dins de l'any següent d'haver entrat en ple domini de la seva propietat, -- del dret de revisió especial de preu que li atorga l'art. 12 de la Llei, davant de la Junta Arbitral, haurà de fer-se mitjançant demanda, a la qual caldrà acompanyar obligatòriament els documents provatoris de la nova situació jurídica del -- propietari.

De la mateixa manera hauran d'exercitar el dret de la revisió especial de preu els propietaris que es trobin en la situació jurídica regulada per l'art. 13 de la Llei.

Art. 16. Sis mesos abans d'acabar el termini contractual, o alguna de les seves pròrrogues, el propietari que vulgui exercitar el dret de reserva establert en l'art. 14 de la Llei, haurà de fer-ho davant de la Junta Arbitral corresponent, mitjançant demanda en la que consti:

a) Que no es troba impedit per a exercitar aquest dret en mèrits de la limitació establerta en l'art. 7^è. de la Llei i reproduïda en el paràgraf segon de l'art. 14 d'aquesta.

b) Que ha notificat al conreador, per escrit, en la mateixa forma establerta en l'art. 13 d'aquest Reglament, un any abans del termini de duració del contracte o de la pròrroga en curs, la seva decisió de reprendre la terra.

c) Que s'obliga a conrear la terra directament ell o els seus descendents o afiliats per dret que facin vida comuna amb ell per un termini no menor a sis anys.

d) Que les terres no estan subjectes al dret d'adquisició regulat en aquesta Llei.

e) Que s'obliga a pagar les millores al conreador, en la forma fixada per la Llei, i una indemnització equivalent a una anualitat de renda per cada sis anys que faci que dura el contracte, o el document acreditatiu d'haver-ho ja fet.

Art. 17. La Junta Arbitral, després de practicades les proves ofertes pel propietari i pel conreador i les que cregui adients per a formar millor judici, dictarà laude declarant la procedència o improcedència de l'exercici del dret de reserva a què fa referència l'article anterior.

Contra la resolució de la Junta Arbitral podrà interposar-se recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya.

Art. 18. L'exercici dels drets que confereix a l'arrendatari, desposseït en mèrits del dret de reserva del propietari, l'art. 15 de la Llei, tant per a reprendre la terra com per a percebre la indemnització establerta per al cas de venda, haurà de tenir lloc davant la Junta Arbitral corresponent, mitjançant presentació de l'oportuna demanda.

Art. 19. L'exercici dels drets que atorga l'art. 17 de la Llei als hereus legítims o testamentaris que siguin ascendents o descendents directes del conreador, la seva muller o els seus afiliats de dret, haurà de notificar-se al propietari abans de transcorreguts els tres mesos següents a la mort del causant i els seus adquirents quedaran subrogats, activament i passiva, en la condició jurídica que ostentava el conreador. Aquesta notificació es farà per escrit, del qual podrà exigir-se'n rebut a l'arrendador i, en el cas que aquest el negués, es formularà la notificació per escrit, també a la Junta Arbitral, la qual en lliurarà el rebut corresponent.

Si el causant estava exercitant el dret d'adquisició, els seus drets-havents hauran de notificar a l'arrendador, per mitjà de la Junta Arbitral, la subrogació, quant a l'exercici d'aquest dret, i la Junta Arbitral, per la seva part, estarà obligada a posar la subrogació en coneixement del Departament de Justícia i Dret de la Generalitat perquè cauei l'oportuna nota en el seu Arxiu-Registre de Contractes de Conreu.

Art. 20. En els casos previstos per l'art. 16 de la Llei, el propietari que per qualsevol títol cedeixi o gravi la finca estarà obligat a notificar l'existència del contracte de cultiu a l'adquirent o titular del dret real, el qual, als efectes de l'art. 27 de la Llei Hipotecària, en serà considerat coneixedor, encara que el dit contracte no estigui especialment inscrit al Registre.

Art. 21. Els adquirents del dret per causa de mort podran donar per finit el contracte dins dels tres mesos següents a la mort del causant, en la mateixa forma que preceptua l'article anterior; però hauran de continuar el conreu fins a l'acabament de l'any agrícola en curs. L'incompliment pels drets-havents del conreador d'aquesta obligació donarà al propietari dret a exigir, davant de la Junta Arbitral, la corresponent indemnització de danys i perjudicis.

Art. 22. Els sots-arrendaments i, en general, tot contracte de conreu que tingui per objecte el dret derivat d'un altre contracte d'igual naturalesa, són il·legals, de conformitat amb el que disposa l'art. 19 de la Llei.

Els sots-arrendataris, durant el primer any de vigència de la Llei, podran deduir demanda davant de la Junta Arbitral competent transformant el contracte de sots-arrendament en contracte d'arrendament amb el propietari. La Junta Arbitral acordarà el pagament directe al propietari.

Art. 23. Transcorregut un any de vigència de la Llei sense que el sots-arrendatari hagi fet ús del dret relacionat en l'article anterior, el sots-arrendador podrà, durant el mig any següent, rescindir el contracte de sots-arrendament i desnonar judicialment el sots-arrendatari.

Art. 24. Transcorregut un any i mig de vigència de la Llei, sense que el contracte de sots-arrendament s'hagi resolt en mèrits del que disposen els dos articles anteriors, el propietari podrà desnonar judicialment l'arrendatari, com a comprès en l'extrem d de l'art. 22 de la Llei.

Art. 25. L'existència del dret a sots-arrendar pel conreador en estat de vallesa o impossibilitat física, pels representants legals dels seus hereus menors d'edat i per la vídua que hagi adquirit del marit el dret de conreu, haurà de declarar-se per la Junta Arbitral corresponent, la intervenció de la qual serà sol·licitada mitjançant instància en la qual s'acreditin les expressades circumstàncies.

Aquests sots-arrendaments duraran mentre concorrin les repetides circumstàncies. Correspondrà també a la Junta Arbitral la declaració de llur acabament i, per tant, l'exercici dels drets que per a la resolució dels sots-arrendaments estableixen els tres articles anteriors; els terminis en ells establerts seran comptats des del dia que la Junta Arbitral declari la inexistència o l'acabament del dret a sots-arrendar per causes especials.

Art. 26. A les Juntes Arbitrals correspon de declarar extingit l'arrendament per haver finit el termini establert. Aquesta declaració caldrà sol·licitar-la mitjançant instància i donarà dret a desnonar judicialment l'arrendatari.

Art. 27. L'incompliment d'obligacions contractuals o legals del contracte de conreu per un dels interessats donarà dret a l'altre a demanar la rescissió del contracte. El que hagi complert les obligacions legals o contractuals tindrà dret a demanar la indemnització dels danys i perjudicis soferts i la resolució del contracte, o solament aquella indemnització, si renuncia a la resolució del contracte.

El fet de l'incompliment de les obligacions contractuals o legals haurà d'ésser declarat provat per la Junta Arbitral corresponent, la qual, si s'escau, fixarà també l'import dels perjudicis a indemnitzar.

Les Juntes Arbitrals podran accedir o refusar la rescissió del contracte encara que acordin el pagament d'una indemnització, sempre que no es demostrï mala fe en l'incompliment de les obligacions contractuals o legals i la indemnització fixada es faci efectiva.

Aquesta decisió de les Juntes Arbitrals sobre la resolució dels contractes per incompliment d'una de les parts serà recorrible davant del Tribunal de Cassació.

Art. 28. Quan l'arrendatari desixi de conrear la terra o l'abandoni per més d'un any o la destini a un ús que no sigui el de conreu, l'arrendador podrà sol·licitar de la Junta Arbitral corresponent que declari escaient l'exercici de l'acció de desnonament davant de la jurisdicció ordinària.

La Junta Arbitral si considera provats aquells fets, farà la declaració interessada.

Contra la decisió de la Junta Arbitral cabrà recurs davant del Tribunal de Cassació.

Art. 29. En el cas de manca de pagament a què fa referència el paràgraf segon de l'art. 23 de la Llei, el conreeador podrà evitar el desnonament consignant en la taula del Jutjat, dintre dels vuit dies següents a la citació, l'arrendament endarrerit juntament amb l'import de les costes causades per la seva culpa fins el moment de la consignació.

Art. 30. Quan la resolució del contracte de conreu tingui com a causa la manca de pagament de l'arrendament convingut en el contracte o el fet d'haver deixat de cultivar la terra per abandó de més d'un any, o de destinar-la a un ús que no sigui el de cultiu, l'arrendatari podrà ésser desnonat sense necessitat d'esperar que fineixi l'any agrícola; però si el cultivador reclama aleshores plantacions o qualsevol altra cosa que hagi quedat a la finca, es procedirà de conformitat amb el que preceptuen els articles 1.600, 1.604 al 1.607 de la Llei d'Enjudiciament Civil, sense perjudici del que escaigui respecte al pagament de millores, d'acord amb el capítol III de la Llei i títol 3^r. d'aquest Reglament.

Art. 31. En el cas previst en l'article 25 de la Llei, l'arrendatari tindrà dret a una quarta part del sobrepreu de la finca que es vengui o edifiqui, i en el cas d'expropiació forçosa a què es refereix l'art. 26, l'arrendatari percebrà un 25 per 100 del preu abonat al propietari, en la part que excedeixi del valor de la finca, apreuat segons les normes que regulen el dret d'adquisició.

Art. 32. El propietari que pretengui edificar o vendre amb aquest objecte terres que segons l'art. 25 de la Llei es puguin considerar com a solars, presentarà instància davant de la Junta Arbitral demanant la resolució del contracte i obligant-se a començar les obres dintre del termini d'un any.

El comprador, si s'escau, signarà la instància del propietari i la Junta Arbitral, per significar que contreu, per la seva part, l'obligació d'edificar dintre del mateix termini.

La Comissió Arbitral donarà per resolt el contracte i ficarà el preu de l'arrendament; en el cas que la resolució no afecti tot el terreny.

Si el propietari o el conreador incompleixen l'obligació d'edificar, contreta dins el termini assenyalat, el conreador podrà presentar demanda davant de la Junta Arbitral, reivindicant el conreu del terreny, i tindrà dret al triple del preu que en la quantia proporcional a l'expressat terreny abonat el darrer any o aquella major indemnització dels danys i perjudicis soferts.

Art. 33. El propietari a qui es notifiqui l'exercici del dret d'expropiació forçosa ho farà saber dintre del tercer dia, per escrit, al conreador i, en el cas que aquest es negui a lliurar l'oportú rebut de l'avis, ho comunicarà per instància a la Junta Arbitral, la qual efectuarà la notificació i lliurarà rebut al propietari.

Art. 34. El conreador que porti més de deu anys a la finca presentarà instància dintre del termini de deu dies a la Junta Arbitral, i aquesta participarà l'existència del dret del conreador a la Corporació pública que faci ús del dret d'expropiació, a tots els efectes de l'article 25 de la Llei.

En el cas de no donar-se avís al conreador, aquest podrà fer valer el seu dret davant de la Junta Arbitral dintre del termini de deu dies, a comptar del dia que tingui coneixement de l'expropiació.

TITOL III

MILLORES

Art. 35. Extingit per qualsevol causa un contracte de conreu, el conreador podrà reclamar al propietari l'abonament de les despeses necessàries i les millores útils fetes per aquell a la terra, sempre que hi subsisteixin en ell al deixar la finca.

La prova de les millores realitzades correspondrà sempre al qui les reclami.

El conreador o el propietari que no s'avinguin respecte a la naturalesa de les millores, sotmetran la qüestió a la Junta Arbitral corresponent.

No es tindrà per vàlid cap pacte privat respecte a la indemnització per millores que no es consigní per escrit.

Art. 36. El conreador que consideri precis de practicar alguna reparació necessària o extraordinària per a conservar la terra o les edificacions que en formin part, ho participarà, per escrit, al propietari, i si aquest no compleix la seva obligació, presentarà sol.licitud a la Junta Arbitral corresponent, la qual, després d'escoltar el propietari i de practicar les proves adients, resoldrà respecte a la necessitat de les reparacions proposades i atorgarà, si s'escau, el permís oportú, per a realitzar-les a compte del propietari, en el cas que aquest no s'avingui a realitzar-les dintre el termini que la Junta Arbitral hagi fixat.

Art. 37. La Junta Arbitral fixarà l'import de les despeses necessàries o de les reparacions extraordinàries a realitzar, i aprovarà o rectificarà els comptes que el conreador haurà de presentar, dintre del termini dels deu dies següents a l'acabament de les dites reparacions.

El conreador, immediatament després d'aprovat els comptes per la Junta Arbitral, podrà reclamar l'import fixat per aquesta davant de la jurisdicció ordinària i pels tràmits d'execució de sentències.

Art. 38. Quan el conreador cregui convenient de realitzar millores útils i no arribi a un acord amb el propietari, presentarà instància davant la Junta Arbitral, proposant llur realització, acompanyada d'un pressupost de llur cost. La Junta Arbitral, després de practicar les proves que proposin el conreador o el propietari i de practicar les que cregui pertinents, acordarà o no la realització de les millores. En el cas que la Junta cregui convenient la realització de les millores, aprovarà el pressupost presentat pel conreador, o en formularà un altre que cregui més just, i autoritzarà el conreador per a la pràctica de les millores, sense que llur import pugui excedir del total de la valoració feta. Finides les obres o reparacions de millores, la Junta Arbitral en comprovarà la realització i n'aprovarà l'import.

Art. 39. Quan el propietari doni per finit el contracte, el conreador no podrà reclamar l'abonament de despeses i millores realitzades durant els dotze darrers mesos de la seva vigència, llevat en el cas d'haver-se realitzat de comú acord, que consti per escrit, o d'haver resultat la seva conveniència la Junta Arbitral, de conformitat amb el que preceptua l'article anterior.

Art. 40. Si el propietari fa ús del dret de reserva de terres que permet l'art. 14 de la Llei, haurà d'abonar al conreador les despeses de rompuda de terres, explanacions, - plantacions, construccions i altres obres anàlogues, efectuades pel conreador en compliment d'obligacions contractuals.

L'import de les expressades obres, en el cas de desacord entre els interessats, serà fixat per la Junta Arbitral després d'escoltar el conreador i el propietari i de practica- cades les proves que ofereixin aquelles, si la Junta Arbitral ho creu pertinent.

Art. 41. No seran abonables en cap cas al conreador les despeses necessàries, ni les millores útils, ni els treballs i les obres a què fa referència l'article anterior, - quan aquell abandoni el conreu de la terra. No obstant això, quan el propietari vulgui reclamar indemnització per danys i perjudicis, en mèrits de l'abandó, haurà de sol.licitar de - la Junta Arbitral corresponent la valoració de les dites obres, el treball i les millores, per a deduir-lo de l'import de la indemnització.

Art. 42. Quan el conreador sol.liciti la resolució del contracte, haurà de reclamar també el pagament de les - millores, siguin útils o necessàries, a què tingui dret, i la Junta Arbitral fixarà llur import. En el cas de donar-se lloc a la resolució del contracte sense que el conreador hagi reclamat l'import de les millores, es considerarà que hi re- nuncia, i aquesta renúncia es tindrà per vàlida.

Art. 43. L'abonament de millores al conreador serà compensable amb les quantitats que aquest degui al propietari per danys o deterioraments de la terra de què sigui responsable, o per preu no satisfet, sempre que hi concorrin els següents requisits:

- a) Que ambdós deutes consisteixin en una quantitat de diners o essent fungibles les coses degudes, siguin de la mateixa espècie i de la mateixa qualitat.
- b) Que els deutes hagin vençut.
- c) Que siguin líquids.
- d) Que sobre cap d'ells no hi hagi retenció o contenció judicial promoguda per tercera persona i oportunament notificada al deutor.

Art. 44. Quan el propietari, d'acord amb l'art. 36 de la Llei, realitzi millores d'embelliment i comoditat, el conreador podrà deduir demanda davant de la Junta Arbitral, per tal que li sigui reduït el preu d'arrendament en la proporció en què resulti perjudicada la producció de la terra. La Junta Arbitral, després d'escoltar el propietari i de practicar les proves que cregui adients, dictarà resolució accedint o denegant la rebaixa del preu de l'arrendament.

Aquesta resolució serà apel.lable davant del Tribunal de Cassació de Catalunya.

TITOL IV

REVISIONS

Art. 45. Quan el conreador reclami la revisió, als efectes de l'art. 41 de la Llei, haurà de fer-ho presentant demanda especial a la Junta Arbitral corresponent, consignant les dades concretes que hagin de servir de base a la revisió i oferint les proves adients. La Junta Arbitral, escoltades

les parts i practicades les proves proposades per aquestes i les que cregui convenientes per a millor proveir, decidirà la procedència o improcedència de la rebaixa, fixarà el preu i el termini durant el qual ha de regir el nou preu contractual.

Art. 46. Si abans de transcórrer els sis anys que - fixa l'art. 40 de la Llei per a demanar nova revisió del preu d'arrendament, la sol.licita qualsevol de les parts, el laude anterior produirà exenció de cosa jutjada i s'arxivarà la sol.licitud sense més tràmit.

Art. 47. Quan durant un contracte de conreu una part de la terra desaparegui o sigui afectada d'expropiació forçosa i resulti d'impossible conreu o hagi de destinar-se a un altre conreu de molt inferior rendiment al previst en el contracte, - o bé el propietari faci a la finca reparacions necessàries que provoquin una disminució apreciable en la producció de la terra, el conreador podrà optar entre rescindir el contracte o acudir a la Junta Arbitral en sol.licitud d'una rebaixa de - l'arrendament.

La declaració que la terra ha de destinar-se a un altre conreu d'inferior rendiment, escau de fer-la a la Junta - Arbitral, i el conreador haurà de sol.licitar-la mitjançant instància, expedida dintre els sis mesos següents a la data en la qual acabin de produir-se els fets que provoquin la revisió.

L'existència del dret a rescindir el contracte també haurà d'ésser declarat per la Junta Arbitral corresponent, i haurà de sol.licitar-se dintre el mateix termini, per instància especial.

Art. 48. Contra els laudes de les Juntas Arbitrals fixant el preu d'arrendament, podrà interposar-se recurs - d'apel.lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya, dintre el termini de deu dies, següents al de la notificació.

TITOL V

DRET D'ADQUISICIÓ

Art. 49. L'arrendatari i sots-arrendatari que vulgui fer ús del dret d'adquisició haurà de presentar demanda a la Junta Arbitral corresponent, expressant la seva voluntat de - fer ús del dret d'adquisició.

En la demanda especificarà la terra sobre la qual pretengui el dret d'adquisició i el valor en venda que li atribueixi en venda. També justificarà la concurrència dels requisits - de l'art. 44 de la Llei.

Art. 50. La Junta Arbitral trametrà còpia de la demanda especial en què s'exerciti el dret d'adquisició al propietari, citant-lo de compareixença per a dintre d'un termini no inferior a cinc dies hàbils, ni superior a quinze. Si no compareix a la primera citació, serà citat de nou dintre d'un termini igual, - sense perjudici de la imposició d'una multa, d'acord amb l'art. 13 d'aquest Reglament, i si tampoc no compareix, la Junta Arbitral, prèviament les proves que cregui necessàries, declararà la - procedència o la improcedència de l'exercici del dret d'adquisició que es pretengui, i fixarà el preu just.

Art. 51. Si el propietari compareix, la Junta Arbitral procurarà l'avinença de les parts, i si aquestes arriben a un acord, n'aixecarà acta i donarà fe dels seus termes. Aquest acord donarà lloc a l'atorgament de l'escriptura d'adquisició el dia que fixin el conreador i el propietari, i, en defecte seu, el que assenyali el President de la Junta Arbitral.

Si no hi ha acord, la Junta Arbitral donarà fe de les manifestacions del conreador i del propietari, i, després de practicades les proves, dictarà laude declarant o refusant l'existència del dret d'adquisició, i fixant si s'escau, termini per a l'atorgació de l'escriptura i el preu d'adquisició.

En el cas d'incompliment del laude, aquest es portarà a efecte pels tràmits de l'execució de sentències per la jurisdicció ordinària i a costes del que s'hi oposi.

Art. 52. Quan el propietari, malgrat haver arribat a un acord amb el conreador, es negui a atorgar la corresponent escriptura notarial, l'acta de conciliació de la qual resulti l'avinença es portarà a compliment pels tràmits d'execució de sentència pel Jutge de primera instància corresponent, el qual atorgarà en nom del rebel i d'ofici l'escriptura de venda.

Art. 53. El President de la Junta Arbitral, en compliment de l'art. 48 de la Llei, atorgarà la corresponent escriptura de venda amb preu ajornat en nom de la part que es negui a firmar-la.

Art. 54. El dret d'adquisició pot exercitar-se no solament contra el propietari, sinó també contra els seus dret-havents que ho siguin per títol universal, lucratiu o onerós.

Art. 55. En el cas que, en exercitar el conreador el dret d'adquisició, restin terres al propietari, o aquestes siguin adjudicades d'acord amb l'art. 8^è., les dites terres hauran de suportar recíprocament les servituds de pas d'aigües i, en general, les establertes o que calgui establir, per al bon conreu d'unes i altres.

Art. 56. El conreador que deixi d'abonar dues anualitats del preu d'adquisició fixat, perdrà el seu dret i les quantitats lliurades s'imputaran al pagament del preu d'arrendament que regeixi abans d'utilitzar el dret d'adquisició, i els interessos vençuts a raó del 5 per 100. Si encara resta alguna quantitat, es compensarà en el pagament dels terminis que vagin vençent.

Art. 57. El propietari, per a exercitar el dret que li reconeix l'últim paràgraf de l'art. 52, a rescindir la venda per manca de pagament de dues anualitats, presentarà demanda a la Junta Arbitral corresponent, la qual decidirà l'existència o inexistència de la manca de pagament. La resolució que profereixi serà duta a compliment per la jurisdicció ordinària pels tràmits de l'execució de sentència i comporta la cancel·lació de la inscripció, en el cas d'haver-se efectuat, a què fa referència el paràgraf segon de l'art. 48 de la Llei.

Art. 58. El conreador que ho sigui a títol d'ascendent, descendent, germà, cònjuge o afillat de dret, declarat hereu legítim o testamentari i que convisqui amb el conreador, podrà exercitar el dret d'adquisició dintre del termini de dos anys següents a la mort del causant, quan aquest no l'hagi exercitat en el termini que fixa l'art. 49 de la Llei.

Art. 59. En les escriptures atorgades per les parts de mutu acord, o pel Jutge si s'escau, es consignarà que les terres que el conreador adquireixi fent ús del dret d'adquisició que regula la Llei del 14 de juny, constitueixen el patrimoni familiar, que serà inembargable, i que l'adquirent no podrà transmetre a títol oneros o lucratiu o qualsevol altre - entrevius.

Art. 60. El conreador que pretengui d'adquirir només una de les peces de terra que conreï d'un mateix propietari - presentarà l'oportuna demanda especial davant de la Junta Arbitral, en la qual expressarà el motiu de l'elecció feta per ell. Si no arriba a un acord amb el propietari, la Junta Arbitral, després d'escoltar les al·legacions de les parts i de practica- des les proves oportunes, decidirà quina ha d'ésser la peça de terra objecte del dret d'adquisició.

Art. 61. Quan la Junta Arbitral, en compliment de - l'art. 53, concedeixi moratòria a la quota anual d'amortització, no podrà fixar un termini superior a tres anys quan s'hagi ajor- nat el pagament d'una sola quota, ni a cinc en els altres casos.

Art. 62. Contra els laudes de les Juntes Arbitrals, - en tot el que fa referència a l'exercici del dret d'adquisició, escaurà el recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya. Aquest recurs haurà d'exercitar-se dintre del - termini de deu dies següents a la notificació del laude, i de l'escrit interposant el recurs se'n donarà vista a la part con- trària pel termini de deu dies.

TITOL VI

EL CONTRACTE DE RABASSA MORTA

Art. 63. El conreador que vulgui fer ús del dret de redempció que li reserva l'art. 57 de la Llei, presentarà demanda especial a la Junta Arbitral, fent constar que té cedida l'explotació agrícola d'un terreny, i queda obligat a artigar-lo i plantar-lo o sembrar-lo, a expenses principalment seves, abonant al propietari un cens o quota part anual en concepte de preu. Haurà d'acreditar, a més, trobar-se al corrent de pagament i oferir-ne les proves adients.

Art. 64. S'entendrà que el conreador li fou cedida la terra per a la seva explotació agrícola i que ha quedat obligat a roturar-lo, plantar-lo o sembrar-lo a expenses principalment seves quan les aportacions del propietari a aquest objecte no arribin al 25 per 100.

Art. 65. Practicades les proves proposades per les parts i les que la Junta Arbitral hagi estimat necessàries, es dictarà laude fixant el preu de redempció.

La resolució es portarà a compliment pels tràmits d'execució de sentències per la jurisdicció ordinària.

Art. 66. Seran d'aplicació a l'exercici del dret de redempció les normes de procediment que es determinen en els arts. 46, 47, 48, 50, 52 i 53 d'aquest Reglament per a la tramitació de les sol.licituds en què s'exerciti el dret d'adquisició.

Art. 67. Si el conreador deixa de pagar dues anualitats del preu de redempció, caducarà el seu dret, i en finir el termini pel qual fou estipulat el contracte es considerarà com d'arrendament i regulat pels preceptes de la Llei i d'aquest Reglament que hi fan referència.

Art. 68. Contra els laudes de les Juntes Arbitrals en tot el que faci referència a l'ús del dret de redempció, escaurà recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya, dintre del termini de deu dies, a comptar des de la data de la seva notificació.

TITOL VII

CONTRACTES DE PARCERIA

Art. 69. Quan el propietari no aporti, a més de l'ús de la terra, un 25 per 100 del capital necessari per a l'exploració de la terra, el conreador podrà deduir demanda a la Junta Arbitral competent sol·licitant que es declari que el contracte ha de considerar-se com d'arrendament i regir-se pels preceptes de la Llei del 14 de juny que el regula.

Art. 70. Quan el conreador o el propietari plantegin qualsevol qüestió relacionada amb la distribució dels productes o beneficis, ho faran mitjançant demanda i proposaran les proves en què fonamentin la reclamació.

Art. 71. Els contractes de parceria que tinguin fixat un termini de duració es consideraran prorrogats per reconducció tàcita, any per any, a menys que l'arrendatari expressi per escrit la seva voluntat de donar-lo per finit amb sis mesos d'anticipació al venciment de qualsevol dels terminis d'un any o es produeixi alguna de les circumstàncies que segons la Llei o aquest Reglament donen lloc a la resolució del contracte.

L'avís per a donar per finit el contracte no es considerarà fet en forma si no s'ajusta al previst en l'art. 13 del Reglament.

Art. 72. El propietari que vulgui fer ús del dret a rescindir el contracte, d'acord amb l'art. 73 de la Llei, ho sol·licitarà de la Junta Arbitral mitjançant instància especial.

Si la Junta Arbitral declara l'existència de dret a la rescissió el propietari podrà exercitar l'acció de desnonament davant de la jurisdicció ordinària.

Art. 73. Contra els laudes de les Juntes Arbitrals que donin lloc a la resolució dels contractes de parceria, escaurà -- el recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya.

També escaurà el mateix recurs contra els laudes fixant la naturalesa jurídica del contracte i els que determinin la -- forma de distribució dels productes o beneficis.

TITOL VIII

DE LES JUNTES ARBITRALS

Capítol I

Organització i funcionament

Art. 74. A cada cap de districte judicial, el Govern de la Generalitat organitzarà una Junta Arbitral que assumirà les funcions que atribueix als Jurats Mixtos de la Propietat rústica l'article 80 de la Llei del 27 de novembre del 1931, i coneixerà, privativament, de totes les qüestions que resultin de l'aplicació o interpretació de la Llei de Contractes de Conreu, d'acord amb els termes d'aquesta i amb les disposicions del present Reglament.

Art. 75. D'acord amb la Constitució i l'Estatut, l'organització de les Juntes Arbitrals a què es refereix l'article anterior, serà acordada pel Govern de la Generalitat mitjançant Decret, a proposta del Conseller de Justícia i Dret i d'acord amb el Consell Executiu.

També haurà d'ésser objecte de Decret l'extensió de la jurisdicció d'una Junta Arbitral a un o més partits judicials limítrofs.

En aquest Decret s'expressaran les circumstàncies especials que el motivin.

Art. 76. Les Juntes Arbitrals es compondran d'un President, un Secretari, cinc Vocals conreadors efectius i cinc de suplents, i cinc Vocals propietaris efectius i cinc de suplents com a màxim, i dos Vocals conreadors efectius i dos suplents, i dos Vocals propietaris efectius i dos de suplents com a mínim.

Art. 77. Seran Presidents de les Juntes Arbitrals els Judges d'Instrucció del Cap de Partit Judicial on hagin de residir les dites Juntes. Els Vice-Presidentes seran designats per les Juntes Arbitrals, i en el cas que no es posin - d'acord als Vocals conreadors i els propietaris, seran designats lliurement pel Departament de Justícia i Dret de la Generalitat.

Art. 78. En els casos de reunió de dos o més Partits Judicials en una sola Junta Arbitral, i en aquells en què, pel nombre de demandes presentades o per altres circumstàncies sigui precís, el Consell Executiu de la Generalitat podrà interessar de la Sala de Govern del Tribunal de Cassació la designació de Judges especials perquè presideixin dites Juntes Arbitrals.

Art. 79. Els Secretaris de les Juntes Arbitrals seran nomenats per concurs-oposició, en el qual s'exigirà ésser major de vint-i-tres anys, de nacionalitat espanyol i posseir el títol de Llicenciat en dret o el d'Enginyer o Perit agrònom o haver cursat satisfactòriament els estudis de l'Escola Superior d'Agricultura de la Generalitat.

El Govern de la Generalitat, quan ho consideri pertinent, ateses les necessitats del servei i el més ràpid funcionament de les Juntes Arbitrals, podrà conferir la Secretaria de les Juntes Arbitrals als Secretaris dels Jutjats de primera instància dels partits judicials corresponents.

Art. 80. El Departament de Justícia i Dret publicarà la convocatòria per a prendre part al concurs-oposició, d'acord amb les condicions de l'article anterior, i fixarà el termini per a la presentació d'instàncies.

Els concursants seran convocats a oposició dintre d'un termini no superior a trenta dies ni inferior a quinze, a comptar del que sigui establert per a la presentació d'instàncies.

Art. 81. Les oposicions consistiran en dos exercicis, un d'oral i un altre d'escrit.

L'exercici oral es practicarà desenvolupant els opositors, en el termini màxim de seixanta minuts, tres temes de dret civil català, relacionats amb la Llei de Contractes de Conreu, i un tema de dret processal que faci referència a la prova en judici.

L'exercici escrit consistirà en la redacció d'un laude sobre una qüestió originada per l'aplicació de la Llei de Contractes de Conreu, proposada pel Tribunal i escollida a la sort entre les paperetes que aquest haurà preparat.

Els temes de dret civil i processal seran publicats juntament amb la convocatòria a oposició dels concursants admesos.

Art. 82. Per jutjar els exercicis dels opositors a què fa referència l'article anterior es constituirà un Tribunal integrat:

- a) Per un Magistrat del Tribunal de Cassació de Catalunya, designat per la seva Sala de Govern.
- b) Per un membre de la Comissió Jurídica Assessora, designat pel Conseller de Justícia i Dret.
- c) Per un funcionari del Departament de Justícia i Dret, que reuneixi la condició de Llettrat, designat pel Conseller de Justícia i Dret.

Presidirà el Magistrat del Tribunal de Cassació de Catalunya i actuarà com a Secretari el funcionari del Departament de Justícia i Dret.

Per a cada tema, cada un dels membres del Tribunal podrà atorgar deu punts i el concursant que no n'obtingui prou serà eliminat. El quoficient s'obtindrà dividint el nombre de punts pel nombre de Vocals del Tribunal assistents.

Art. 83. Els Secretaris de les Juntes Arbitrals percebran el sou anual de pessetes 9,000.

Un cop fixades pel Departament de Justícia i Dret les Juntes Arbitrals a constituir, els concursants que hagin aprovat l'oposició escolliran per rigorós ordre de puntuació la Junta Arbitral que vulguin presidir.

Art. 84. El President i els Vocals de les Juntes Arbitrals són autoritats públiques en exercici de llurs funcions lucratives.

Art. 85. El càrrec de membre de la Junta Arbitral és obligatori i durarà dos anys.

Els designats podran només excusar-se per justa causa apreciada pel President de la Junta.

Es considerarà justa la causa al·legada en els següents casos:

- a) Malaltia que impedeixi en forma permanent l'exercici del càrrec.
- b) Trasllat definitiu de residència a una població situada fora del partit judicial.
- c) Deixar d'ostentar la condició de conreador o de propietari indispensables per a ésser elegit.

d) Qualsevol altra que a judici del President de la Junta Arbitral impossibiliti el Vocal del compliment del seu ordre.

Les renúncies seran trameses junt amb l'informe pertinent del President de la Junta al Departament de Justícia i Dret, el qual decidirà respecte a la procedència de la seva admissió.

Art. 86. El càrrec de membre de la Junta és gratuït, però els Vocals tindran dret que se'ls abonin les despeses de viatge i estada i els jornals que deixin de percebre. A aquest efecte els Secretaris de les Juntes Arbitrals el primer dia de cada mes certificaran, amb el vist i plau del President, el nombre de sessions celebrades i els noms i cognoms dels Vocals assistents, el lloc de residència habitual dels Vocals, els jornals que els membres conreadors hagin deixat de percebre i el preu mitjà d'un jornal a la localitat. Aquesta certificació serà tramesa per duplicat al Departament de Justícia i Dret, el qual disposarà el pagament de les quantitats a què tinguin dret els Vocals propietaris - conreadors.

La indemnització per despeses de viatge serà abonada a raó de 10 cèntims per quilòmetre.

En cap cas els Vocals de les Juntes Arbitrals no podran percebre una quantitat mensual superior a 500 ptes.

Art. 87. El Vocal de la Junta Arbitral que, degudament convocat, no acudeixi a exercitar les seves funcions sense causa justificada, podrà ésser sancionat pel President amb una multa de 10 a 50 ptes.

Per a actuar serà requerida la presència del President i un dels membres dels designats per a cada estament. Quan un assumpte s'hagi de sotmetre a votació, hauran de prendre-hi part igual nombre de membres de cada estament. L'acord serà pres per majoria, i el President solament tindrà vot quan hi hagi empat.

Art. 88. En el cas que una Junta Arbitral, pel seu mal funcionament o negligència, desatengui la seva missió perjudicant els interessos confiats a la seva defensa, el Conseller de Justícia i Dret podrà suspendre el seu funcionament. Després de la suspensió de la Junta Arbitral i de practicades les comprovacions que cregui necessàries, podrà disposar les sancions administratives que cregui justes i àdhuc la dissolució de la Junta i la celebració de noves eleccions.

Per a decretar la dissolució caldrà escoltar la Sala de Govern del Tribunal de Cassació de Catalunya.

Art. 89. Quan el Consell Executiu de la Generalitat cregui necessari d'ampliar la jurisdicció d'una Junta Arbitral a dos o més partits judicials, podrà suprimir mitjançant Decret motivat, les Juntes Arbitrals que calgui, i llurs Secretaris - quedaran en situació d'excedència sense dret a percebre sou per cap concepte.

Els excedents tindran dret a ocupar la primera vacant que es produeixi.

Art. 90. El Consell Executiu podrà decretar, atès el nombre de reclamacions deduïdes, que actuïn simultàniament dos Secretaris d'una mateixa Junta.

Quan actuï com a Secretari el del Jutjat de primera instància, percebrà una gratificació anual de 4,000 ptes.

Capítol II

Del procediment d'elecció

Art. 91. Quan el Consell Executiu de la Generalitat ordeni la constitució d'una Junta Arbitral, el Departament de Justícia i Dret disposarà la inserció d'un anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per tal que a tots els Ajuntaments de Catalunya sigui format un cens de propietaris i un altre de conreadors, dintre del termini de quinze dies. Els Alcaldes, Presidents de tots els Ajuntaments de Catalunya, donaran a aquest anunci la deguda publicitat i procediran a la formació del cens, d'acord amb els preceptes d'aquest Reglament.

Art. 92. Per a formar part dels cens de conreadors caldrà acreditar de posseir en arrendament, rabassa morta, parceria, masoveria o altre contracte similar, l'aprofitament d'una finca rústica, l'explotació de la qual sigui de naturalesa agrícola.

Per a formar part del cens de propietaris, caldrà acreditar tenir cedida l'explotació agrícola d'uan finca pròpia, mitjançant qualsevol dels contractes esmentats en el paràgraf anterior.

Art. 93. No podran ésser electors:

Primer.- Els qui per sentència ferma hagin estat condemnats a penes d'inhabilitació perpètua per a càrrecs públics encara que hagin estat indultats, a menys d'haver estat rehabilitats per Llei.

Segon.- Els que per sentència ferma hagin estat condemnats a pena greu.

Tercer.- Els qui, havent estat condemnats a altra pena per sentència ferma, no acreditin haver-la complert.

Quart.- Els concursats o fallits no rehabilitats conforme a la Llei i que no acreditin documentalment haver complert totes llurs obligacions.

Cinquè.- Els deutors a fons públics com a responsables directes o subsidiaris.

Art. 94. El fet de no figurar a les llistes electorals no resta capacitat per a ésser elegit Vocal de les Juntes Arbitrals al qui, d'acord amb els preceptes d'aquest Reglament, pugui ésser considerat conreador o propietari; però en el cas d'ésser elegit, haurà de justificar, abans de prendre possessió del càrrec, que reuneix les condicions exigides per a ésser elegit.

Art. 95. No podran ésser Vocals de les Juntes Arbitrals, encara que reuneixin la condició de conreador o de propietari:

a) Els qui es trobin compresos en algun dels casos de l'art. 87 del present Reglament.

b) Els contractistes d'obres o serveis públics i llurs fiadors o socis, en el partit judicial on sigui realitzada l'obra o servei públic.

c) Els funcionaris judicials o fiscals.

Art. 96. Per a exercir el dret a votar, caldrà estar inscrit al cens de conreadors o de propietaris, en el qual constarà el nom, els cognoms i el domicili de cada un dels electors.

Els censos hauran d'exhibir-se a qualsevol veí que ho sol·liciti.

Art. 97. Els Alcaldes, després de fer les investigacions que creguin oportunes i de reclamar, si s'escau, dels interessats, la justificació de llur condició de conreadors o de propietaris, decidiran la inclusió al cens corresponent de cada sol·licitant. Tindran la facultat d'excloure dels cens qualsevol conreador o propietari que no acrediti degudament el seu dret a formar-ne part. Aquesta determinació serà notificada a l'interessat.

Art. 98. El cens de conreadors serà independent del de propietaris, i efectuades les inscripcions que en cada un d'ells es sol·licitin, dintre del termini de quinze dies fixat en l'art. 89 serà exposat al públic per tres dies.

Els conreadors i propietaris exclosos podran recórrer dintre del termini de tres dies següents a la publicació del cens, davant de la Junta Superior, la qual decidirà la inclusió o exclusió, vist l'informe de l'Alcaldia corresponent, les alegacions de l'interessat i la informació reservada que obtinguin dels organismes oficials, o entitats de conreadors o propietaris, que creguin pertinent de consultar.

Art. 99. La Junta Superior a què fa referència l'article anterior estarà constituïda per un Alcalde o Conseller lletrat de població superior a 5,000 habitants, designat per la Federació de Municipis, un Membre de la Comissió Jurídica Assessora designat pel Conseller de Justícia i Dret, el Jutge municipal Dagà dels de Barcelona, un conreador designat per la Unió de Rabassaires i un propietari designat per una Associació de propietaris legalment constituïda.

Si les entitats expressades no fan ús de llur dret, el Conseller de Justícia i Dret podrà nomenar lliurement el conreador i el propietari entre persones que reuneixin els requisits exigits en aquest Reglament.

Actuarà com a President, el membre de la Comissió Jurídica Assessora i, com a Secretari, el que resulti elegit per majoria de vots.

Art. 100. Els recursos hauran d'ésser resolts dintre del termini de quinze dies i, comunicades les resolucions que es dictin als Ajuntaments respectius, restaran aprovats els censos dels dos estaments, i en serà tramesa una còpia a l'Ajuntament del Cap de partit judicial corresponent.

Art. 101. Els Alcaldes de les poblacions on hagin de celebrar-se eleccions, determinaran la dependència o dependències de les Cases Consistorials en les quals aquelles hauran de celebrar-se.

Quan el nombre d'electors dels censos de conreadors i propietaris excedeixi de 400, es celebrarà l'elecció en dos o més locals, procurant, en aquest cas, de donar la màxima publicitat a llur emplaçament i a les llistes d'electors que hagin d'exercir el dret del sufragi en cadascun d'ells.

Art. 102. Per a ésser elegible caldrà reunir les condicions d'idoneïtat següents:

Primera.- Saber llegir i escriure.

Segona.- Tenir plena capacitat civil.

Tercera.- Residir al territori jurisdiccional corresponent durant els dos anys anteriors.

Quarta.- No haver estat condemnat per delictes comuns.

Art. 103. Vuit dies abans de l'assenyalat per a l'elecció dels Vocals de les Juntes Arbitrals, seran proclamats candidats els que ho demanin dels Alcaldes de la població on l'elecció hagi de celebrar-se.

Els Alcaldes lliuraran als candidats una certificació acreditativa de llur proclamació.

Contra la negativa dels Alcaldes a fer la proclamació, es podrà recórrer davant de la Junta Superior, la qual decidirà dintre del termini de tres dies, i lliurará si s'escau l'oportuna credencial.

Art. 104. El fet d'haver estat proclamat candidat donará dret:

- a) A ésser elegit Vocal efectiu o suplent de la Junta Arbitral.
- b) A fiscalitzar les operacions electorals.
- c) A nomenar dos interventors per a cada Mesa electoral que es constitueixi.

Art. 105. El candidat proclamat, fins tres dies abans de l'elecció, podrà requerir l'Alcalde, per tal que lliuri l'oportuna credencial a favor dels interventors que designi.

Art. 106. La Mesa o Meses electorals es constituiran sota la Presidència de l'Alcalde o el Conseller que ell designi, dos adjunts i els interventors designats pels candidats.

Els adjunts seran elegits a la sort, entre els Vocals conreadors i propietaris que formin part del cens i siguin veïns de la població on hagi de celebrar-se l'elecció. Un dels adjunts haurà d'ésser conreador i l'altre propietari.

Art. 107. Per a les eleccions serà escollit un diumenge.

La Mesa o Meses electorals es constituiran a les set del matí, i la votació no podrà començar sense haver estat estesa, - prèviament, una acta on constin el nom i els cognoms de les persones que constitueixen les Messes electorals i la qualitat en - què actuen.

Els candidats tindran dret a demanar un certificat de - l'acta de constitució de la Mesa.

La votació es farà en urnes separades per a l'elecció de vocals conreadors i per a la de vocals propietaris.

Art. 108. Cada elector podrà votar cinc vocals efectius i cinc de suplents.

Quan hi hagi diferents noms escrits, l'un després de l'altre, únicament es tindran en compte els deu primers, i s'entendrà que els cinc primers han estat votats per a vocals efectius i els cinc últims per a suplents.

En els casos de faltes d'ortografia, lleus diferències de noms, inversió o supressió d'algun dels cognoms, es decidirà en sentit favorable a la validesa del vot.

Art. 109. La votació començarà a les vuit del matí i serà secreta.

Els electors, un cop anunciat pel President el començament de la votació, diran llur nom un a un i, després que els adjunts i els interventors hagin obtingut la certesa que l'elector està inscrit al cens corresponent, aquest lliurarà al President una papereta blanca plegada, on constaran escrits o impresos els noms i els cognoms dels candidats als quals doni el seu vot.

El President, sense ocultar ni un moment a la vista del públic la papereta, dirà en veu alta el nom de l'elector i dirà vota i dipositarà la papereta en una urna destinada a l'efecte, que serà de vidre transparent.

Els adjunts consignaran els electors per l'ordre en què emetin llur vot, i en una llista numerada, i anotaran el número amb què figurin al cens corresponent.

Art. 110. Els qui constitueixin una Mesa electoral podran votar-hi sempre que figurin al cens d'una altra secció.

Quan hi hagi dubtes respecte a la identitat de qualsevol elector, se suspendrà l'emissió del seu vot fins al final de l'elecció, i llavors la Mesa decidirà el que correspongui per majoria de vots.

Art. 111. A les quatre de la tarda, el President anunciarà que es dona per acabada la votació i que no es permetrà a ningú més l'entrada al local. Després de preguntar si algun elector present ha deixat de votar i d'admetre els vots que a continuació es donin, votaran les persones sobre la identitat de les quals hagin sorgit dubtes i siguin admeses, i els membres de la Mesa que hi tinguin dret, i tot seguit el President, els adjunts i els interventors signaran les llistes de votants, al marge de tots els plec i a continuació del darrer nom inserit en aquelles. Immediatament es donarà per finalida la votació.

Art. 112. L'escrutini es practicarà llegint el President o un adjunt les paperetes. Fet el recompte, el President preguntarà si hi ha alguna protesta a fer, i consignades en acta les que es formulin anunciarà el resultat de l'elecció, especificant el nombre de paperetes llegides, el nombre de votants i els vots obtinguts per cada candidat.

Es cremaran les paperetes, a excepció d'aquelles sobre les quals s'hagi produït alguna reclamació, o les que hagin estat declarades nul·les, les quals s'adjuntaran a l'acta, rubricades pels adjunts i els interventors.

Art. 113. Acabat l'escrutini es publicarà a la porta de l'Alcaldia o del local on s'hagi celebrat l'elecció el seu resultat, per certificació que expressi el nombre de vots obtinguts per cada candidat.

Un duplicat d'aquesta certificació serà tramès per correu certificat a la Junta Superior i un altre al Departament de Justícia i Dret.

També es lliuraran les certificacions que demanin els candidats.

Acabades totes aquestes operacions, el President, els adjunts i els interventors signaran l'acta, on s'expressarà detalladament tot el que preceptuen els articles anteriors.

Un exemplar d'aquesta acta serà arxivat a l'Alcaldia, un altre serà tramès a la Junta Superior, acompanyant-hi una llista dels votants, i el tercer serà tramès al Departament de Justícia i Dret, també amb la llista dels votants.

També es trametrà una còpia literal de l'acta de constitució de la Mesa, per correu certificat. El lliurament a l'estafeta de correus més propera, haurà d'ésser fet pel President de la Mesa, amb els interventors nomenats pels candidats.

Art. 114. El dijous següent a l'elecció, la Junta Superior es reunirà a les deu del matí i examinarà les actes de l'elecció, fent el recompte de vots que hagi obtingut cada candidat. L'acte serà públic, i tots els candidats podran formular protestes sobre la legalitat de la votació. La Junta no podrà anul·lar cap acta ni vot.

Acabat el recompte s'estendrà un acta on constaran les protestes formulades, i el President comunicarà tot seguit el resultat de l'escrutini general al Departament de Justícia i Dret.

Art. 115. Quan s'hagin formulat protestes sobre la validesa de l'elecció, el Departament de Justícia i Dret trametrà l'expedient al Tribunal de Cassació de Catalunya, i la seva Sala de Govern emetrà dictamen fent alguna de les seves propostes:

a) Validesa de l'elecció i aptitud del candidat o candidats electes.

b) Nul·litat de l'elecció i necessitat de celebrar-la en nova convocatòria.

c) Nul·litat de la proclamació d'un candidat i validesa de l'elecció i, per tant, proclamació del candidat o candidats que segueixin en nombre de vots.

Art. 116. El Tribunal de Cassació de Catalunya, dintre del termini de tres dies a comptar d'aquell en què acordi el dictamen, trametrà al Departament de Justícia i Dret l'expedient amb tots els antecedents i la proposta de resolució.

Art. 117. No havent-se formulat cap proposta, el Departament de Justícia i Dret tindrà per proclamats els candidats que hagin obtingut major nombre de vots, i procedirà a fer els nomenaments de vocals conreadors i propietaris.

Art. 118. Els Vocals conreadors i propietaris de les Juntes Arbitrals seran renovats per meitat cada dos anys, i en cessaran en primer terme els que haguessin tingut menys vots.

Unicament es permetrà la reelecció per una sola vegada.

Art. 119. Als efectes de l'art. 85 de la Llei del 27 de novembre del 1931, una vegada formats els censos de conreadors i de propietaris, s'entendran agrupats en associacions dintre del territori de la comarca en què la Junta Arbitral hagi d'actuar i tindran tots els drets que els reconeix el títol XVI de l'expressada Llei.

C a p í t o l III

De les sancions

Art. 120. Seran considerats documents oficials, als efectes d'aquest Reglament, els censos de conreador i de propietaris i les actes, llistes, certificacions i credencials - lliurades en compliment dels seus preceptes.

Art. 121. Qualsevol falsedat en els documents referents a les disposicions d'aquest Reglament es considerarà comesa en matèria electoral.

Art. 122. Els funcionaris públics que no compleixin els deures que els imposa aquest Reglament i dificultin l'aplicació dels seus preceptes seran castigats amb una multa de 100 a 1,000 pessetes. Correspondrà aplicar aquestes sancions a la Junta Superior, i llur execució a la jurisdicció ordinària per la via d'obligament.

Els actes, omissions o manifestacions contràries a aquest Reglament que tinguin per objecte cohibir o exercir pressió sobre els electors per tal que no exercitin llur dret o l'exercitin contra llur voluntat per tal que votin o deixin de votar candidatures determinades, seran sancionats per coaccions si això escau, i en altre cas amb multa de 100 a 1,000 ptes., que imposarà la Junta Superior.

Art. 123. Es consideraran funcionaris públics els Presidents, adjunts i interventors de les Meses electorals.

Art. 124. El President de la Mesa dintre del Col·legi electoral tindrà autoritat per a conservar l'ordre i assegurar la llibertat dels electors, i farà complir els preceptes d'aquest Reglament.

C a p í t o l I V

Del procediment davant de les Juntes

Arbitrals

Art. 125. Per a formular qualsevol demanda davant de la Junta Arbitral caldrà tenir capacitat legal per a contractar. Pels menors, incapacitats i absents, actuaran llurs representants legals, o els qui hagin de suplir llur incapacitat d'acord amb les Lleis.

Per les Corporacions, Societats i altres entitats -
jurídiques, tindran personalitat per a demandar les persones
que legalment les representin.

Art. 126. Els interessats podran actuar personalment
o per mandatari designat especialment en escriptura pública,
o mitjançant document privat amb signatura legalitzada notarial-
ment. En el mandat haurà de constar necessàriament, per a la -
seva validesa, la facultat de transigir.

Art. 127. En les demandes és farà constar el nom, el
cognom i les circumstàncies personals del conreador i del pro-
pietari; es descriurà la terra, objecte del contracte i el ter-
me municipal en què estigui enclavada; s'expressaran succinta-
ment les condicions en què es realitzi el cultiu i s'esmentaran
els articles de la Llei del 14 de juny, en què es fonamenti el
dret que s'exerciti.

En la demanda caldrà fixar el domicili de l'instant o
del seu representant, als efectes de les notificacions, així -
com també el del demandat.

Art. 128. Les actuacions de les Junes Arbitrals seran
gratuites i s'estendran en paper comú.

Això no obstant, un Decret especial regularà el reinte-
grament especial de les actuacions i la forma d'execució de les
coses causades.

Art. 129. Juntament amb la demanda caldrà acompanyar
el contracte de conreu. Si el contracte és verbal seran trans-
crits succintament els seus pactes en la relació de fets de la
demanda. També podran acompanyar-se tots els altres documents
que serveixin de fonament a la sol·licitud formulada.

Art. 130. En el cas que el demandant no actui en nom propi, a més dels documents esmentats en l'article anterior, - serà indispensable d'acompanyar l'escriptura pública o document privat, degudament legalitzat, del qual resulti l'existència - del mandat exprés amb la facultat de transigir a què fa referència l'article 126.

Art. 131. En totes les demandes i sol·licituds que es formulin a les Juntes Arbitrals, els Secretaris d'aquestes en lliuraran rebut quan preceptivament ho disposi aquest Reglament i sempre que l'interessat ho sol·liciti.

Art. 132. Juntament amb la demanda caldrà presentar tantes còpies literals d'aquesta i dels documents que s'acompanyin com demandats hi hagi. Aquestes còpies hauran d'ésser - signades per l'interessat o pel seu mandatari.

Les Juntes Arbitrals citaran els demandats amb un mínim de tres dies d'anticipació amb lliurament de l'oportuna - cèdula d'emplaçament i de les còpies de la demanda i documents, i si el propietari, dintre el termini de vuit dies, no formula oposició a la sol·licitud, la Junta Arbitral continuarà les - actuacions i resoldrà la demanda, tenint en compte els seus - fonaments, les proves que aporti el reclamat i les que acordi d'ofici per a la millor resolució de la qüestió plantejada.

Art. 133. Si el demandat fa oposició a la sol·licitud, el President de la Junta Arbitral declararà iniciat el judici arbitral oportú, convocant les parts per a l'acte de conciliació. Si el reclamat no compareix malgrat haver estat citat en forma, se'l tindrà per desistit de la demanda. Si no compareix el demandat, i els motius de la seva incompareixença no són justificats a judici del President de la Junta Arbitral, se li imposarà una multa que no excedirà de 200 ptes. i no serà inferior a 25.

Art. 134. La competència de les Juntes Arbitrals es determinarà exclusivament per la situació de les terres objecte del contracte de conreu. La incompetència de la Junta haurà de declarar-la d'ofici el President, quan escaigui. Si no ho fa, qualsevol de les parts podrà interposar la qüestió de competència i es lliurarà testimoni de les actuacions dintre el termini de tres dies al Tribunal de Cassació, sense perjudici que la Comissió continui actuant; però si és estimada definitivament la incompetència pel Tribunal de Cassació, aquest li podrà imposar les costes.

Art. 135. La missió de les Juntes Arbitrals serà, en l'acte de la primera compareixença a què es refereix l'article anterior, expressament conciliadora i anirà encaminada principalment a obtenir que el demandant i el demandat dirimeixin llurs diferències i arribin a un acord. A aquest efecte, tant el President com qualsevol dels Vocals podrà interessar de les parts les explicacions que cregui adients i proposar fórmules de concòrdia.

Art. 136. Si s'arriba a un acord, s'entendrà l'oportuna acta on es consignaran amb claredat i concisió les estipulacions que es convinguin. Aquestes actes, sempre que ho sol·liciti una de les parts, donaran lloc a dictar laude, que es portarà a compliment per la jurisdicció ordinària, quan escaigui, pels tràmits de l'execució de sentències.

Si no s'arriba a un acord, es consignarà en la forma més breu possible el que al·legui cada una de les parts, amb adjunció dels documents que aquestes presentin, i immediatament s'assenyalarà dia per a la celebració de judici, quan així escaigui.

Art. 137. Si el President manifesta a la Junta Arbitral declara per unanimitat haver-se instruït suficientment per a resoldre amb els documents presentats en l'acte de conciliació i el que han manifestat les parts, ho faran constar en l'acta, declarant conclús el judici, i dictaran resolució sense necessitat d'escoltar novament el demandant i demandat ni de practicar altra prova.

Art. 138. A la sessió en què es celebri el judici podran concórrer les parts prèviament citades, amb tots els elements de prova de què intentin valer-se. Si hi concorre la Junta Arbitral, n'escoltarà les alegacions i practicarà en el mateix acte les proves ofertes i que es declarin pertinents.

El President de la Junta Arbitral dirigirà els debats i tindrà facultat per a declarar l'afer prou discutit.

Si alguna prova proposada no es pot practicar en el mateix acte, la Junta Arbitral concedirà un termini que serà el més breu possible, tenint en compte les característiques del mitjà de prova objecte de l'ajornament.

Art. 139. Celebrat el judici, el President de la Junta Arbitral redactarà el veredicta que hagin de contestar els Vocals conreadors i propietaris, i el llegirà a les parts, les quals podran proposar l'addició o modificació d'alguna o algunes de les preguntes. Si la petició és desestimada, els interessats podran fer-ho constar en l'acta.

Art. 140. En votar el veredicte qualsevol vocal podrà fer constar breument en l'acta l'explicació del seu vot. Es consignarà a les actes si els acords es prenen per unanimitat o per majoria i els vots obtinguts, en aquest darrer cas, per cada part.

Art. 141. El President assistirà a la deliberació, sense pronunciar-se per cap de les parts i únicament emetrà opinió i vot en el cas que els Vocals no arribin a un acord i hi hagi empat.

Art. 142. Totes les qüestions sotmeses a les Juntes Arbitrals seran resoltes per laude, que redactarà el President de la Junta Arbitral i signarà junt amb els seus Vocals.

El termini per a dictar la resolució serà de tres dies, a comptar des d'aquell en què hagi finit el judici.

Art. 143. De totes les sessions que celebri la Junta Arbitral, el Secretari n'aixecarà acta i en donarà fe, fent constar en forma succinta totes llurs incidències.

Art. 144. El laude que profereixi la Junta Arbitral, serà comunicat a les parts per còpia, fent-los saber que poden recórrer davant del Tribunal de Cassació de Catalunya, sempre que escaigui, i especificant, en altre cas, que la resolució és ferma.

Art. 145. El recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya, sempre que escaigui, haurà d'interposar-se dintre del termini de deu dies hàbils a comptar des de la notificació del laude.

La Junta Arbitral en donarà vista a la part contrària, la qual podrà contestar-lo, dintre el termini de deu dies; - transcorregut aquest, es trametran les actuacions al Tribunal de Cassació.

Art. 146. Per a l'execució dels laudes un cop ferm, es seguiran els tràmits fixats en la Llei d'Enjudiciament Civil per a l'execució de sentències.

A aquest efecte el Secretari de la Junta Arbitral lliurarà testimoni del laude a la part que el sol·liciti, fent constar que és ferm.

Si el conreador o el propietari ho interessen, la Junta Arbitral comunicarà directament el laude al Jutjat de primera - instància corresponent.

Art. 147. Totes les citacions, notificacions i requeriments es practicaran en la forma que determina la Llei d'Enjudiciament Civil. No serà necessari de valer-se d'advocat ni procurador en cap cas, ni tampoc per a comparèixer davant de la jurisdicció ordinària. L'interessat podrà actuar assistit d'homes bons.

Les Juntes Arbitrals, per a resoldre tots els dubtes que sorgeixin en la interpretació de les normes de procediment establertes en el present Reglament, tindran en compte les disposicions generals contingudes en la Llei d'Enjudiciament Civil, tot procurant de respectar, sempre que sigui possible, la naturalesa especial d'aquesta classe de judicis.

Art. 148. El President de les Juntes Arbitrals advertirà als interessats les faltes i els defectes de les demandes i sol·licituds que formulin; els indicarà la manera d'esmenar-los, i fixarà un termini prudencial, que no podrà excedir de cinc dies, per a fer les modificacions que cregui adients o per a reproduir la sol·licitud en forma.

Art. 149. Els laudes han d'ésser clars, precisos i congruents amb la demanda i amb les altres pretensions deduïdes en el judici; faran les declaracions que aquestes exigeixin i decidiran tots els punts que hagin estat objecte de debat.

Art. 150. Els laudes es redactaran en la forma següent:

Primer.- Es consignarà el lloc, la data i la Junta Arbitral que els pronunciï, el nom del President i dels Vocals de la Junta Arbitral i els noms dels litigants i llur respectiva qualitat de propietaris o conreadors.

Segon.- En paràgrafs separats que començaran amb la paraula Resultant, es precisaran, amb claredat i amb la major concisió possible, les pretensions de les parts, els fets en què les fonamentin que hagin estat al·legats oportunament i estiguin relacionats amb les qüestions que hagin de resoldre, i les proves practicades a instància de les parts o per acord de la Junta Arbitral.

Tercer.- També en paràgrafs separats i que començaran amb la paraula Atès, s'apreciaran els punts de dret fixats per les parts per donar les raons i fonaments legals que es creguin pertinents per a la decisió que s'hagi d'emetre i esmentant els preceptes legals que es considerin aplicables al cas.

Quart.- La resolució precisarà els termes concrets d'aquesta, i en cas de no accedir-se a la demanda formulada, s'utilitzarà la fórmula d'absolució.

Art. 151. Els recursos d'apel·lació podran interposar-se verbalment, i en aquest cas es farà constar en les actuacions mitjançant diligència signada pel recurrent.

Les apel·lacions s'entendran admeses, i únicament llur inadmissió serà objecte de providència, que es notificarà degudament a les parts.

Art. 152. Contra la providència no donant lloc a l'admissió de recurs d'apel·lació es podrà recórrer en queixa davant del Tribunal de Cassació.

El recurs es presentarà a la mateixa Junta Arbitral, la qual en donarà vista a la contrapart per cinc dies, transcorreguts els quals trametrà testimoni del laude, del recurs d'apel·lació, de les actuacions que designi el recurrent i de les que el President cregui necessàries al Tribunal de Cassació.

Art. 153. La Sala corresponent del Tribunal de Cassació, dintre del termini de trenta dies, dictarà resolució admetent o denegant el recurs de queixa. Si el denega, podrà imposar al recurrent una multa no inferior a 25 pessetes ni superior a 250. Si l'admet, el tramitarà d'acord amb el que preceptua l'article 156 d'aquest Reglament.

Art. 154. Admès el recurs d'apel·lació, la Sala corresponent del Tribunal de Cassació podrà acordar, quan ho cregui pertinent, la pràctica de noves proves per a millor proveir, i la celebració d'una compareixença en la qual s'escoltaran les parts litigants, i després d'aquests tràmits, - dictarà la resolució oportuna.

Les resolucions del Tribunal de Cassació s'ajustaran estrictament als preceptes de la Llei d'Enjudiciament Civil - sobre redacció de sentències.

El Tribunal tindrà facultat per a fer les prevencions oportunes per a corregir les faltes de procediment que observi i imposar les correccions disciplinàries que cregui convenients.

De les correccions disciplinàries no se'n donarà coneixement a les parts.

Capítol V

De les recusacions

Art. 155. Els Presidents, Vocals i Secretaris de les Junes Arbitrals podran ésser recusats per qualsevol de les causes següents.

- a) Parentiu de quart grau de consanguinitat i segon d'afinitat amb una de les parts.
- b) Tenir interès directe o indirecte en el plet.
- c) Amistat íntima o enemistat manifesta.
- d) Haver estat defensor d'una de les parts o emès dictamen com a lletrat, o actuat com a testimoni o parit.
- e) Estar o haver estat denunciat per alguna de les parts com a autor d'un delictes o falta.

f) Ésser o haver estat tutor o curador o haver estat sota la tutela o curadorie d'algú que sigui part en el judici.

Art. 156. Els Presidents, Vocals o Secretaris de -- les Juntas Arbitrals en els quals concorri qualsevol de les causes expressades en l'article anterior, s'abstindran d'intervenir en l'afer sense esperar que se'ls recusí. Contra -- aquestes decisions no cabrà cap recurs.

Art. 157. La recusació haurà de plantejar-se en la primera compareixença, llevat que la causa sigui posterior al plantejament de la demanda; en aquest cas haurà de proposar-se tan aviat com el recusat en tingui coneixement. No justificant-se aquest extrem, serà rebutjada la recusació.

No podrà promoure's la recusació quan la qüestió sotmesa a la Junta estigui pendent de laude.

Art. 158. Quan el recusat cregui procedent la causa al.llegada, es donarà per recusat i cessarà en el coneixement de la qüestió.

Si el recusat és el President, passarà les actuacions a la Junta Arbitral més pròxima. Si és un Vocal, actuarà en -- substitució seva el de la Junta més pròxima.

Art. 159. La mateixa Junta Arbitral decidirà la procedència de les recusacions que afectin els vocals o secretaris i el de la Junta més pròxima les que afectin el President.

Contra la resolució declarant procedent la recusació, podrà recórrer l'altra part dintre de deu dies, i la Sala corresponent del Tribunal de Cassació resoldrà en definitiva - després d'escoltar en compareixença el recusat i les parts - dintre del termini de trenta dies.

Art. 160. De l'escrit de recusació, se'n donarà - vista a la part contrària per cinc dies, i, transcorregut - aquest termini sense que s'hagi oposat a la recusació, s'admetrà prova sobre d'ella, seguint el mateix procediment que - s'estableix en aquest Reglament per a resoldre les demandes. Practicada la prova, es dictarà auto declarant la procedència o improcedència de la recusació.

Sempre que hom cregui que la recusació ha estat promoguda amb mala fe o lleugeresa, s'imposarà al recusat una multa no inferior a 50 pessetes ni superior a 150. A més, li seran imposades les costes de la recusació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- Tots els terrenys expropiats per part de - Corporacions públiques o entitats a les quals l'Estat hagi - conferit el dret d'expropiació, no estaran subjectes als preceptes d'aquesta Llei, llevat dels que fan referència a la - revisió de preu i a l'obligatorietat de respectar el mateix conreador en el cultiu de la terra fins que s'hagin complert els fins pels quals l'expropiació fou decretada.

Segona.- Un Decret especial regularà l'Arxiu-Registre d'arrendaments que la Generalitat ha de crear en compliment de la Llei del 14 de juny i la forma com les Juntes Arbitrals han de portar a compliment el que preceptua l'art. 7è. d'aquest Reglament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Els conreadors i els propietaris podran deduir davant de les Juntes Arbitrals que siguin creades en compliment del que preceptua aquest Reglament, demanda de revisió de preu de contracte d'acord amb la Llei del 14 de juny.

Mentre no estiguin constituïdes les Juntes Arbitrals, les demandes podran formular-se davant de la Comissió Arbitral del Districte més pròxima de les creades en compliment de la Llei del 26 de juny del 1933.

La Comissió Arbitral es limitarà a rebre les demandes i de transmetre-les a la Junta Arbitral competent, una vegada estiguin constituïdes.

Segona.- Les demandes de revisió de preu presentades en compliment de disposicions legals anteriors a la Llei del 14 de juny i que no haguessin estat retirades en compliment de la disposició transitòria final de la dita Llei, seran tramessas pel Departament de Justícia i Dret a les Juntes Arbitrals a què corresponguin, per a llur tramitació, d'acord amb els preceptes d'aquest Reglament.

Si manquen còpies o les demandes no reuneixen les condicions fixades en aquest Reglament, els Presidents de les Juntes procediran en la forma prevista en l'art. 148.

Tercera.- Els Secretaris de les Juntes Arbitrals lliuraran rebut a l'interessat fent constar el dia i l'hora de la presentació de la demanda de revisió, i nom i els cognoms del conreador i del propietari i el contracte a què fa referència la reclamació.

Aquest rebut acreditarà la presentació de la instància i donarà dret a efectuar el pagament, d'acord amb el que preceptua l'article següent.

Quarta.- La presentació de demandes de revisió de preu, feta d'acord amb les disposicions d'aquest Reglament o en compliment de disposicions legals anteriors a la Llei del 14 de juny, produirà els següents efectes:

a) Les demandes de revisió de preu presentades pel conreador i que es refereixin a contractes afectats per la Llei de conflictes del 26 de juny del 1933, donaran dret al conreador a pagar a compte del preu d'arrendament contractual el 50 per 100 d'aquest.

b) Les demandes de revisió de preu presentades pel conreador i que es refereixen a contractes de conreu no afectats per la Llei de conflictes del 26 de juny del 1933, donaran dret al demandant a pagar a compte del preu d'arrendament el 75 per 100 del preu contractual.

c) Les demandes de revisió de preu presentades pel conreador i que es refereixin a contractes amb pagament a parts de fruits, en els que no hi hagi aportacions del propietari, o quan aquestes aportacions no arribin al 25 per 100 establert en la Llei del 14 de juny, perquè els contractes es considerin de parceria, donaran dret al conreador a pagar a compte del preu d'arrendament el 75 per 100 del preu contractual o quota-part establerta.

Els contractes de parceria compresos en el capítol VIII de la Llei del 14 de juny, i respecte dels quals es formulí pel conreador demanda de revisió de preu, no donaran dret al pagament a compte d'una part del preu, sinó que els parcera hauran de pagar la part contractual convinguda.

En les demandes de revisió de preu que formulin els conreadors quan el pagament estigui establert en part de fruits, els demandants hauran de consignar d'una manera expressa si hi ha aportacions del propietari, i si aquestes arriben o no a la quarta part del capital necessari per a l'explotació, d'acord amb la Llei del 14 de juny.

Cinquè.- Quan la Junta Arbitral hagi aprovat la revisió del preu, el propietari o el conreador hauran de pagar a l'altre part la diferència entre el preu revisat i la quantitat pagada a compte.

Les Juntes Arbitrals tindran facultat per a fixar un termini que no excedeixi d'un any.

Sisè.- Els conreadors que hagin venut terres a carta de gràcia i que, després de venudes, les hagin continuat conreant en concepte de parcera, masovers o arrendataris, podran deduir, immediatament que es constitueixi la Junta Arbitral competent, demanda especial, exercitant el dret d'adquisició, subjectant-se als preceptes d'aquest Reglament.

Setè.- Els propietaris que durant els cinc anys darrers haguessin arrendat terres en contracte de parceria que reuneixi els requisits del cap. VIII de la Llei del 14 de juny, podran donar per finit el contracte en vèncer el termini, - sempre que vulguin reprendre el conreu de la terra.

Vuitè.- Per a exercitar el dret reconegut en l'article anterior, caldrà que el propietari abans de cedir la terra en aparceria l'hagi conreada directament i que hi concorri alguna de las circumstàncies següents:

a) Que el fet d'atorgar el contracte de conreu fos determinat per malaltia que hagués impossibilitat al propietari per a conrear directament la terra.

b) Que conreant la terra amb l'ajut dels seus descendents directes, s'haguessin impossibilitat físicament per al treball, per malaltia, o absència obligada per tal de prestar el servei militar.

Novè.- L'acció a què fan referència les disposicions novena i desena haurà d'exercitar-se davant de la Junta Arbitral corresponent durant l'any 1934, per demanda especial.

Desè.- Mentre no s'hagin format els censos conreadors i de propietaris a què fa referència el capítol II del títol - 8è. d'aquest Reglament, efectuaran les designacions dels Vocals les Associacions a què es refereix l'art. 85 de la Llei del 27 de novembre del 1931.

DISPOSICIÓ FINAL

Els preceptes d'aquest Reglament seran aplicats amb efectes retroactius des del 1^r. d'abril del 1934.

Palau del Parlament, 12 de setembre del 1934.

APENDIX V

DOCUMENTS RELACIONATS AMB LA PRO-
BLEMÀTICA LEGISLADA DE LA "RABASSA
MORTA" I DELS JURATS MIXTES, DURANT
LA REPÚBLICA DE 1873, PELS FEDERALS.

LEY, DECRETADA Y SANCIONADA POR LAS CORTES
CONSTITUYENTES DICTANDO REGLAS PARA REDIMIR
LAS RENTAS Y PENSIONES CONOCIDAS CON LOS -
NOMBRES DE FOROS, SUBFOROS Y OTROS DE IGUAL
NATURALEZA

Las Cortes Constituyentes, en uso de su soberanía, decretan y sancionan la siguiente:

L E Y

Artículo 1º. Se declaran redimibles todas las pensiones y rentas que afectan a la propiedad inmueble, conocidas con los nombres de foros, subforos, censos frumentarios o rentas en sacco, derechos, rabassa morta y cualesquiera otras de la misma naturaleza.

Artículo 2º. El derecho de redimir estas cargas compete a los pagadores de las mismas exclusivamente. Este derecho es intrasmisible por sí solo, y una vez ejercido, no podrán enajenar los redimidos los precios en cuyo beneficio recaiga, durante los cuatro años siguientes a la redención, bajo pena de nulidad de los contratos que a este precepto contravinieren, a menos que alguna desgracia hiciere venir a peor fortuna al interesado y le obligare a la venta.

Art. 3º. La redención habrá de hacerse por rentas o forales enteros, si lo exigiere así el preceptor y constare la unidad de la renta en los títulos originarios o novadores de la misma, o en prorratesos fehacientes en juicio.

Art. 4º. Por cualquiera de los pagadores de una renta o foral, sea uno o algunos, o Ayuntamientos en nombre del pueblo que representen, se podrá solicitar y obtener la redención total, según el artículo anterior, si requeridos los demás en acto conciliatorio rehusaren hacerlo en cuanto a sus cuotas respectivas. Estas podrán ser después redimidas por los pagadores individuales, con arreglo a la presente Ley; pero ínterin no lo fueren; tendrá derecho a percibir las el que haya hecho la redención total de la renta. No será necesario el previo requerimiento de que habla este artículo respecto donde radiquen los bienes que se intente redimir.

Art. 5º. Sin embargo de lo estatuido en los dos precedentes artículos, podrán ser individualmente redimidas cualesquiera cargas de las de que se trata, cuyo importe anual no baje de 25 pesetas y afecte a uno o más precios rústicos, y las que graven a una finca urbana cuyo valor exceda de 2.000 pesetas. Para los efectos de este artículo sólo se reputarán fincas urbanas los edificios construidos en las poblaciones agrupadas que se distinguen con las denominaciones de pueblos, villas o ciudades, o los que, construidos en el campo, no lleven aneja tierra cuyos productos se utilicen con labor o sin ella.

Art. 6º. Cuando el capital de las cargas redimibles en virtud de esta ley constare liquidado en el título de imposición o en los de adquisición siempre que este título o títulos se hallen inscritos legalmente en el registro de la propiedad correspondiente, la redención se hará mediante la entrega en metálico del mismo capital o su equivalente.

Art. 7º. Las cargas redimibles cuyo capital no fuere conocido de la manera declarada en el artículo anterior, se redimirán con sujeción a las reglas siguientes:

1º. Las cargas de renta anual de 25 pesetas o menos se redimirán al contado y al tipo de un 4 por 100.

2º. Aquellas cuya renta excediera de 25 pesetas podrán redimirse, bien al contado al tipo de un 6 por 100, bien durante cinco años, en cinco plazos iguales, a razón de 100 de capital por 5 de renta. En este caso, el primer plazo se abonará al otorgarse la escritura de redención, comenzando a contarse el segundo desde la misma fecha; hasta el completo pago continuará el perceptor cobrando la renta redimida, rebajada cada año la prorrata correspondiente a lo satisfecho en los anteriores.

Servirá de base para la capitalización de las rentas pagaderas en especie de valuación de ésta conforme a la medida en que se pague la renta y el precio medio que en la capital del término municipal haya tenido durante el decenio inmediatamente anterior al año en que la redención se verifique.

Art. 8º. Los gastos que originen las redenciones serán siempre de cuenta de los redimidos.

En las redenciones a plazo se constituirá, si lo exigiere el preceptor de la renta redimida, hipoteca especial sobre las fincas liberadas, en garantía de los plazos futuros; pero si las fincas tuvieran ya otro gravamen inscrito en el Registro de la propiedad, de cualquiera clase que fuere, los perceptores podrán rehusar la redención a plazo mientras no se cancelen tales gravámenes.

Art. 9º. Los que en la actualidad perciben rentas de las expresadas en el artículo 1º, porque ellos mismos o las personas a quienes heredaron las obtuvieron del Estado a título de redención, como procedentes de bienes nacionales, y cuyos copartícipes en el dominio útil no se aprovecharon por cualquier causa del beneficio de la redención durante el término legal, están obligados a otorgar la redención parcial que de sus respectivas cuotas soliciten en cualquier tiempo dichos copartícipes, al mismo tipo y en iguales condiciones que ellos lo verificaron con el Estado.

En tanto que esto no se verifique, los expresados redimientes continuarán percibiendo como hasta aquí la renta con que contribuye o debe contribuir en la actualidad cada uno de los mencionados copartícipes.

Art. 10º. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, las rentas y pensiones adquiridas del Estado a título de redención serán redimibles con sujeción a lo establecido en los artículos 2º. al 8º. inclusive de esta ley.

Art. 11º. Los jueces de primera instancia, o los jueces o tribunales que en lo sucesivo ejercieren su actual jurisdicción, son los únicos competentes para conocer de los expedientes de redención de las cargas a que esta ley se refiere.

Las solicitudes de redención se tramitarán en la forma estatuida por la ley de Enjuiciamiento civil para los actos de jurisdicción voluntaria, oyéndose a las partes y recibíndose sus pruebas en comparecencias verbales, sin formalizarse juicio ordinario. Las actas y demás actuaciones se extenderán en papel de oficio; los autos definitivos que recaigan en estos expedientes tendrán fuerza de sentencias definitivas, y las apelaciones que contra ellos se interpongan se admitirán y sustanciarán como las de los juicios de menor cuantía.

5

Art. 12. Queda abolido el laudemio en los contratos de foro y subforo, y su importe probable, no se agregará en ningún caso al capital redimible.

Art. 13. Será nulo todo contrato de subforo que en lo sucesivo se otorgare, cualesquiera que sean el nombre y forma que se les dieren. Los demás gravámenes de que hace mérito esta ley, que desde su promulgación se impusieren o reconocieren sobre la propiedad inmueble, rústica o urbana, serán redimibles en todo tiempo a tenor de lo prescrito en los artículos anteriores.

Art. 14. La obligación de pago de rentas forales, subforales y demás que son objeto de esta ley, no se reputará constituida en reconocimiento del dominio directo, sino en consideración a los frutos. Tampoco se presumirá solidaria esta obligación a no ser que la solidaridad conste de una manera expresa, estipulada en los títulos originarios o novadores de la carga, o en prorrates fehacientes en juicio.

Art. 15. Los expedientes sobre deslinde o prorrates de rentas forales y subforales se sujetarán a las reglas establecidas en el artículo 11 para los de redención de las mismas cargas.

Los testimonios de los autos definitivos y sentencias firmes que recaigan en estos expedientes, declarando derechos reales, serán inscribibles en el Registro de la propiedad.

ARTÍCULOS ADICIONALES

Primero.- El Gobierno queda autorizado para dictar las disposiciones necesarias que armonicen las prescripciones de la presente ley, con lo que exija la naturaleza del contrato conocido con el nombre de rebassa morta en Cataluña.

Segundo.— Las disposiciones de esta ley son aplicables, en cuanto su naturaleza lo permita, a las cargas conocidas en Aragón con los nombres de treudos. Respecto de éstas, el laudemio será en todo caso el 2 por 100.

Lo tendrá entendido el Poder ejecutivo para su impresión, publicación y cumplimiento.

Palacio de las Cortes, 20 de agosto de 1873.— Rafael Cervera, Vicepresidente.— Eduardo Cagigal, Diputado Secretario.— Ricardo Bartolomé y Santamaría, Diputado Secretario.— Luis F. Benítez de Lugo, Diputado Secretario.

PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL SR. MINISTRO
DE FOMENTO, CREANDO JURADOS MIXTOS PARA DIRIMIR
LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN SURGIR ENTRE PROPIETA--
RIOS Y OBREROS

A LAS CORTES

La profunda crisis que la sociedad atraviesa en los presentes tiempos, ha determinado graves perturbaciones en el orden económico, poniendo en pugna los distintos elementos y fuerzas que a la producción de la riqueza contribuyen, y dando lugar a que se estimen como irreconciliables enemigos los que, ora con el esfuerzo de su brazo, ora con el de su inteligencia, ora, en fin, mediante el ejemplo de un capital que representa la acumulación de anterior trabajo, concurren de consumo a crear la riqueza transformando a impulsos de la industria los productos naturales, convirtiendo en dócil instrumento del espíritu la fuerza ciega de la naturaleza y lanzando con vigoroso impulso a la sociedad por los anchos derroteros del progreso, debido en nuestro siglo, principalmente, a los adelantos maravillosos de la Industria.

Accidentes históricos, errores de escuela, perturbaciones políticas, preocupaciones anticuadas, causas de varia índole, en suma, han podido, acaso, acrecentar los odios entre el capital y el trabajo; han envenenado las pasiones y han traído, como lógico e ineludible resultado, colisiones lamentables y dolorosas luchas, tan funestas para el bienestar de las clases trabajadoras

como defensas para el cumplimiento del plan económico, no menos esencial que los restantes fines que en unión con él constituyen el total destino asignado a la especie humana por la ley misma de su naturaleza.

No es maravilla, por tanto, que los pensadores como los políticos hayan procurado poner eficaz remedio a mal tan grave, apurando para ello todos los recursos posibles, y apelando, lo mismo a los sanos consejos de la razón práctica, que a las peligrosas sugerencias de la utopía. Diversas y aun contradictorias han sido las soluciones que a tan temido problema han propuesto las diferentes escuelas; no pocas han pecado de excesivo exclusivismo, cayendo con frecuencia, ora en un anárquico individualismo que rompe todo lazo social y confía los humanos destinos a las sugerencias, no siempre acertadas ni justas, del interés individual, ora en un socialismo absorbente, que suprimiendo uno de los términos del problema, resucita en nuestros tiempos la guerra de clases o sacrifica los beneficios de la libertad y las necesidades más altas de la vida moral, en aras de los apetitos materiales y de las más desenfrenadas pasiones. Extraviado el pensamiento por tales caminos, no ha podido ser la concordia el punto de estos esfuerzos, ni la resolución de las crisis sociales el resultado de estos trabajos.

A que males semejantes no hallen fácil remedio, contribuye, a no dudarlo, la carencia de instituciones dotadas de fuerza y autoridad bastantes para mediar entre capitalistas y obreros y dirimir las cuestiones que entre ellos se susciten, dando de esta suerte la paz y armonía necesaria a los que, contra todo pensamiento de odio y toda sugestión apasionada, deben considerarse como colaboradores y coparticipes en una obra común de que unos y otros son indispensables factores, y no como irreconciliables enemigos. Este aspecto de la cuestión ha sido reconocido por los políticos, a que se debe la idea de los jurados mixtos, institución que ha de ser paliativo eficaz, ya que no decisivo remedio, de las per-

turbaciones que la lucha entre el capital y el trabajo engendra, y que será además el germen de la fundamental institución que rija en su día el orden económico, a la manera que el Estado gobierna el orden jurídico, la Universidad el orden científico, y la Iglesia el orden religioso.

Respondiendo a esta necesidad de los tiempos, y cediendo de buen grado a los clamores de la opinión unánime, que demanda reformas sociales que, sin destruir las bases en que el edificio social descansa, ni lastimar derechos adquiridos, ni quebrantar violentamente respetables tradiciones, faciliten a las clases -- trabajadoras los medios necesarios para mejorar su condición y elevar el nivel de su bienestar moral y material, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el poder ejecutivo, tiene el honor de presentar a las Cortes Constituyentes el adjunto

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. Para dirimir equitativa y amistosamente las diferencias que puedan surgir entre propietarios, empresarios o fabricantes, y colonos, braceros u obreros, se instituirán jurados mixtos en todas las localidades donde la Diputación provincial -- respectiva lo acuerde, bien espontáneamente, bien a instancia de cualquier interesado. La denegación en este último caso habrá -- de ser fundada y se insertará en los periódicos oficiales.

Art. 2º. El jurado se instituiría con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-- Habrá un jurado para cada industria.

Segunda.-- Serán electores para constituirlo todos los que en la localidad tomen parte en la industria respectiva, en concepto de capitalistas u obreros y estén en el goce de sus derechos -- civiles y políticos.

Tercera.— Son elegibles todos los ciudadanos, cualesquiera que sean su profesión y vecindad, que estén también en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Cuarta.— Los electores se dividirán en dos grupos: uno de obreros y otro de capitalistas.

Quinta.— Los electores de cada grupo elegirán cuatro jurados: dos, pertenecientes a la condición de capitalistas, y dos a la de obreros.

Sexta.— La elección será directa, y el voto público.

Séptima.— El jurado elegido funcionará durante un año, renovándose por mitad en cada uno.

Octava.— Los ocho elegidos para constituir el jurado, nombrarán de fuera de su seno un presidente. Si no lograsen ponerse de acuerdo, lo elegirá el Ayuntamiento de la localidad.

Novena.— El Ayuntamiento, también por sí o por medio de sus alcaldes o concejales, preparará las elecciones, las presidirá y proclamará los candidatos.

Décima.— Si en la elección y constitución del jurado se faltase a alguna de las bases expresadas, podrá entablarse por cualquiera de los interesados o por el ministerio público recurso de nulidad, que sustanciará y decidirá el tribunal colegiado del partido o del territorio.

Art. 3º. El jurado mixto es el único tribunal competente para resolver las cuestiones civiles que ocurran entre capitalistas y obreros con motivo del cumplimiento de los contratos que hayan celebrado libremente entre sí, siendo en estos asuntos su fallo inapelable y ejecutivo.

Art. 4º. Todos los capitalistas y obreros que hayan solicitado su inclusión en las listas electorales para la formación del jurado, quedan obligados a someter al mismo todas cuantas diferencias ocurran entre ellos acerca del salario, horas de trabajo, forma de éste, etc., y acatar lo que el jurado acuerde.

Art. 5º. Así los capitalistas como los obreros que no hayan intervenido en la formación del jurado, podrán, sin embargo, solicitar la intervención de éste en su caso, entendiéndose que cuando lo verifiquen se considerarán sometidos a su jurisdicción, y por tanto, obligados a aceptar y cumplir los acuerdos del jurado.

Art. 6º. Cada jurado nombrará los individuos de su seno, para que asistan en su representación al Congreso que se ha de reunir en Madrid el día 15 de octubre de cada año, con el fin de dar cuenta del resultado obtenido durante el año por esta institución, y de proponer cuanto dichos representantes estimen conducente al desarrollo y organización de la industria.

Madrid, 14 de agosto de 1873.- El Ministro de Fomento,
José Fernando González.

APENDIX VI

"PACTE DE LA GENERALITAT" I DOCUMENTS
OFICIALS, ORDRES, ACORDS, CIRCULARS, ETC.
ENTORN DE LA PROBLEMÀTICA DELS CONTRAC-
TES DE CONREU I QUE SERVEIXEN DE REFERÉN-
CIA A LA COMISSIÓ JURÌDICA ASSESSORA I AL -
PARLAMENT CATALÀ PER REDACTAR LA LLEI
DE CONTRACTES DE CONREU.

ACORD SIGNAT EL 21 DE SETEMBRE DE 1931 A LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
PER TAL DE DONAR UNA SOLUCIÓ AL PROBLEMA PLANTEJAT ENTRE PROPIETARIS
DE TERRES I RABASSAIRES, CONEGUT PER "EL PACTE DE LA GENERALITAT" -

A la ciutat de Barcelona, a vint-i-un de setembre de mil nou-cents trenta-un, al Palau de la Generalitat de Catalunya, reunits sota la presidència de l'Honorable Senyor President de la Generalitat, amb assistència del Governador Civil de la Província de Barcelona, i dels parlamentaris senyors Lluís Companys, Joan Lluhí i Vallescà i Amadeu - Aragay, d'una banda; el senyor Jaume de Riba, Xavier de Ros, Josep Si-rera, Joan Parellada, Lluís Desvalls, Marquès de Farràs, en representa-ció de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre; en representació de - l'estament propietari, i els senyors Francesc Riera, Josep Sala, Feliu Roig, Josep M^a Maurell, Mateu Raventós, Benjamí Jané, Ramon Poch, Andreu Turina, Ignasi Oriol, Jaume Sellés i Josep Buil, de la Unió de Rabassai-res i altres conreadors del camp de Catalunya, en representació de l'es-tament de rabassaires i parcera, per tal de resoldre el conflicte a Cata-lunya amb motiu de la interpretació dels Decrets del Govern de la Repú-blica d'II de juliol i 6 d'agost darrers i de 10 de l'actual mes que som, sense perjudici dels resultats de la revisió de renda per a aquest any estatufida en els Decrets esmentats i a l'efecte d'evitar consignacions judicials i perjudicis per totes dues parts.

Debatuts amplament els assumptes plantejats, han estat adoptats els següents acords, que tots dos estaments s'obliguen a complir:

Primer.- Cada rabassaire o parcer podrà concertar lliurement amb el seu propietari els pactes i estipulacions que tingui per convenient, sense que cap dels dos estaments influeixi coactivament a la llibertat de contractació.

Segon.- Els que tinguin ja demanada o que demanin la revisió de la renda substituiran la consignació judicial pel lliurament al propietari d'una part de la collita calculada de la següent manera, o sigui: que si lliuraba una meitat de fruits en lliurarà un terç; si en lliuraba dos cinquens, en lliurarà dos settens; si en lliuraba un terç, en lliurarà un quart; si en lliuraba un quart, en lliurarà un cinquè; - si en lliuraba un cinquè, en lliurarà un sisè, i si en lliuraba dos setens, en lliurarà dos novens.

Tercer.- El propietari podrà intervenir a la medicció i pes de la collita, per ell o per persona que el representi. Dels fruits que rebri en lliurarà un document al parcer o al rabassaire, i el propi farà l'altra part, expressant que el lliurament fet segons el tipus ara convingut en res no perjudica els resultats del judici de revisió, on cadascuna part podrà defensar lliurement els seus drets.

Quart.- El lliurament dels fruits, de conformitat amb l'establert assolirà tots els efectes de la consignació judicial, quant el judici de revisió, i bastarà a qui demani la revisió manifestar i justificar en el seu cas amb el corresponent rebut el lliurament fet. Per tant, mitjançant l'acompliment del pactat, no podrà el propietari exercitar, --

per manca de pagament cap altra acció fins després del judici de revisió.

Cinquè.- Els que en la data present haguessin alçat i fet seva la totalitat de la collita pagaran la part al propietari, de conformitat amb la base establerta en el pacte segon. Si es tractés de raïms, podrà pagar, salvant pacte directe amb el propietari, amb diner o vi; per a pagar amb diner tindrà temps fins el vint de novembre, i per a pagar amb vi, fins que estigui elaborat, sense que pugui passar del vint de novembre. El preu serà calculat el que tingui fixat la respectiva comarca al mercat de Vilafranca del Penedès, el dia quinze de l'esmentat novembre vinent. Per drets d'elaboració, el parcer o rabassaire retindrà la brisa i una pesseta per càrrega.

Sisè.- Els parcers o rabassaires de les vinyes que en l'actualitat s'estant collint i que hagin demanat o demanin la revisió, podran usar qualsevol dels drets que atorguen els articles segon i cinquè d'aquest conveni.

Setè.- De comú acord es presentarà immediatament escrit al Jutjat corresponent per demanar la tornada de les quantitats consignades, les quals seran lliurades al propietari a compte del que li pertorqui el vint de novembre, si el pagament calgués fer-lo en diner, i el parcer o rabassaire en tot altre cas.

Vuitè.- Tota diferència per a l'acompliment de l'acordat serà resolta en cada cas per una Comissió Mixta composta de dos representants de la Unió de Rabassaires i altres conreadors del camp de Catalunya, i

de dos més de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, presidida per un delegat de l'Honorable Senyor President de la Generalitat - de Catalunya. La Comissió es reunirà al Palau de la Generalitat, on podran ésser adreçades directament les reclamacions.

CIRCULAR DEL GOVERNADOR CIVIL DE BARCELONA, DEL DIA 8 DE SETEMBRE DE

1931

De procedència diversa i, per tant, de diferents estaments, han estat formulades a aquest Govern civil repetides consultes en -- relació als drets i obligacions de parcens i propietaris de terres -- i a la situació jurídica de cada un. En forma menys concreta, han arribat fins a aquest mateix Govern notícies de determinades agitacions promogudes a la fins ara pacífica i assenyada pagesia de Catalunya, -- al marge de la llei i del dret, i que fàcilment podrien representar un perill per a l'ordre públic.

Ha entès fins ara aquest Govern civil que la solució dels -- conflictes jurídics és als Tribunals i organismes establerts per les disposicions vigents a qui pertoca dirimir-los amb l'autoritat augusta i la responsabilitat legal i moral que implica llur funció.

Ateses, però, les repercussions indiscutibles que les agitacions promogudes i àdhuc certes interpretacions, per una i altra banda exagerades, de les disposicions vigents, poden tenir en l'ordre públic, s'imposa la necessitat de recordar a tothom, i per tal que ningú no pugui al·legar-ne de bona fe ignorància, aquestes mateixes disposicions del Govern de la República.

Majorment a la nostra terra, hom ha de recordar aquestes prescripcions i precisar-ne bé l'abast, puix que una de les tradicions més glorioses del territori de Catalunya i dels influenciats per ella, és la de llur pagesia, o sigui de la relació harmònica establerta per l'aprofitament i conreu de la terra, harmonització d'interessos que ha fet possible que arribi l'acció fecunda del treball fins al cim de les muntanyes, que a Catalunya no hi hagi terres desaprofitades, que no pateixi el nostre poble cap dels inconvenients del latifundi, i que les relacions entre propietaris i masovers constitueixin una veritable associació, la qual, lluny d'enfrontar hostilment els que la formen, els converteixi, si tot hom de bona fe obra, en factors d'un comú profit i d'una mateixa riquesa.

Aquestes relacions de naturalesa evidentment i principalment jurídica, no han hagut d'ésser fixades pel pragmatisme d'una llei més o menys improvisada i apriorística. El seny tradicional del nostre poble ha establert consuetudinàriament el dret pel qual les dites relacions vénen regulades. No té aquest dret gaires monuments escrits, es fundà en el costum, en la qual formació han intervingut per igual amos i pagesos en cada comarca, amb fortuna tal, que, fora dels conreus i explotacions forestals plenament industrialitzats és escassíssim i en manta contracta gairebé desconeguda, la condició precària del jornal agrícola.

La llei escrita i l'acció de l'autoritat no han hagut d'intervenir més que per a reprimir la mala fe quan existia, i per a fixar la deguda proporció entre les dues parts, per tal que l'una no prevalgui en menyspreu i ruïna de l'altra.

Es d'esperar que instituïda a Catalunya la facultat nadiua de regular el propi dret civil, serà ben aviat establerta en forma adequada a les necessitats dels temps presents, que per concauses diverses fan difícil la conservació i evolució progressiva i justa del dret consuetudinari, la legislació en aquesta matèria, evitant tot dubte i confusió. Mentrestant, però, són d'aplicació els decrets que amb caràcter transitori o sigui vigents tan sols per aquest any foren promulgats pel Govern de la República amb data d'II de juliol i 6 d'agost del present any.

L'esperit d'aquesta legislació no requereix certament explicacions. D'una banda la renda ha d'ésser disminuïda sempre que resulti exagerada; d'altra, com diu textualment l'exposició de motius del Decret de 6 d'agost, el règim excepcional establert en matèria de revisió de rendes mai no pot servir de pretext per a burlar el pagament del que resulti del judici de revisió quan procedeix.

I norma essencial del dret és la que ningú no pot prendre's la justícia per la seva mà. Els Tribunals són els únics que, oïdes ambdues parts, han de resoldre els conflictes que es presenten.

Per tant, aquest Govern civil recorda les normes i prescripcions següents:

I

Els contractes de tota mena, sigui la que es vulgui la forma en què han estat pactats han d'ésser complerts, i obliguen no tan sols a allò pactat expressament, sinó, també, a totes les seves conseqüències que siguin conformes a la bona fe, a l'ús i a la llei (ar-

ticle 1.258 del Codi civil espanyol amb la llei pròpiament vigent al territori de Catalunya).

En conseqüència els contractes de masoveria, parceria, - arrendament de terres i els altres similars han d'ésser complerts exactament, àdhuc que siguin verbals; cada part ha d'efectuar les prestacions expressament pactades, i en defecte del pacte exprés, les acostumades a la finca, i no havent-n'hi d'especials al poble de la comarca. Cap propietari, doncs, no pot deixar de contribuir amb els adobs, llavors i totes menes d'altres prestacions a què - vingui obligat, ni cap masover, parcer ni arrendatari pot deixar d'emprar en el conreu segons ús i costums del bon pagès, aquella activitat, cura, treballs i aportacions pactades, i en defecte de pacte exprés, les acostumades, car tant en la llei contractual com en l'escripta, la consuetud, és el seu millor intèrpret (cit. art. 1.287 del Codi citat).

II

Es norma general i fonamental del dret, la de pagar les rendes o lliurar les parts de fruits que resultin del contracte.

III

Tot masover, parcer i arrendatari, quan cregui de bona fe que és excessiva la renda que pagui, pot acudir al Jurat de la propietat rústica, i si no fos constituït, al Jutjat de primera instància del partit, que sigui competent, per tal de demanar-ne la -

reducció (articles primer i quart del Decret d'II de juliol, i article primer del de 6 d'agost del present any). La revisió no es pot fer extensiva a cap dels altres pactes i condicions del contracte (article primer d'idem).

IV

Quan el contracte sigui de pur arrendament, o sigui quan la renda és pagada en diner o en cosa equivalent fixada per endavant, la reducció s'haurà d'efectuar sempre que el preu sigui superior al que correspongui a la finca arrendada segons l'avenç cadastral, i en el seu defecte, segons el líquid imponible o al que, atesa la collita actual, sigui equitable pagar (article primer del Decret del dia II de juliol).

En els contractes de parceria i altres similars, seran ateses, per tal de fixar en el seu cas la reducció, les aportacions corresponents al propietari i al parcer. En conseqüència seran estimats per a la resolució el valor de la terra, habitació, estables, corrals, pastures, etc., i el de les altres prestacions del propietari correlativament a les del parcer o masover (article quart d'idem).

V

Tot arrendatari podrà sol·licitar que li sigui ajornat totalment o escalonadament el termini de pagament de la renda en diner, sense que l'ajornament pugui excedir d'un any (article cinquè d'idem).

És lògica aplicació del dit precepte la conseqüència palesa que no pot ésser demorat el lliurament de parts de fruits.

Els judicis de comiats judicials (deshauci) interposats per manca de pagament de preu o part de fruits, quedaran en suspens en el propi instant que l'arrendatari o parcer acreditat, per certificació del Jurat Mixte o del Jutge de primera instància del partit, haver sol·licitat la revisió de la renda o parceria (article tercer d'idem).

Perquè sigui possible la suspensió mitjançant el lliurament de la certificació esmentada, és condició indispensable i precisa la consignació a poder del Jutjat de primera instància del Jurat Mixt de l'import de la renda cadastral o de la corresponent al líquid imponible acreditat per l'amillament. Quan no sigui possible conèixer la quantitat representativa del líquid imponible o de la renda cadastral, haurà d'ésser consignada la quantitat que el Jutge o Jurat fixin, segons el seu prudent arbitri, tenint en compte les circumstàncies especials de cada cas (article quart del Decret de 6 d'agost).

En conseqüència no pot ésser lliurada la certificació necessària per a la suspensió dels comiats judicials sense la prèvia consignació esmentada. Al sol·licitant correspon aportar totes les dades referent de l'amillament o renda cadastral. Solament tindrà lloc allò previngut en l'últim incís de l'article quart del Decret de 6 d'agost, quan en vista de les certificacions corresponents no sigui possible fixar el líquid imponible de la terra arrendada.

VII

El propietari conserva tots els drets que li pertocuen relatius a la collita, veremes, batudes, etc., etc.; com també a la comprovació, medicació, custòdia i venda de fruits. En cas de dubte seria preferible que les parts interessades, de comú acord, proveïssin a la seguretat i tutela del dret i interès respectius, tenint present que en un cas de litigi, la cosa litigiosa pertany a ambdues parts.

No hi ha d'haver inconvenient que cada part retiri i faci els fruits reconeguts per l'altra.

VIII

La validesa i el compliment dels contractes no poden restar a l'arbitri d'una sola part contractant (article 1.256 del Codi civil). Ningú tampoc pot prendre's la justícia per la seva pròpia mà.

En conseqüència, sempre que sorgeixi contenció, és l'autoritat judicial la que ha de resoldre, i no és lícit, a una de les parts contractants, deixar infringit per pròpia autoritat cap dels pactes del contracte.

IX

Les coaccions de tota mena són prohibides per la llei. Conseqüentment, no és lícit obligar als pagesos i arrendataris que demanin a contraccor la revisió dels respectius contractes, ni que deixin de demanar-la quan a bona fe ho estimin pertinent. Menys legal fóra tota propaganda oral o de fet encaminada a produir un estat col·lectiu de pertorbació o aconseguir la infracció de la llei que hom procedeixi en oposició a les seves normes.

Tota coacció i tot acte contrari a la llei han d'ésser immediatament denunciats a l'Autoritat corresponent més pròxima i, amb preferència, directament a l'Autoritat judicial.

Sempre que una persona investida d'Autoritat, tingués - part en actes semblants, sense perjudici de la denúncia corresponent, hauran els fets d'ésser comunicats a aquest Govern civil i si es tractava de Jutges o funcionaris municipals de Justícia, a l'excel·lentíssim Sr. President de l'Audiència.

X

Als Tribunals pertoca declarar si vénen o no compresos en els Decrets abans esmentats els contractes dits de rabassa - morta, els quals més que amb l'arrendament tenen afinitat amb - l'enfiteusi. De totes maneres, sempre que hi hagués contenció, hauran d'ésser observades les normes precedents.

Els senyors Alcaldes tindran cura de donar a la present la major publicitat possible i posaran al coneixement d'aquest Govern civil tot acte contrari a la llei que ocorri en el seu - respectiu terme municipal.

Barcelona, 8 de setembre de 1931.

El Governador Civil,

ANGUERA DE SOJO

DECRET REFERENT A LA PRORROGA D'ARRENDAMENTS DE FINQUES RÚSTIQUES I
REVISIÓ DEL PREU D'ARRENDAMENT DE 31 D'OCTUBRE DE 1931 (GAZ. I DE NO--
SEMBRE)

El Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1º. Los contratos de arrendamientos de fincas - rústicas en explotación agrícola o pecuaria que hayan vencido o venzan antes del día 2 de marzo de 1932, siempre que el arrendatario - continúa en la tenencia de la finca, se entenderán prorrogados obligatoriamente por una anualidad, a no ser que el arrendatario renun- cie a la prórroga dentro de los quince días siguientes al vencimiento de contrato.

Art. 2º. En los contratos de arrendamiento de fincas rús- ticas, cualquiera que sea su precio, así como en los de aparcería y formas forales análogas a ellos, cual "la rabassa morta", podrán los arrendatarios y aparceros solicitar la revisión del contrato al único efecto de la reducción de la renta o participación del año agrícola presente.

Esta revisión sólo podrá solicitarse hasta el día en que de- ba hacerse el pago de la renta, o en los quince días siguientes al de

la publicación del presente Decreto, cuando se trate de rentas ya vencidas.

Art. 3º. Los subarrendatarios tendrán, respecto de los subarrendadores, los mismos derechos de revisión y prórroga que el presente Decreto concede a los arrendatarios respecto de los arrendadores.

Art. 4º. De la revisión a que se refieren los artículos anteriores entenderán los Jurados Mixtos de la propiedad rústica, y en los lugares donde aún no se hubieren constituido, los Jueces de primera instancia del partido correspondiente, hasta tanto que se constituyan.

El Juez, sin dejar de entender en el asunto hasta su terminación, pondrá en conocimiento del Ministerio del Trabajo y Previsión haberse formulado petición de revisión de renta, para que éste proceda, si lo estima conveniente, a la constitución del Jurado Mixto.

Art. 5º. Para solicitar la revisión a que se refiere el artículo 2º, será condición indispensable que el arrendatario consigné, en metálico o en frutos, ante el Jurado Mixto o ante el Juzgado de primera instancia si se trata de arrendamiento, la renta catastral o la mitad de la renta pactada, según se trate de finca catastrada o no catastrada, y si se trata de aparcería, la mitad de la participación que corresponda al arrendador. La cantidad consignada en metálico o en frutos, pertenece a éste.

Cuando el arrendador hubiese trabado embargo sobre los bienes del arrendatario o aparcerero para el pago de la renta, no será necesario verificar la consignación.

Tampoco será necesaria la consignación cuando el colono o aparcerero tenga anticipada al arrendador la mitad al menos de la renta, y así lo acredite.

La consignación establecida por el presente artículo deberá verificarse al tiempo de solicitar la revisión, o, en su defecto, dentro del plazo que el Juez de primera instancia o Presidente del Jurado Mixto determinen, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.

No haciéndose la consignación en el tiempo establecido en el párrafo anterior, se declarará caducado el derecho del solicitante y no se dará curso a su solicitud.

Las consignaciones practicadas antes de la promulgación de este Decreto se tendrán como válidas en lo que se refiere a su cuantía y se entregarán al arrendador conforme a lo que se dispone en el art. 12.

Art. 6º. La revisión y, en su caso, la reducción de rentas, se ajustará a las normas siguientes:

a) En la zona catastrada.— El Jurado Mixto o el Juez de primera instancia, a su prudente arbitrio, teniendo en cuenta las condiciones que se determinan en el artículo 7º, tenderá a aproximar las rentas contractuales a las fijadas por el Catastro desde I de enero de 1921 incrementando las valoraciones anteriores a esa fecha con el 50 por ciento en los términos municipales valorados antes de I de enero de 1916 y antes de I de enero de 1921.

En ningún caso la renta que se fije en el juicio de revisión podrá ser inferior a la renta catastral, determinada en la forma que establece en el párrafo anterior.

b) En la zona no catastrada.— El Jurado mixto o el Juez de primera instancia, a su prudente arbitrio, teniendo en cuenta las condiciones que se determinan en el artículo 7º, podrá reducir la renta contractual hasta un 50 por ciento, que será el límite máximo de reducción. Cuando el propietario pruebe cuál era la renta de la finca o fincas durante el año agrícola 1913 a 1914, la cuantía de esta renta marcará dicho límite máximo de reducción. No procederá rebaja alguna cuando la renta sea igual o inferior al líquido imponible del amillaramiento.

Dentro de los límites máximos de reducción marcados en el párrafo anterior, si el arrendatario prueba que la finca arrendada paga en concepto de renta una cantidad igual o superior a la que satisfacía la misma finca en el año agrícola 1918-1919, procederá la rebaja del 20 por ciento como mínimo, siempre que dicha renta, en relación con la de 1913-1914, haya sufrido al menos un aumento del 20 por ciento.

Art. 7º. En el juicio de revisión se tendrá en cuenta para fijar la cuantía de la reducción, cuando proceda, las siguientes circunstancias:

a) En relación con el arrendador e imputándolo a su favor.- Primera. El valor de las mejoras útiles que haya realizado por su cuenta en la finca, así como la exención tributaria que esto le hubiera creado.

Segunda. La favorable situación patrimonial del arrendatario en relación con el arrendador de un fundo pequeño o mediano.

Tercera. La circunstancia de ser el arrendador imposibilitado, huérfano menor de edad, mujer soltera huérfana o viuda.

Cuarta. La moderada cuantía de anteriores arrendamientos, combinada con la continuidad de los mismos arrendatarios.

b) En relación con el arrendatario o imputándolo a su favor.- Primera. El valor de las mejoras útiles que hubiese realizado por su cuenta en la finca.

Segunda. El hecho de llevar el arrendatario largo tiempo explotando las fincas arrendadas.

Tercera. El absentismo del arrendador.

Cuarta. La ventajosa situación económica de éste en relación con la del arrendatario.

Quinta. Por lo que este año agrícola afecta, la cantidad y calidad de la cosecha, la elevación de los jornales y los gastos extraordinarios que haya tenido que verificar el arrendatario.

Art. 8º. En los contratos de aparcería, los Jurados mixtos o el Juez de primera instancia, en su defecto, tendrán en cuenta, a los efectos del juicio de revisión, las distintas prestaciones que en el contrato se asignen a propietario y aparcerero, graduando la mutua participación teniendo en cuenta como referencia las orientaciones señaladas en el artículo anterior.

Art. 9º. Quedará en suspenso la tramitación de los deshaucios de fincas rústicas o de cualesquiera otros procedimientos judiciales incoados por falta de pago desde el II de julio del presente año, en cuanto el arrendatario o parcero acrediten en autos por certificación del Juez de primera instancia o del Presidente del Jurado mixto haber solicitado en los términos previstos en este Decreto la revisión del contrato.

También quedarán sin efecto los deshaucios o cualesquiera otros procedimientos judiciales intentados por vencimiento del término del contrato, cuando se den las circunstancias señaladas en el artículo Iº de este Decreto.

Acordada la reducción de la renta por el Jurado mixto o por el Juez, el arrendatario podrá evitar el deshaucio consignando en la Secretaría del Juzgado la renta que haya sido fijada en el juicio de revisión.

PREPARACIÓN DEL JUICIO DE REVISIÓN
Y CONSIGNACIÓN DE LA RENTA

Art. 10. En la tramitación del juicio de revisión, ante el Jurado mixto o ante el Juzgado de primera instancia en defecto de aquél, se observará lo preceptuado en los artículos 1811 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil en cuanto no se opongan a las siguientes reglas:

Primera. Todas las actuaciones serán gratuitas y se entenderán en papel de oficio.

Segunda. La solicitud deberá contener, cuando sea posible, los extremos siguientes:

- a) Nombres, apellidos y vecindad del solicitante.
- b) Nombres, apellidos y vecindad del arrendador.
- c) Relación de la finca de que se trate, con expresión de su cabida y término donde se encuentre.

d) Cantidad que el solicitante viene satisfaciendo como renta, sea en metálico o en frutos, y si se trata de aparcería, participación que en ella percibe, así como cuantas prestaciones, obligaciones y cargas pesen sobre el arrendatario o aparcerero y no vayan incluidas en el concepto de renta.

e) Mejoras realizadas por el arrendatario o aparcerero, y a su costa, en la finca arrendada.

f) Mejoras realizadas por el arrendador y a su costa.

g) Rebaja de renta que se solicita.

Este escrito se formulará sintéticamente, sin alegaciones de ninguna clase, y limitándose exclusivamente a suministrar los datos enumerados. A dicho escrito se acompañarán cuantos documentos sirvan para acreditar las manifestaciones que en el mismo se contengan.

Se acompañará también una copia del escrito, sin que sea necesario acompañar copia de los demás documentos.

Art. II. Cuando en el momento de formular la solicitud no se verifique la consignación en la forma establecida por el art. 5º de este Decreto, el Presidente del Jurado Mixto o el Juez de primera instancia requerirá al solicitante para que la efectúe en un plazo que no podrá exceder de diez días, advirtiéndole que de no hacerlo así declarará caducado su derecho.

La consignación en metálico se verificará depositando en la mesa del Juzgado la cantidad correspondiente. La consignación de frutos se verificará constituyéndose el propio solicitante en depositario interino de los mismos, mientras el Jurado o el Juez ordena su entrega al arrendador o su depósito definitivo, con arreglo a los dos artículos siguientes.

Art. 12. El Jurado o el Juez de oficio, requerirá inmediatamente al arrendador para que se haga cargo de la cantidad - consignada en la mesa del Juzgado o de la parte de frutos depositada interinamente en poder del solicitante. En este momento le - hará también entrega de la copia de la solicitud presentada por la persona que haya solicitado la revisión.

Art. 13. Cuando el requerido se negare a recibir la consignación o no se hiciere cargo de ella inmediatamente, el Juez o el Jurado procederá al depósito definitivo de los frutos o renta en la forma que determina el R. D. de 24 de diciembre de 1906.

Los gastos que origine este depósito serán de cuenta del - arrendador.

Art. 14. Si el propietario no formulare oposición pasado el término de ocho días, a contar desde el siguiente al en que le fué entregada la copia de la solicitud, el Jurado o el Juez de primera instancia, de oficio o a instancia del solicitante, aprobará - la consignación verificada y sin otro trámite dictará resolución de- terminando la renta.

Si el propietario formulare oposición, el Jurado o el Juez, aprobando la consignación verificada, declarará iniciado el juicio arbitral de revisión de renta.

Art. 15. Las certificaciones de los amillaramientos o registros catastrales que sean solicitadas por los arrendatarios o aparceros para su presentación en el juicio arbitral de revisión de rentas o por los Presidentes de los Jurados mixtos o Jueces de primera instancia, se extenderán gratuitamente en papel común.

JUICIO ARBITRAL DE REVISIÓN

Art. 16. Declarado iniciado el juicio arbitral de revisión, serán citadas las partes para el acto conciliatorio. Si el demandante no asistiere, habiendo sido citado, se le tendrá por desistido de su demanda. Si no asistiere el demandado y los motivos de su inasistencia no estuvieren justificados a juicio del Juez o del Jurado mixto, se le impondrá una multa, que no excederá de 500 pesetas y no bajará de 50.

La asistencia a este acto podrá verificarse por medio de mandatario o representante, siempre que éste se halle provisto de poder o autorización con expresa facultad para transigir. La autorización podrá ser extendida en documento privado.

Art. 17. La misión del Juez de primera instancia o del Jurado mixto será en este acto, expresamente conciliadora y tenderá principalmente a conseguir que demandante y demandado diriman todas sus diferencias. A estos efectos, el Juez de primera instancia, el Presidente del Jurado mixto o cualquiera de sus Vocales, podrán interesar de las partes las explicaciones que estimen oportunas y proponerles fórmulas de concordia.

Art. 18. Si se consiguiera el acuerdo, de su resultado se extenderá la oportuna acta, en la que se consignarán con claridad y concisión las nuevas estipulaciones.

Si el acuerdo no se consiguiera, se hará constar así en el acta que deberá contener un extracto, lo más breve posible, de las alegaciones del demandante y del demandado. A esta acta se unirán cuantos documentos presenten las partes. Inmediatamente el Jurado mixto o el Juez señalará día para la celebración del juicio de revisión, haciéndolo constar en el acta, con lo que las partes que hayan concurrido se tendrán por citadas.

Si el demandado no hubiese asistido, alegando causa justificada, se suspenderá el acto, señalando otro día para su celebración. Caso contrario, se tendrá por intentado sin avenencia, sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 16.

Art. 19. Si el Juez de primera instancia manifestase por sí o el Jurado mixto declarase por unanimidad haberse instruido suficientemente para formar juicio con los documentos presentados en el acto conciliatorio y lo manifestado por las partes, lo harán constar en el acta, declarando concluso el juicio para sentencia, sin necesidad de volver a oír a demandante y demandado.

Art. 20. El Jurado mixto o el Juez de primera instancia podrá requerir la asistencia de personas técnicas en concepto de asesores. También podrán pedir a las partes y a las dependencias u organismos oficiales todos aquellos documentos que consideren necesarios.

Del mismo modo podrán llamar a su presencia a testigos, propuestos o no por las partes, interrogándoles libremente sin sujetarse a interrogatorio formulado previamente por demandado o demandante, y, en general, utilizar cuantos medios de prueba estimen pertinentes para formar exacto juicio sobre la cuestión promovida.

Art. 21. A la sesión en que se celebre el juicio de revisión podrán asistir las partes, previamente citadas, con todos los elementos de prueba de que intenten valerse. Si asistieren, el Juez o Jurado oírás sus alegaciones y practicará en el acto las pruebas que sean ofrecidas y declaradas pertinentes.

El Juez de primera instancia o el Presidente del Jurado mixto en su caso, dirigirá los debates y tendrá facultad para declarar suficientemente discutido el asunto.

Art. 22. La sentencia será dictada por el Juez de primera instancia en el acto. Sin embargo, podrá demorar hasta el término de tres días el plazo para dictar sentencia cuando necesite practicar alguna diligencia para el mejor conocimiento de la cuestión.

Si el juicio de revisión se celebrase ante el Jurado mixto, se someterá a los Jurados el correspondiente veredicto, que será redactado por el Presidente, oyendo las indicaciones de los Vocales y de las partes que se hallaren presentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos.

Art. 23. De la sesión en que se celebre el juicio arbitral se levantará la correspondiente acta, haciendo constar en forma muy sucinta todas las incidencias de la misma.

Art. 24. La sentencia será notificada a las partes, haciéndoles saber que pueden utilizar el recurso de apelación ante la Comisión mixta arbitral agrícola, del Ministerio de Trabajo y Previsión, en el plazo de cinco días.

Interpuesto en tiempo hábil el recurso de apelación, se remitirán todas las actuaciones a dicha Comisión mixta, comunicándolo así inmediatamente a las partes.

Para la ejecución de la sentencia, una vez firme, se seguirán los trámites señalados en la ley de Enjuiciamiento civil para la ejecución de sentencias.

Art. 25. Todas las citaciones, notificaciones y requerimientos se practicarán en la forma determinada en la ley de Enjuiciamiento civil.

No será necesario valerse de Abogado y Procurador en ningún caso. Los interesados podrán hacerse acompañar de hombres buenos.

Los Jurados mixtos y Jueces de primera instancia tendrán en cuenta las disposiciones generales contenidas en la ley de Enjuiciamiento civil para cuantas dudas surjan en la interpretación de las normas establecidas por el presente Decreto.

Art. 26. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las revisiones que se hubieren practicado - por los Jurados mixtos con arreglo a las disposiciones anteriores a este Decreto, si estuvieren en grado de apelación seguirán su curso, y si hubieren ganado ya firmeza, o cuando la ganen, se ejecutarán por los trámites determinados en la ley de Enjuiciamiento civil para la ejecución de las sentencias.

Segunda. Las revisiones que hasta el momento presente se hubieren solicitado ante los Jurados mixtos, o se hubieren - preparado ante los Juzgados de primera instancia y estuvieren - pendientes de resolución, se regirán por las normas del presente Decreto.

Tercera. Los convenios extrajudiciales sobre la reducción de rentas celebrados con posterioridad al Decreto de II de julio del presente año, no podrán ser objeto del juicio de revisión.

Dado en Madrid a treinta y uno de octubre de mil novecientos treinta y uno.

DISPOSICIONS LEGALS REFERENTS ALS JURATS MIXTOS DE LA PROPIETAT RÚSTICA,
EXTRETES DE LA LLEI DE JURATS MIXTOS PROFESSIONALS

LEY DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1931

(Gaceta 28 de noviembre)

JURADOS MIXTOS PROFESIONALES

Artículo 1º. La organización mixta profesional regulada por la presente ley comprende las instituciones que a continuación se expresan:

Jurados mixtos del trabajo industrial y rural.- Jurados mixtos de la propiedad rústica.- Jurados mixtos de la producción y las industrias agrarias.

DECRET ATORGANT PRORROGA AL TERME DE 15 DIES ESTABLERT EN EL PARAGRAF
2 DEL DECRET DE 31 D'OCTUBRE DE 1931, DE 10 DE DESEMBRE DE 1931 (GAZ.
DEL DIA 13)

No obstante lo dispuesto en el Decreto de 13 de noviembre próximo pasado y accediendo a reiteradas instancias de los elementos interesados, que desde casi todas las provincias alegan dificultades para proveerse de los documentos necesarios.

El Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Justicia, decreta:

Artículo Único.- Se prorroga hasta el día 31, inclusive, - del mes de diciembre actual el plazo de quince días establecido en - el párrafo segundo del artículo 2º del Decreto de 31 de octubre del año en curso, para solicitar la revisión de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas.

Dado en Madrid, a 3 de diciembre de mil novecientos treinta y uno.

DECRET ATORGANT UNA PRORROGA AL TERME DE QUINZE DIES ESTABLERT EN EL
PARAGRAF 2 DEL DECRET DE 31 D'OCTUBRE, DE 29 DE DÉSEMBRE DE 1.931

No obstante lo dispuesto en el Decreto de 10 del actual, y accediendo a reiteradas instancias de los elementos interesados, que desde casi todas las provincias alegan dificultades para proveerse de los documentos necesarios.

Vengo en decretar, a propuesta del Ministro de Justicia, lo siguiente:

Artículo único.- Se prorroga hasta el día 29 de febrero próximo inclusive el plazo de quince días establecido en el párrafo segundo del Decreto de 31 de octubre del año en curso para solicitar la revisión de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas.

Dado en Madrid, a veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta y uno.

ORDRE MINISTERIAL ASSENYALANT DIA PER A LA REUNIO DE LA COMISSIO ARBI-
TRAL AGRICOLA, DE 21 DE GENER DE 1932 (GAZ. DEL DIA 22)

Ilmo. Sr.: Las circunstancias especiales que se ofrecen para la contratación de los productos de las campañas remolachera y cañera del año actual aconsejan recoger la mayor suma posible de asesoramientos y elementos de ilustración para proveer con rectitud a las múltiples y contradictorias instancias recibidas de las dos partes interesadas en el problema.

Para procurarlo, este Ministerio ha acordado lo siguiente:

Que la sección remolachera--azucarera de la Comisión mixta Arbitral Agrícola se reúna el 26 del corriente, a las diez de la mañana, y que las sociedades de cultivadores de remolacha y de caña de azúcar y las Empresas transformadoras de estos productos que a continuación se indican se consideren invitadas por la presente disposición a designar representantes para que asistan a aquella reunión, pudiendo ponerse de acuerdo varias de ellas para nombrar un Delegado común:

Unión de Remolacheros y Cañeros Españoles.- Zaragoza.

Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra.- Madrid.

Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña.- Barcelona.

Asociación de Labradores.- Granada.

Cámara Oficial Agrícola.- Sevilla.

Asociación de Labradores.- Zaragoza.

Sindicato Central de Aragón.- Zaragoza.

Sociedad General Azucarera de España.- Madrid.

Compañía de Industrias Agrícolas.- Barcelona.

Fábrica San Isidro.- Granada.

Fábrica San Pascual.- Zujaira (Granada).

Azucarera Motrileña.- Motril (Granada).

Compañía Azucarera Peninsular.- Monzón (Huesca).

Bética.- Los Rosales (Sevilla)

Fábrica Santa Victoria.- Valladolid.

2º. En la reunión convocada solamente se discutirá el -
precio para la contratación de la caña y de la remolacha y la con-
veniencia o inconveniencia de reducir por este año la zona de cul-
tivo de los referidos productos y, en su caso, la forma procedente
para la reducción. Todos los asistentes podrán intervenir en la dis-
cusión, aportando datos y noticias para el más completo conocimiento
de los asuntos debatidos.

3º. La sección remolachero-azucarera de la Comisión mixta
Arbitral Agrícola, reunida después de celebrada la sesión anterior,
propondrá a este Ministerio las disposiciones que considere oportu-
nas, acompañadas del acta en que consten detallados los distintos -
criterios expuestos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.- Madrid,
21 de enero de 1932.

ORDRE MINISTERIAL CONVOCANT A ELECCIONS PER A LA DESIGNACIÓ DE VOCALS
PER LA COMISSIÓ MIXTA ARBITRAL AGRÍCOLA, DE 19 DE FEBRER DE 1932 (GAZ.
DEL DIA 20)

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.- Se convoca a elección entre asociaciones de colonos legalmente constituidas en las 50 provincias españolas inscritas en el censo electoral social de este ministerio para designación de tres vocales titulares y otros tantos suplentes que lleven la representación de la clase de arrendatarios en la Comisión mixta arbitral agrícola.

Segundo.- Las asociaciones expresadas llevarán a cabo la elección conforme a su reglamento en presencia de un delegado de la autoridad, pudiendo tomar parte en ella solamente los socios que tengan el carácter de arrendatarios de predios rústicos.

Tercero.- En el plazo de 30 días, a contar de la publicación de esta orden en la Gaceta, se enviará juntamente con una declaración jurada del número de colonos inscritos como socios en la respectiva -- asociación, las actas de la elección verificada al servicio de política agraria de este Ministerio para el oportuno escrutinio.

Lo que comunico, etc.

Madrid, 10 de febrero de 1932.

DECRET ESTABLINT UNA JURISDICCIO ESPECIAL PER ENTENDRE DE LES DEMANDES
DE REVISIO DE CONTRACTES DE FINQUES RUSTIQUES, DE 26 DE MARÇ DE 1932

(GAZ. DEL DIA 27)

El número extraordinario de juicios de revisión planteados al amparo de los Decretos de 11 de julio, 6 de agosto y 31 de octubre de 1931 y el gran retraso que en su tramitación se origina a causa del excesivo trabajo que pesa sobre los Juzgados de primera instancia, aconseja establecer una jurisdicción especial, así como procurar la simplificación de los procedimientos mediante la acumulación de actuaciones en todos aquellos casos en que las demandas promovidas puedan ser resueltas en una sola sentencia.

En virtud de estas consideraciones, a propuesta del Ministro de Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. En cada provincia se designarán uno o más funcionarios judiciales, con preferencia Jueces de primera instancia, que se encargarán, con el carácter de especiales, de tramitar y resolver -

las demandas de revisión de contratos de fincas rústicas presentadas con arreglo a los Decretos de 11 de julio, 6 de agosto y 31 de octubre de 1931 y que no hayan sido resueltas en la fecha de la publicación de este Decreto.

Artículo 2º. Cuando por el número de demandas en tramitación en una provincia sean designados para resolverlas dos o más funcionarios, al hacer su nombramiento se determinarán los partidos judiciales a que se extiende la competencia de cada uno de los nombrados.

Artículo 3º. Los funcionarios a que hacen referencia los artículos anteriores, se harán cargo en el término de tres días de la jurisdicción que se les encomiende; habilitarán o designarán Secretario que les auxilie y deberán realizar su cometido en el plazo máximo de sesenta días, a contar del en que se hagan cargo de la expresada jurisdicción.

Artículo 4º. El lugar de residencia de ésta se determinará al efectuar el nombramiento del funcionario.

Artículo 5º. Los Jueces especiales actuarán en la resolución de las demandas de revisión de que conozcan conforme al procedimiento indicado en el Decreto de 31 de octubre próximo pasado, y deberán acumular de oficio y fallar en una sola sentencia las demandas que se refieran a una misma finca, las que afecten a un mismo propietario en la misma localidad, siempre que las fincas sean de análoga conceptualización y las que, aun refiriéndose a distintos arrendatarios y propietarios, guarden entre sí indudable analogía y puedan fácilmente ser comprendidas en una sola resolución.

Cuando se interponga contra éste recurso ante la Comisión arbitral agrícola, se suspenderá la ejecución del fallo respecto a la demanda recurrida, y se remitirá dicha Comisión testimonio en relación de las actuaciones, comunicándolo a las partes. Respecto a las otras demandas, se ejecutará el fallo transcurridos cinco días de la notificación de la sentencia.

Artículo 6º. Los Jueces especiales actuarán por sí en los juicios que se promuevan donde no se haya constituido o no haya empezado a funcionar el Jurado mixto. Donde éste se hallare constituido presidirán los respectivos jurados.

Artículo 7º. Por el Ministerio de Justicia se dictarán las disposiciones que se estimen necesarias para el cumplimiento de este Decreto.

Dado en Madrid, a veintiséis de marzo de mil novecientos treinta y dos.

DECRET REFERENT A LA REVISIÓ DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE FINQUES
RÚSTIQUES EN RELACIÓ AMB EL TRIBUNAL SUPREM, DE 19 D'ABRIL DE 1932

(GAZ. DEL DIA 20).

Se dispone: 1º. Que por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de acuerdo con las Salas de Gobierno de las respectivas Audiencias Territoriales, se haga en el término de diez días, a contar del siguiente a la publicación de esta orden en la GACETA, el nombramiento de uno o varios funcionarios que, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 26 de marzo pasado han de resolver en cada provincia, con carácter de especiales, los expedientes de revisión de contratos de arrendamientos de fincas rústicas, a efectos de reducción de renta, que se hallen pendientes de resolución.

2º. Al hacer el nombramiento se designará el lugar de residencia de esta jurisdicción especial, determinando, en su caso, los partidos judiciales a que se extienda la competencia de cada uno de los funcionarios nombrados. Cuando se trate de algún partido judicial en que el número de expedientes pendientes de resolución sea importante por sí solo, o resulte notoriamente excesivo al sumarlo con otros, habrá de quedar también determinada la división que de dicho trabajo haya de hacerse.

3º. Acordados los nombramientos por la Sala de Gobierno, el Presidente del Tribunal Supremo lo comunicará a los funcionarios designados, con las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, y dará cuenta también a este Ministerio de dichas designaciones.

4º. Los funcionarios designados Jueces especiales cesarán en el desempeño de su cargo o jurisdicción dentro de los tres días siguientes al en que les fuere notificado su nombramiento, e inmediatamente designarán o habilitarán la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario de dicha jurisdicción especial y el Escribiente o Escribientes que consideren necesarios, y reclamarán de los Jueces de primera instancia o Presidentes de los Jurados Mixtos, en su caso, del territorio a que alcance su competencia los expedientes de revisión de rentas rústicas que tengan en tramitación. Dichos Jueces o Presidentes habrán de rendirlos en el término del tercer día, bajo doble relación autorizada, uno de cuyos ejemplares, firmado por el Juez especial, les será devuelto y servirá de acuso de recibo.

Los Jueces especiales comunicarán al Ministerio y al Presidente del Tribunal Supremo la fecha en que dan principio a su actuación, a los efectos del plazo marcado en el artículo 3º del referido Decreto de 26 de marzo.

DECRET REFERENT ALS JUTGES QUE ENTENEN EN LES DEMANDES DE REVISIÓ
DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENTS RÚSTICS DE 5 DE MAIG DE 1932 (GAZ.
DEL DIA 7).

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. El número de Jueces especiales nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para la tramitación y resolución de las demandas de revisión de contratos de arrendamientos de fincas rústicas podrá ser aumentado, siempre que a juicio de dicha Sala requiera el pronto despacho de los asuntos en curso.

Artículo 2º. Cuando a juicio de la Sala de Gobierno lo requiera el número de demandas en curso de tramitación en un solo partido, podrán dividirse entre dos o más Jueces especiales, determinándose en el acuerdo de nombramiento los términos municipales de su respectiva competencia.

Artículo 3º. Para cada Juzgado especial podrán ser habilitados dos o más Secretarios, quienes se substituirán respectivamente entre sí, sin necesidad de habilitación para cada caso. Sin perjuicio de la facultad que concede a los Jueces el artículo 3º del Decreto de 26 de marzo, y el número 4º de la Orden de 19 de Abril último, para habilitación de Secretarios, las Salas de Gobierno podrán nombrar -

para el ejercicio de la fé pública en estos juicios a Secretarios en propiedad o suplentes de Juzgado municipal de cabeza de partido, sin exceptuar los de la capital del territorio. El desempeño del cargo será obligatorio.

Artículo 4º. Posesionados de la Jurisdicción que se les encomiende, procederán los Jueces a examinar si las demandas presentadas lo han sido dentro del término prevenido en el artículo segundo del Decreto de 31 de Octubre de 1931, y si ha sido efectuada en tiempo y forma la consignación prevenida en el artículo 5º, señalando en los casos en que no se hubiere ya determinado el plazo estatuido en el artículo 11 para verificarla.

Los Jueces declararán caducadas de derecho, y sin necesidad de ulteriores trámites, las demandas presentadas fuera del término, y aquellas en que no se hubiese efectuado, o no se efectuase dentro del plazo señalado, la consignación correspondiente.

Las cuestiones relativas al depósito de rentas o frutos, o sobre la eficacia de la consignación que pareciese suficiente al Juez o Jurado mixto, no suspenderán ni demorarán el curso del juicio.

Artículo 5º. Asimismo procederán los Jueces a decretar de oficio las acumulaciones prevenidas en el artículo 5º del Decreto de 26 de Marzo último.

Las acumulaciones podrán ser decretadas en vista de lo consignado en las respectivas demandas, o durante la tramitación del procedimiento, antes de la celebración del juicio de revisión.

Salvo el caso de pertenecer a un mismo propietario, no -
podrán ser acumuladas demandas que afecten a fincas sitas en dis-
tintos términos municipales.

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso -
alguno.

Artículo 6º. Al efectuarse el requerimiento prevenido -
en el artículo 12 del Decreto de 31 de Octubre de 1931, se prevendrá
al propietario que puede formular oposición a la demanda dentro del
término de ocho días, a contar del siguiente al en que le haya sido
entregada la solicitud, bajo apercibimiento de que no verificándolo
se procederá a la determinación de la renta sin más citarle ni oírle.
En el propio requerimiento podrá ser consignada la fecha en que de-
berá tener lugar, para el caso de formularse oposición, el acto con-
ciliatorio.

Artículo 7º. El acto de conciliación se celebrará con arre-
glo a lo prevenido en los artículo 16, 17 y 18 del Decreto de 31 de -
Octubre de 1931. Si se tratase de demandas acumuladas, resultando a-
venencia, será suficiente expresar para todas las fincas los pactos
que sean idénticos. En cuanto a las fincas en que el acuerdo no se
consiguiera, se observará lo propio respecto de las alegaciones comu-
nes a varias partes.

Artículo 8º. A tenor de lo prevenido en el artículo 6º del
Decreto de 31 de Octubre de 1931, cuando en el acto conciliatorio las
partes se manifiestan conformes en el hecho de que la renta o parte -
de frutos son equivalentes en las zonas catastradas a la renta catas-
tral determinada con arreglo a lo preceptuado en el párrafo a) de di-
cha disposición, y en las zonas no catastradas, que no son superiores

a las que por la misma finca se hallaban pactadas durante el año agrícola de 1913 a 1914, se sobreeserá en las actuaciones, declarando en el mismo acto no haber lugar a la revisión. En caso de discrepancia sobre este hecho la prueba de juicio se limitará a su comprobación.

Igual prescripción se observará a tenor de la disposición tercera de las transitorias del precitado Decreto, siempre que se alegare haberse celebrado convenio de reducción o nuevo contrato, con posterioridad al Decreto de 11 de Julio del mismo año, salvo en todo caso las acciones procedentes con respecto a su validez y eficacia, las cuales deberán ser ejercitadas ante los Tribunales ordinarios competentes, con arreglo a la legislación vigente.

Artículo 9º. El Juez, y en su caso el Jurado Mixto, se declararán suficientemente instruidos, declarando concluso el juicio cuando lo consideren procedentes, en vista de los documentos presentados en el acto conciliatorio y lo manifestado por las partes, y además siempre que resultase conformidad en los hechos.

Artículo 10. En la sesión en que se celebre el juicio de revisión, la comparecencia de las partes no será obligatoria. En los juicios acumulados, las partes comparecidas podrán alegar por las ausentes, sin necesidad de poder, procurándose que las alegaciones sean comunes, salvo empero, las rectificaciones necesarias. En la prueba testifical podrán formularse preguntas, sin necesidad de previo interrogatorio, y sólo se harán constar las contestaciones que afecten al fondo del asunto o respecto de las cuales lo solicite expresamente una de las partes. El Juez o Jurado Mixto tendrá en todo caso la facultad que les concede el artículo 20 del Decreto de 31 de Octubre último.

Para la práctica de estas diligencias no será precisa la citación de las partes.

Artículo 11. Las pruebas se limitarán a los hechos - sobre que no hayan recaído conformidad y no podrán versar sobre otros extremos que los prevenidos en el artículo 7º y 8º del Decreto de 31 de octubre de 1931. El Juez o Tribunal rechazará de oficio las impertinentes.

Artículo 12. En la tramitación del procedimiento se - observarán las prescripciones de la ley de enjuiciamiento civil en cuanto no se opongan a lo dispuesto en los Decretos de 31 de octubre de 1931 y 26 de marzo del corriente año y con sujeción a las siguientes prevenciones.

a) Las partes presentarán los documentos originales, si obraren en su poder, pero tendrán facultad de producir al mismo - tiempo copia simple de los mismos, la cual, previamente cotejada, si el documento fuese público, o reconocida su autenticidad en - otro caso, se unirá a los autos con devolución de aquéllos.

b) Los testimonios se expedirán siempre en relación, salvo respecto de las cláusulas o pactos en que se pidiera expresamente testimonio literal. La misma providencia, de acuerdo en - que se ordenen, será notificada al funcionario que deba expedirlos y servirá de mandamiento. Cuando un mismo funcionario debe expedir testimonios que afecten a distintos juicios, podrán serle ordenados en un solo oficio o mandamiento; pero deberán ser expedidos con la oportuna separación.

c) Todas las demandas correspondientes a una misma jurisdicción serán numeradas correlativamente por el orden de su presentación y además con referencia al término municipal a que pertenezcan las fincas. Ambos números se harán constar en todos los oficios, exhortos y notificaciones, citaciones y requerimientos que se practiquen y en las sentencias.

d) Las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán practicarse mediante la entrega de copia del acuerdo o comunicación al efecto, firmando la persona que lo reciba u otra a su ruego un duplicado de la misma, que se unirá a los autos. La entrega podrá ser encomendada a los Jueces municipales, Alcaldes o a cualesquiera Agentes de la Autoridad, quienes, bajo su responsabilidad, cuidarán de devolver los duplicados debidamente firmados y autorizados además con su propia firma. En casos de negligencia y, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran, podrán ser las Autoridades y Agentes del fuero ordinario corregidos con una multa que no bajará de 10 ni excederá de 50 pesetas. Si la persona que reciba la notificación, citación o emplazamiento se negare a firmar el duplicado, la Autoridad o Agente de ella, que efectúe la entrega, hará constar, bajo su firma y responsabilidad, el nombre del receptor y la fecha y hora de la entrega, teniéndose por hecha la notificación.

e) Los Jueces podrán obrar por sí en la ejecución de sus acuerdos. Cuando estimaren necesario proceder por exhorto o carta-orden estos tendrán la forma de oficio y se limitarán a exponer concretamente lo que se interese. Los Jueces exhortados procederán en la forma prevenida en este Decreto.

f) Sólo se harán a las partes las notificaciones necesarias para el emplazamiento del demandado, la celebración del acto conciliatorio y, en su caso, la celebración del juicio arbitral - de revisión y la de la sentencia, sin perjuicio del derecho de la parte a examinar los autos en Secretaría.

g) En las solicitudes de revisión deberá expresarse, además del nombre, apellidos y vecindad, el domicilio del propietario, y si no constase, el de su apoderado o representante en la localidad. Este defecto será subsanable dentro de los diez días siguientes al - de la fecha de este Decreto.

Si no se consignase dicho domicilio y el demandado no pudiese ser citado caducará de derecho la demanda.

h) Las sentencias se redactarán en la forma siguiente:

1º. Se consignarán el lugar y fecha en que se dicte.

2º. Se expresará la numeración del juicio y en la cabecera o fallo el nombre de los litigantes y respectiva calidad de propietarios o arrendatarios, sin otras circunstancias.

3º. Bajo la fórmula de VISTO se continuará una referencia a la fecha de la demanda, acto conciliatorio y de la sesión del juicio, y a los documentos producidos por las partes o reclamados por el Juez sólo se añadirán RESULTANDOS cuando el Juez lo estime necesario.

4º. Los considerandos, que tendrán numeración correlativa, se redactarán en forma sucinta, concretándose a fijar el fundamento del fallo.

5º. El fallo precisará, en caso de reducción, los términos concretos de la misma; en caso de no accederse a ella, se empleará la fórmula de absolución.

6º. Se entenderá efectuada la publicación con la firma - del Secretario al pie de la sentencia.

Si actuare el Jurado mixto el veredicto surtirá los efectos de sentencia.

i) En los juicios acumulados será suficiente que la cédula de notificación contenga la numeración del juicio y los resultados, considerandos y pronunciamientos que afecten a la parte notificada. Si la sentencia se dictase en el acto del juicio, la notificación se practicará seguidamente por diligencia, no entregándose copia si no fuere solicitada.

j) Las apelaciones podrán interponerse oralmente si la notificación de la sentencia siguiera al juicio, en cuyo caso se hará constar la interposición por medio de diligencia sucinta o por escrito presentado dentro del término legal. Las apelaciones se entenderán admitidas de derecho y sólo su inadmisión será objeto de providencia, que será debidamente notificada. En el primer caso no será necesaria otra diligencia y los autos se remitirán seguidamente a la Comisión mixta arbitral agrícola del Ministerio de Trabajo y Previsión, sin necesidad de notificación al apelante.

k) Si se tratase de juicios acumulados en los cuales la apelación no afecte a todas las partes, el Juez podrá disponer que se eleven las actuaciones originales a la Comisión mixta arbitral agrícola, quedando testimonio de la parte de sentencia que deba ser ejecutada seguidamente.

1) Contra las providencias o acuerdos interlocutorios no se admitirá recurso alguno. La parte que se considere agraviada podrá consignar su protesta a los efectos que procedan en caso de apelación de la sentencia definitiva.

11) En las providencias se prescindirá de todo formulismo innecesario, limitándose a consignar escuetamente la fecha y la resolución que se dicte y la firma del Juez y Secretario.

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1932.

DISPOSICIONS LEGALS REFERENTS A LES REVISIONS. DECRET MINISTERIAL DE

13 DE MAIG DE 1932

Todas las disposiciones que durante el pasado año y el presente se han dictado sobre revisión de rentas de fincas rústicas han tendido, de una parte, a asegurar con la mayor eficacia el derecho de los arrendatarios a que se fijase una merced correspondiente al valor de la tierra y a las circunstancias de su cultivo, y de otra, a asegurar el derecho del propietario al percibo de la renta que se ha considerado procedente, no sólo a los efectos de la sentencia que ha de dictarse en estos juicios, sino que también durante su tramitación, en la medida y cuantía que la prudencia aconsejaba. Por ello, en el Decreto de 31 de octubre de 1931, que resume y sintetiza, como su preámbulo expresa, todas las disposiciones anteriores referentes a la misma materia, previene el artículo 5º que, para solicitar la revisión a que se refiere el artículo 2º, será condición indispensable que el arrendatario consigne en metálico o en frutos ante el Jurado mixto, o ante el Juzgado de primera instancia, si se trata de arrendamiento, -

la renta catastral o la mitad de la renta pactada, según se trate de finca catastrada o no catastrada; y si se trata de aparcería, la mitad de la participación que corresponda al arrendador a quien pertenece, desde luego, la cantidad consignada en metálico o en frutos.

Era presunción común la de que los juicios de revisión - habían de quedar terminados en plazo brevísimo, por ser sencillos y breves también los términos fijados para su tramitación. Ello no obstante, el número considerable de demandas producidas ha retrasado este natural deseo de que una disposición dictada con carácter - exclusivamente temporal por referirse a las rentas del año 1931 o, cuando más, a las del período de prórroga obligatoria prevenido en el artículo 1º del aludido Decreto de 31 de octubre del mismo año, tuviese cumplimiento dentro del propio lapso de tiempo, habiendo - sido preciso para conseguirlo en la medida de lo posible que se - dictasen disposiciones complementarias, y que para la debida celeridad en la tramitación de tales procedimientos se encomendase la tarea a Jueces especiales, cuyo nombramiento se ha confiado a la sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Por tales motivos se ha dado el caso de que después de - la consignación prevenida en el artículo 5º del precitado Decreto, venciesen o no se hiciese inminente el vencimiento de otras rentas o plazos de las mismas. El espíritu de las disposiciones vigentes sobre la materia implica una solución idéntica, o sea la obligación de ir consignando el arrendatario ante el Jurado mixto, y si -

éste no estuviere constituido ante el Juzgado de primera instancia, y hoy ante el Juzgado especial que corresponda, las rentas que vayan venciendo, y si se tratase de aparcería, la mitad de la participación de frutos que, según los contratos cuya revisión se ha solicitado, corresponda al arrendador, procurándose en el cumplimiento de tal obligación evitar todo trámite que pueda resultar innecesario.

Por estas razones, a propuesta del Ministro de Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

TEXTOS LEGALES

Artículo 1º. En los juicios de revisión de arrendamientos de fincas rústicas, prevenidos en el artículo 2º del Decreto de 31 de octubre de 1931, en los cuales se hubiese efectuado la consignación dispuesta en el artículo 5º el arrendatario vendrá obligado a seguir consignando las rentas que vengán antes de la terminación de juicio, a medida que fueren venciendo, y si se tratase de aparcería, a entregar la mitad de la participación de los frutos que correspondan al arrendador. La cantidad consignada en metálico o en frutos pertenece a éste.

Art. 2º. El arrendatario ofrecerá al propietario la parte de renta correspondiente al plazo vencido, según el contrato, y si se tratase de aparcería, la de participación en frutos, debiendo el último expedirle el oportuno recibo. En este caso se tendrá por hecha la entrega a todos los efectos legales procedentes.

Art. 3º. Si el propietario se negase a recibir la renta o parte de frutos que corresponda, se efectuará la consignación - de las mismas en la forma prevenida en los artículos 5º, 11, 12 y 13 del Decreto de 31 de octubre. Los gastos que origine la consignación serán en este caso de cuenta exclusiva del arrendador.

Art. 4º. En la misma forma se entregarán, y, en su caso, se consignarán, las rentas o participaciones de frutos que venzan hasta la terminación del respectivo juicio de revisión, durante - el presente año de 1932.

Dado en Madrid a trece de mayo de mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALA ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Justicia

ALVARO DE ALBORNOZ Y LIMINIANA

CIRCULAR DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 25 DE MAIG DE 1932

TRIBUNAL SUPREMO

PRESIDENCIA

Habiendo surgido dificultades que exponen algunos de -
los Jueces a quienes se ha confiado especial jurisdicción para
decidir sobre los expedientes de revisión de contratos de arren-
damiento, que estimen no podrán cumplir su importante misión den-
tro del término de sesenta días concedido al efecto, así por el -
número de los expedientes sometidos a la competencia de cada uno
de los Jueces designados, como por las dificultades que ofrecen -
a la asistencia de los elementos no judiciales que integran el -
Tribunal o Jurado correspondiente; la necesaria ocupación que la
respectiva profesión u oficio les impone durante la mayor parte de
las horas del día.

He acordado prevenir a V. S. que a obviar dichos inconvenientes debe acudir al celo y discreción que me complace en reconocerle, en los que inspirará, cuando sea preciso, la medida de habilitar horas extraordinarias y días inhábiles, como autoriza con carácter preventivo y general la ley de Enjuiciamiento civil en el artículo 259 y, con mejor razón, en expedientes de esta índole, que más se acomodan al concepto de actuaciones administrativas, judiciales o de voluntaria jurisdicción, en la que son hábiles todas las horas y todos los días, conforme el artículo 1812 de la propia ley.

Madrid, 25 de mayo de 1932.- El Presidente del Tribunal Supremo, Diego Medina García.

Señores Jueces especiales para la revisión de expedientes de rentas en arrendamientos de fincas rústicas.

ORDRE MINISTERIAL DE 6 DE JUNY DE 1932, REFERENT A LA PROVISIÓ DE CARRECS
VACANTS EN LES SECRETARIES DELS JURATS MIXTOS

Ilmo. Sr.: La Ley del 27 de noviembre de 1931 preceptúa en su artículo 18 que los Secretarios de los Jurados mixtos serán nombrados por el Ministro de Trabajo y Previsión, previo concurso en que se exijan conocimientos de la vida industrial o agrícola y la legislación del país, y que asimismo el Ministro designará también libremente el personal de las Secretarías de dichos organismos; pero deseando este Ministerio que las vacantes que hayan de proveerse en las Agrupaciones administrativas, lo sean entre los que acrediten mayor capacidad para el desempeño de los cargos, ha decidido disponer:

1º. Que para la provisión de las vacantes que se produzcan en las plazas de Secretario o de Oficiales y Auxiliares de las Secretarías de los Jurados Mixtos, éstos abrirán un concurso público por el plazo de un mes, en el que podrán tomar parte quienes acrediten conocimientos relacionados con la actividad industrial o agrícola del país, y la legislación social

Serán preferidos en dichos concursos:

a) Quienes hayan prestado servicios en organismos oficiales dependientes o relacionados con este Ministerio durante un año, sin nota desfavorable.

b) Los graduados de las Escuelas sociales.

2º. Una vez que termine el concurso y en virtud de las circunstancias que concurren en cada uno de los concursantes, los Jurados mixtos elevarán sus propuestas al Ministerio de Trabajo y Previsión quien resolverá en definitiva.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 6 de Junio de 1932.- Francisco Largo Caballero.- Señor Director general de Trabajo.

ORDRE EN LA QUE ES DISPOSA QUEDI REDACTAT EN LA FORMA QUE S'INDICA
L'ART. 2 PAR. A) DEL DECRET DE 31 D'OCTUBRE DE 1931, REFERENT A LA
REVISIÓ DE CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES, DE 13 DE
JUNY DE 1932 (GAZETA DEL DIA 16)

El decreto de 31 de octubre de 1931 referente a la revisión de contratos de arrendamientos de fincas rústicas, señaló - diversas circunstancias que los juzgados de primera instancia o los jurados mixtos en su caso habrían de tener en cuenta para reducir lo menos posible las rentas pertenecientes a pequeños propietarios, viudas y huérfanos. Diferentes razones aconsejan extender ese criterio de equidad a las instituciones benéficas, ya que éstas no se lucran con la renta sino que la dedican al cumplimiento de los plausibles fines sociales que les están confiados. Por lo que de acuerdo con el Consejo de ministros y a propuesta del de - Justicia.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. El art. 7 apartado a) del decreto de 31

de octubre de 1931, quedará redactado en la siguiente forma:

a) En relación con el arrendador e imputándolo a su forma:

Primera. El valor de las mejoras útiles que haya realizado por su cuenta en la finca, así como la exención tributaria que esto le hubiere creado.

Segunda. La favorable situación patrimonial del arrendatario en relación con la del arrendador de un fundo pequeño o mediano.

Tercera. La circunstancia de ser el arrendador imposibilitado, huérfano, menor de edad, mujer soltera huérfana o viuda, o institución de beneficencia.

Cuarta. La moderada cuantía de anteriores arrendamientos, combinada con la continuidad de los mismos arrendatarios.

Dado en Madrid a 13 de Junio de 1932. (Gac. 16 de junio).

DECRET ORGANITZANT LA SECCIÓ DE LA PROPIETAT RÚSTICA DE LA COMISSIÓ
ARBITRAL AGRÍCOLA, DE 21 DE JUNY DE 1932 (GAZ. DEL DIA 22)

La revisión de rentas de predios rústicos decretada en 11 de Julio de 1931 y reglamentada por varias disposiciones posteriores, reunidas luego en el Decreto de 31 de Octubre siguiente, ha alcanzado en la práctica un amplísimo desarrollo que denota la necesidad real a que aquella medida responde. Cuéntase por millares los casos que se han visto obligados a resolver en breve plazo los Juzgados ordinarios y especiales y los Jurados mixtos - de la Propiedad rústica de toda España.

Y de otra parte, establecido por la legislación, en garantía del derecho de todos, un recurso de apelación libre de - restricciones, ante la Comisión mixta Arbitral agrícola dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión, se han acumulado en este organismo los recursos de tal manera, no obstante una intensísima actuación, que al presente se hallan sometidos a su informe más de

4.000 expedientes, sin que hayan todavía transcurrido los plazos en que se han de dictar los fallos en primera instancia.

Coincide con esto la disolución de las Juntas directivas de las Cámaras oficiales Agrícolas, a las que, en la necesidad de improvisar con urgencia el organismo central que había de entender en la revisión de rentas, se concedió la facultad de designar los Vocales representantes de los propietarios de fincas rústicas en la sección correspondiente de la Comisión mixta Arbitral, por lo que éstos se consideran hoy sin una asistencia autorizada para ostentar aquella representación, y ello obliga a convocar a una elección nueva.

Es, pues ocasión de organizar la Sección de la Propiedad rústica de la mencionada Comisión Arbitral, para darle la constitución y medios adecuados que le permitan funcionar con la diligencia y eficacia que el caso reclama.

A tal efecto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Previsión y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. La Sección de la Propiedad rústica de la Comisión mixta Arbitral agrícola quedará constituida como sigue:

Primero. Por los actuales Presidente y Vicepresidente de la Comisión mixta Arbitral agrícola, más otros dos Vicepresidentes que designará el Ministro de Trabajo y Previsión.

Segundo. Diez Vocales representantes de los propietarios, cuya designación corresponderá a las entidades siguientes:

Cuatro de la Agrupación de Propietarios de fincas rústicas.

Dos a la Asociación de Agricultores de España.

Dos a la Confederación Católico-Agraria; y

Dos al Instituto Catalán de San Isidro.

Tercero. Cinco Vocales representantes de los arrendatarios, que serán los cinco que mayor número de votos hubiesen obtenido en la elección para designar los de este carácter en la Sección de la Propiedad rústica de la Comisión mixta Arbitral agrícola, según los resultados que se publicaron en la Orden del Ministerio de Trabajo y Previsión fechas 18 de Abril último.

Cuarto. Cinco Vocales representantes de los obreros agrícolas designados por la Federación de trabajadores de la Tierra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto de constitución de la Comisión mixta Arbitral agrícola, de 9 de Mayo de 1931, todos los Vocales designarán sus respectivos suplentes en la forma que dicho artículo determina.

Artículo 2º. Para las apelaciones de los fallos sobre revisión de rentas, la Sección de la Propiedad rústica de la Comisión mixta funcionará dividida en cinco Subsecciones, cada una de las cuales estará compuesta por dos Vocales representantes de los propietarios, uno de los arrendatarios y otro de los obreros, y serán presididas por el Presidente y Vicepresidentes que se mencionan en el artículo anterior.

La Secretaría de estas Subcomisiones será desempeñada por el Secretario y personal de la Secretaría de la Comisión mixta Arbitral agrícola y funcionarios del Ministerio del Trabajo que sean destinados a ella circunstancialmente.

Artículo 3º. Se constituye una Asesoría jurídica especial de la Sección de la Propiedad rústica de la Comisión mixta Arbitral agrícola, de la que será Jefe el de la Asesoría jurídica del Ministerio del Trabajo, y a la que serán agregados Abogados del Estado en el número que las necesidades del servicio lo requieran, designados por la Dirección general de lo Contencioso. Estos asesores prepararán los informes en los recursos de revisión de rentas y serán ponentes ante las Subsecciones, sustituyendo con su informe el de los correspondientes organismos administrativos del Ministerio. El Jefe de la Asesoría tendrá este carácter ante el Pleno cuando se reúna, y podrá también actuar como Asesor en las Subsecciones cuando lo estime oportuno.

Artículo 4º. Para el fallo de los recursos de revisión de rentas, las cinco Subsecciones actuarán separadamente y adoptarán los acuerdos por mayoría, y en caso de empate mediante el voto dirimente de la respectiva Presidencia.

Artículo 5º. Siempre que el Presidente de la Comisión mixta Arbitral agrícola lo disponga se reunirá el Pleno de la Sección de la Propiedad rústica, constituido por todas las Subsecciones, para decidir en los asuntos en que así lo solicite el Presidente o algún Vocal de las Subsecciones, aun cuando en éstas hubiere recaído acuerdo.

Artículo 6º. Para el despacho de los asuntos que no se refieran a revisión de rentas tendrá carácter de permanente la Subsección que presida el propio Presidente de la Comisión mixta Arbitral agrícola.

Artículo 7º. Todos los asistentes con cualquier carácter de los indicados en los artículos anteriores, a las sesiones del Pleno y de las Subsecciones devengarán asistencias en la cuantía que fije el Ministro del Trabajo y Previsión, sin exceder del máximo determinado en el Decreto de 18 de Julio de 1924, pero sin otra limitación, en cuanto al número de asistencias, que la de que no podrán devengar más de una diaria, aunque se celebren dos o más sesiones en la misma fecha.

Artículo 8º. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Las entidades a quienes se confiere la designación de Vocales en el artículo 1º de este Decreto deberán efectuarla en el término de tres días, poniéndola en conocimiento de este Ministerio dentro de las veinticuatro horas siguientes, a fin de que se celebre la sesión de constitución del Pleno a los seis días de la publicación de este Decreto en la Gaceta de Madrid.

Segunda. Por el Gobierno se tramitará el oportuno expediente para la habilitación de un crédito extraordinario de 200.000 pesetas con destino a la Comisión mixta Arbitral agrícola para los gastos originados por el servicio de la revisión de rentas en su Sección de la Propiedad rústica.

Dado en Madrid a veintiuno de Junio de mil novecientos treinta y dos.

INSTANCIA ELEVADA AL GOVERN PER DIVERSOS ALCALDES I JUTGES MUNICIPALS
DE CATALUNYA, EL 13 DE JULIOL DE 1932

Excmo. Sr.: Los que suscriben Alcaldes y Jueces municipales interpretando los deseos de los pueblos afectados y visto que aún sigue sin resolverse el conflicto rabassaires que de no resolverse pronto por el Gobierno puede llegar a momentos dolorosos, cosa que sería muy de lamentar ...

SUPLICAN

Los manifestantes entendiendo que aún continúa en pié el programa revolucionario y sin estar éste cumplido según se propuso el pueblo por la mayoría de los Ministros.

Considerando en este sentido que los decretos de 11 de Julio y 6 de Agosto 1931 marcaban bien claramente el espíritu de justicia a que se quería llegar, para dar fin a las rentas abusivas.

Considerando que al pueblo se le instaba a que cumpliera lo que sus Ministros le inducían en Decretos demostrándole cumplir el programa revolucionario trazado, a tal fin iban alargando los plazos por medio de decretos que si no había presentado las demandas de revisión se pudieran hacer.

Considerando que serían asistidos en su razón los rabassaires llenaron de demandas los Juzgados en busca de que se les redimiera de una vez de las rentas usurarias por parte de sus propietarios.

Considerando que han aparecido muchos decretos de dichas fechas acá que han muerto el espíritu justiciero de los primeros decretos.

Considerando que de los miles de instancias llevadas a los Juzgados de primera Instancia algunas de ellas escritas igual que las otras se hizo el fallo por el Señor Juez dando lugar a la reducción en favor de los rabassaires.

Considerando que más tarde sin estar constituidos los tribunales mixtos y sin comprender el por qué, se dictaron unas disposiciones nombrando jueces especiales para tal fin anulando éstos lo que sus antecesores en igualdad de condiciones fallaron, y ahora ha resultado que un 90% o más de tales demandas, han quedado anuladas o sobreesridas en contra de los rabassaires.

Considerando que con esto los rabassaires que se han visto defraudados y persisten en la misma actitud en cuanto a sus demandas.

Considerando que parece haya empeño en el conflicto y que no se resuelva en justicia haciéndonos en cambio cargar a los alcaldes y jueces municipales lo más desagradable pretendiendo el tener - que castigar a los republicanos auténticos a beneficio de los usure- ros y monárquicos.

Considerando que a resulta de todo ello hay muchas multas - impuestas sin haberse seguido los trámites judiciales por si hubiesen delinquido y que nosotros tendríamos que hacer cumplir; considerando una vez más que los rabassaires han sido objeto de una injusticia y haciéndonos constar en todos los casos su disgusto.

Por todo lo expuesto los que suscriben, viéndose afrontados a un problema de orden público, exponen a V. E. que si no se da reso- lución rápida al problema de los aparceros y rabassaires, nos veremos en el deber (creyendo interpretar la razón que les asiste) de no acep- tar ninguna denuncia que provenga del confusionismo creado por los - contradictorios decretos.

Viva V. E. muchos años.- S. Sadurní de Noya, 13 de julio de 1932.

INFORME DONAT AL GOVERN PER LA SALA DE GOVERN DE L'AUDIENCIA TERRITO-
RIAL DE BARCELONA, EL 18 DE JULIOL DE 1932

SEÑORES:

Presidente del Tribunal.

Fiscal.

D. Justo Ruiz de Luna y de Lasauca.

D. Víctor González de Echavarri y Castañeda.

D. Luis Folache de Orozco.

Excmo. Sr.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Barcelona atenta a su doble obligación de velar siempre por la recta administración de justicia en este territorio y de informar al Gobierno de la República de cuanto pueda tener relación con aquélla o pueda contribuir al cabal conocimiento y en consecuencia a la mejor solución de los problemas jurídicos en el mismo territorio planteados, entendiéndole de su deber, aun cuando su intervención directa ni indirectamente, en la tramitación

y resolución de los litigios planteados en los cuales este Tribunal carece de jurisdicción de alzada, reunir los elementos que facilitasen el estudio del problema, ingente, si más no, por su volumen, llamado vulgarmente de los rabassaires, de máxima actualidad en Cataluña a consecuencia de las revisiones de contratos relativos a fincas rústicas para los cuales, en cuanto a las rentas del año de 1931, dieran facilidad y acción los decretos de 11 de Julio de 1931 y 6 - de Agosto y 31 de Octubre del propio año.

No existe en Cataluña constituido ningún Jurado mixto de los prevenidos en las disposiciones vigentes para resolver con competencia preferente semejantes litigios. Tampoco en la parte agrícola se halla catastrada razón alguna de este territorio. Por ello ha sido preciso que de los juicios de revisión conociesen exclusivamente los Jueces de primera instancia, primero los de los respectivos partidos que, a pesar del celo notorio de la mayoría, hubieron de rendir poca eficacia por no permitirlo las atenciones más urgentes de los propios juzgados y luego con carácter especial los Jueces nombrados a tal efecto por el Tribunal Supremo y que en este territorio han actuado en número de trece, debiendo estudiar y resolver en el corto período de sesenta días la cantidad considerable de cerca de 30.000 juicios.

Sería injusticia notoria no hacer resaltar desde el primer momento el celo, la competencia, la ecuanimidad y la laboriosidad ingente con que han procedido en el desempeño de su cometido los funcionarios nombrados. Ello no hubiera sido posible sin el acendrado patriotismo y espíritu de sacrificio que por igual a todos distingue. La labor realizada puede calificarse, sin hipérbole, de extraordinaria y casi de milagrosa, no solamente por el esfuerzo personal que ha requerido día y noche, sí que también porque la tramitación de esos treinta mil juicios ha sido absolutamente gratuita bajo todos conceptos y ha tenido que hacerse frente a los gastos de desplazamiento y de residencia, material de escritorio y personal de escribientes cuando no podía

el trabajo material ser personalmente efectuado por el mismo Juez o Secretario, sin contar para ello con recurso alguno. A pesar de ello, la misión de los jueces ha sido cumplida dentro del término prefijado, los trámites han sido, dentro de las normas del procedimiento, mucho más ampliadas que restringidas, las resoluciones, por lo que consta a esta Sala, han sido ampliamente fundamentadas, facilitando así, no sólo la comprensión de las partes litigantes, sino que también, en los casos de apelación, la tarea del organismo destinado a resolver la alzada. En una palabra: cabe afirmar que en el cumplimiento de su deber los Jueces especiales no han perdonado esfuerzo ni regateado sacrificio. Uno y otros deben ser tenidos en cuenta por la República.

Entendió esta Sala que el trabajo de dichos beneméritos funcionarios no podía cesar automáticamente con la última conciliación obtenida o con la última sentencia dictada, sino que era preciso que quedase en alguna manera sintetizado el resultado de su actuación y que pudiesen ser aprovechados por quien corresponda y, si ha lugar a ello, los juicios que tan fundadamente han podido formular sobre el planteamiento y estado actual del problema en sus respectivas jurisdicciones. Por ello y por la misma razón de que antes del funcionamiento de los Juzgados especiales no se creyó oportuno, a fin de evitar prejuicios, señalar otra norma que la de los derechos vigentes, cuando se tuvo noticia de que su actuación estaba para terminar, les fué cursada la siguiente orden telegráfica: "Antes de dar V. S. por terminada su misión, se servirá formular una memoria conteniendo los datos estadísticos posibles con precisión de clases de juicios y su motivación; las causas que a su juicio motivan los conflictos; las intervenciones más destacadas y todos los demás antecedentes y consideraciones que --

estime V. S. oportunos para formar concepto de la cuestión. Se servirá asimismo indicar los Secretarios y subalternos que hayan contraído méritos especiales."

Tales memorias son lo que tiene hoy esta Sala el honor de elevar a la consideración de V. E. concretándose a resumirlas y sintetizarlas en el presente informe.

Y antes de proceder a él, cabe observar que las conclusiones que se deducen del conjunto de dichas memorias vienen en el presente caso valoradas por la independencia con que han procedido en su gestión, por la diversidad de origen y categoría de sus autores procedente de todas las regiones de España y de todas las categorías judiciales (Magistrado-Juez de Barcelona, jueces de término, de ascenso y de entrada y hasta jueces municipales) e incluso por la diferencia de tiempo de residencia en este territorio. Los hay que en él han hecho casi toda su carrera; otros, los señores Aragonés y Cantos, no han cumplido todavía el año de servicio en él.

DATOS ESTADÍSTICOS

Como se ha dicho, los trece Jueces especiales han tenido que conocer de cerca de 30.000 demandas, en cifra exacta, salvo error u omisión de 29.792. Sus antecesores habían resuelto ya buen número de juicios semejantes que no será aventurado calcular en un par de millares o más, tal vez 3.000 ó 3.500. Su distribución, empero, es idéntica en proporciones a la que resulta de los que ahora son objeto de examen.

La distribución de Cataluña en provincias, distribución efectuada para fines puramente administrativos y de parcelación del territorio, resulta asaz arbitraria para todo otro efecto y desde luego inferior a la división filipina en corregimientos. La verdadera unidad es la del partido judicial, así como en otro aspecto lo es la Diócesis. Sin embargo, dado el actual régimen de división territorial, bueno será examinar en primer término y por orden de menor a mayor gravedad del problema que nos ocupa, la situación por provincias.

A. PROVINCIA DE LÉRIDA

Tiene una superficie de 12.151 kilómetros cuadrados, y, según el censo de 1.920, que cabe considerar aumentado, una población de hecho de 314.670 habitantes con una densidad de 25'90 por kilómetro cuadrado. Cuenta nueve partidos judiciales y 324 municipios. Es eminentemente, totalmente agrícola.

Ahora bien, en seis partidos: Borjas Blancas, Seo de Urgel, Solsona, Sort, Tremp y Viella (Valle de Arán) no se ha promovido juicio alguno de revisión.

Según resulta de la Memoria del Juez especial de los demás, D. Vicente Tomás Palao, Juez ordinario de Cervera (Memoria núm. 1), -- los promovidos en el resto de la provincia fueron 909 y se distribuyen como sigue:

Cervera (43.000 habitantes): 40 juicios, todos ellos desistidos.

Balaguer (62.500 id.); 168 juicios que afectan sólo a 10 términos municipales de los 25 que integran el partido, principalmente al de Fuliola (978 habitantes), que dió un contingente de 65 juicios, siguiendo Torrelameo (763 habitantes) con 33.

Sigue el partido de Lérida (88.337 h.), con 701 juicios, que afectan a 20 términos de los 41 de que consta el partido. Como particularidad se ofrece la de que el pueblo de Artesa de Lérida, con 1.128 habitantes, tuvo 165 juicios, y Aspa, con 541 h., 65, siendo así que los términos más poblados no tuvieron ninguno o los tuvieron escasos, v. gr., Juneda (3.589), 11; Lérida (38.165), 35; Almacellas (2.821), uno.

Este número de demandas debe empero, con ser tan escaso, reducirse todavía, pues del informe del Juez resulta que de los 701 juicios promovidos, 515 aparecían dirigidos contra un solo demandado, la Unión laica de Beneficiados de la Catedral de Lérida, comunidad de diversas familias con patronatos de sangre, cuyos colonos pagan una renta modestísima inferior a mucho a la usual en la provincia, el noveno de frutos. Ello indica que el problema en estas demandas era ajeno a la cuestión de revisión y que, en todo caso, deben considerarse como una sola; de manera que resulta para este partido en realidad un total de 186 revisiones.

B. PROVINCIA DE GERONA.

Tiene una extensión de 5.864 kilómetros cuadrados y una población de 325.619 habitantes con una densidad de 56 por kilómetro cuadrado.

Expresa el Juez informante D. Juan Cantos, que es de una gran riqueza agrícola y forestal, hallándose muy repartida la propiedad, como lo demuestra el existir 74.000 contribuyentes por fincas rústicas.

Tiene esta provincia seis partidos judiciales y consta de 247 Ayuntamientos.

El total de juicios promovidos en esta provincia es de - 1.577, afectando a 1.063 fincas pertenecientes a 586 demandados.

Se distribuyen como sigue:

Partido de Puigcerdà (Cerdeña y Ripollés) (36.306 h.). Un solo juicio.

Partido de Santa Coloma de Farnés (Selva, Guillén y Marina) (46.802 h.), cuatro juicios.

Partido de Figueras (63.700 h.): 130 juicios afectando a - nueve términos de 63 que integran el partido, siendo de notar que - 73 corresponden al solo término de Llansá (2.164 h.) y 42 de S. Pedro Pescador (1.123); Figueras, con más de 13.000 habitantes, sólo tuvo uno; Rosas, Perelada y los términos más importantes, ninguno. En cambio Pau, con 547 habitantes, tuvo nueve.

Partido de Gerona (79.743 h.): 270 juicios, que afectan a 24 términos de los 57 que componen el partido. El mayor número de demandas (43) corresponde al pueblecito de Bellcaire (492 h.), siguiéndole con 35 demandas el no mucho mayor de Albona (692 h.) y con 30 el de Porqueras (943 h.). Los demás términos, incluso los de mayor importancia, han tenido pocos juicios o ninguno.

Partido de La Bisbal (Bajo Ampurdán) (56.014 h.): 446 juicios que corresponden a 16 términos de los 36 que integran el partido. Un sólo término, Torroella de Montgrí (4.074 h.), tiene 177 juicios, siguiéndole en importancia con 48 el pequeño pueblo de Ullá (453 h.) y con 36 La Tallada (500 h.), Palafrugell (8.746 h.) sólo tuvo 31, y La Bisbal, 10.

Partido de Olot (43.003 h.): 723 juicios, afectando a 20 términos de los 30 que integran el partido.

Corresponde el mayor número (139 juicios) a San Esteban de Bas (1.554 h.), siguiéndole con 119 las Planas (1.879 h.) y con 69 cada uno Tortellá (1.326 h.) y Montagut (1.321).

C. PROVINCIA DE TARRAGONA.

En esta provincia han actuado tres Jueces especiales a saber: el Magistrado-Juez de Barcelona D. Gregorio Burgués Foz (Vendrell), - el Juez de Tarragona D. Dionisio Ferrer (Tarragona, Reus, Falset, Gandesa y Tortosa) y el Juez de Montblanch D. Isidro Liesa de Sus (Valls y Montblanch).

Tiene la provincia de Tarragona una superficie de 6.490 kilómetros cuadrados y una población de 355.148 habitantes con tendencia a aumentar. La densidad de población es de 55 habitantes por kilómetro cuadrado. Es dicha provincia eminentemente agrícola. Tiene ocho partidos judiciales y consta de 185 Ayuntamientos.

El número de juicios es en esta provincia mucho más considerable que en las anteriores, pues alcanza la cifra, ya respetable, de 4.461 sólo en el período de jurisdicción especial.

El Juez D. Dionisio Ferrer sintetiza con gran precisión en su informe (Memoria núm. 3), la resultancia estadística en cuanto a distribución y proporcionalidad de juicios en los cinco partidos que estuvieron a su cargo. "Interesa, dice, destacar en cuanto al número de juicios: 1º. La existencia de ellos en el partido de Falset (39.000 habitantes) y Gandesa (39.000 h.), y el escasísimo número -25- habido en el partido de Reus (52.413 h.). 2º. La insignificante proporción - que en relación con el número total de los contratos de disfrute de tierras, han alcanzado las demandas presentadas en los otros dos partidos judiciales de Tarragona (40.808 h.), donde quizá no hayan llegado a un diez por ciento los cultivadores-revisionistas, y 3º. La contratación a sólo nueve municipios de los 35 que componen el territorio de los expresados partidos de Tarragona y Tortosa, de las demandas de revisión".

Lo propio cabe decir de los partidos de Montblanch y Valls. En el primero, que cuenta con 29.000 habitantes, se han dado 22 juicios que afectan a cuatro términos de los 28 que integran el partido. En el segundo, de unos 30.000 habitantes, se han dado 145 afectando a 10 términos de los 25 que forman el total del territorio. Si bien es de advertir que en este partido se habían resuelto ya con anterioridad unos 600 expedientes correspondientes en su mayoría, al igual que los actuales al pueblo de Vilarrodona (1.878 h.).

El partido de Vendrell, de población inferior a los demás, pues no llega a 28.000 habitantes, cuenta por sí solo con 2.052 expedientes y, al contrario de lo que ocurrió en los partidos hasta aquí estudiados, afectan dichos expedientes a todos los términos que en número de 26 componen el partido. La desproporción, empero, que existe entre los aludidos términos es verdaderamente notable. El de Aiguamurcia ofrece con 1.768 habitantes de todos sexos y edades, 606 juicios, y es de observar que, según el número de cédulas recogidas para la formación del censo, sólo pueden existir poco más de 393 familias. Sigue en menor proporción San Jaime dels Domenys (1.522 h.) con 213 juicios; un pueblo como Bañeras (803 habitantes) tiene 116; la proporción decrece hasta llegar a Torredembarra que, con tener 2.113 habitantes, sólo tuvo dos expedientes. Merece citarse el caso de Vespella, aldea de 212 habitantes, con 143 juicios, y el no destacado de San Vicente de Calders, de 455 habitantes, con 148 juicios.

D. PROVINCIA DE BARCELONA

Tiene la provincia de Barcelona una extensión de 7.691 kilómetros cuadrados y una población según el censo de 1920 de 1.349.282 habitantes, con una densidad de 175 habitantes por kilómetro cuadrado. Es notorio el aumento de población durante el último decenio. Deben descontarse, empero, a los efectos del problema agrícola los grandes núcleos urbanos, fabriles e industriales, así la capital, que de hecho excede del millón de habitantes. Sabadell y Tarrasa con 37.529 h. la primera y más de 30.000 la segunda, Manresa con 27.000 Mataró con 24.000 etc., debiendo asimismo tenerse presentes las cuencas fabriles del Cardener, Llobregat, Ter y otras análogas.

La población agrícola no excede en gran cantidad, habida cuenta del territorio de la correspondiente a las provincias de Tarragona y de Gerona.

Las demandas resueltas en esta provincia alcanzan en conjunto la cifra ingente de 23.024 juicios resueltos por los jueces especiales.

Se distribuyen como sigue entre sus 22 partidos judiciales.

Partidos de la capital con los términos de Badalona, San Adrián de Besós y Santa Coloma de Gramanet. No han tenido juicios. Con anterioridad se habían tramitado unos 15 ó 20.

Partido de Arenys de Mar (40.000 habitantes), siete juicios.
..... 7

Partido de Berga (39.500 h.) con 37 términos municipales; 210 juicios, afectando a 19 términos 210

Partido de Granollers (45.987 h.) con 30 términos; 108 juicios, siendo de advertir que anteriormente a la especialidad se habían resuelto más de 600. Los juicios promovidos afectan a 13 términos . . . 108

Partido de Mataró (53.183 h.) con 17 términos: 229 juicios que afectan a seis términos, correspondiendo casi la mitad -116- al pueblo de Teyà (1.374 h.) 229

Partido de Villanueva y Geltrú (23.500 h.) con 10 términos: 1.118 juicios que afectan a ocho términos. El más destacado resulta ser el de Castellet (1.878 h.) con 453 expedientes, siguiendo Villanueva, de 13.720 h., con 194 San Pedro de Ribas (2.067 h.) con 168 1.118

Partido de Vich (59.500 h.) con 47 términos: 1.133 juicios que afectan a 39 municipios, sobresaliendo Oristacon (1.262 h.) con 315 expedientes Olost (1.067 h.) con 215; Taradell (1.771 h.) con 116; Folgarolas (837 h.) con 70, etc. Muchos se reducen a cantidades insignificantes 1.136

Partido de San Feliu de Llobregat (68.000 h.) con 30 términos y 1.451 juicios que corresponden a 21 pueblos destacándose Gelida - (1.980 h.) con 165; San Lorenzo de Hortons (1.176 h.) con 165; Vallirana (1.300 h.) con 149; Abrera (810) con 96 etc. 1.451

Partido de Sabadell (54.000) con 11 términos: 1.667 juicios que afectan a 10 términos; sobresale el pueblo de Sardanyola (1.351 h.) con 415 juicios; siguen a distancia Sentmanat (1.742 h.) con 281; Castellar con doble número de habitantes (3.585 h.) sólo 197, etc. - 1.667

Partido de Igualada (41.000 h.), en 36 términos 1.860 juicios que corresponden a 25 términos; el mayor número pertenece a Piera - (3.094 h.), que tiene 590 juicios; La Llacuna (1.382 h.) con 289; Torre de Claramunt (761 h.) con 71, Masquefa (1.134 h.) con 150, etc. 1.860

Partido de Tarrasa (48.800 h.) con 12 términos totalmente afectados: 1.983 juicios, destacando, en cuanto al número de ellos, Rubí (5.239 h.) con 553; Castellbisbal (1.191) con el número relativamente más considerable de 399; San Cugat del Vallés (2.874 h.) con 242; la capital del partido (30.000 h.) con 315, y los pequeños pueblos de Ullastrell (755 h.) con 76 y Vacarisas con 32. . . 1.983

Partido de Manresa con 35 términos municipales y 3.084 juicios que afectan con notoria desigualdad a 33 términos. Los más afectados son San Fructuoso de Bages (1.533 h.) y 231 juicios; Rajadell, de mitad de población (771 h.), con 230; San Martín de Torruella -- (1.454 habitantes) con 210; Artés, población fabril de 2.115 habitantes, con 220; Castellfullit de Boix 898 habitantes) con 102, etc. -
 3.048

Partido de Villafranca del Panadés (39.106 h.) con 23 términos totalmente afectados, 9.334 juicios; resulta pues, un juicio -- por cada cuatro habitantes, más de uno por familia. Destaca como primer litigante el término de Subirachs con 3.207 habitantes, que forman unas 860 familias, que ostenta la cifra igual a los partidos más nutridos o sea 1.290 juicios; Avinyonet le lleva aun ventaja, pues -- con la mitad de población (1.576 h.) y de familias 380, cuenta con -- 735 juicios; San Martín Sarroca (2.345 h.) tiene 797; Mediona (1.086 h.), 758; el pueblecillo de Santa Fe del Panadés (247 h.) y tiene -- 215 juicios. En cambio San Pedro de Riudevilles (1.676 habitantes) -- sólo tiene cuatro juicios 9.334

Por razón del número tan considerable de juicios de este partido hubo de ser dividido su territorio, agregándose varios - términos a los partidos limítrofes (3 a San Feliu de Llobregat con 2.061 juicios; 3 a Igualada con 907 juicios, y uno a Villanueva con 679, respectivamente). El resto de términos hubo aún de ser dividido en dos jurisdicciones especiales: una con ocho términos y 2.443 juicios y otra con nueve términos con 3.264 expedientes.

■ ■ ■

Es suficiente una simple ojeada al mapa de Cataluña para - determinar la situación real del problema revisionista. Un núcleo - central de actividad manifiesta: Villafranca del Panadés con sus - 9.334 revisiones; la acción de Villafranca irradia a los partidos - limítrofes: Vendrell, de la provincia de Tarragona, que forma, con el de Villafranca y parte del de Igualada, una sola comarca vitíco- la con 2.952; siguen Igualada con 1.870, San Feliu de Llobregat con 1.451 y Villanueva y Geltrú, repercutiendo en Sabadell que, a su vez, aparece relacionado con el núcleo más importante de Manresa, comarca vitícola del Llano del Bages, al cual a su vez se une Tarrasa. En - relación con los núcleos referidos los demás son de poca importancia; Vich, Granollers y Tortosa en la provincia de Tarragona.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS PROVINCIAS

Provincias	Ayuntamientos no afectados	Ayuntamientos afectados	N. de juicios
Lérida	291	33	909
Gerona	247	73	1.577
Tarragona	134	51	4.461
Barcelona	101	213	23.024
Totales:	773	370	29.971

NOTA.- Si no se considera sujetos al problema revisionista los municipios que no llegan a diez revisiones, el número de los no afectados queda aumentado en más de un centenar, disminuyendo proporcionalmente el segundo grupo.

SITUACIÓN AGRÍCOLA Y MODALIDADES
CONTRACTUALES EN CATALUÑA

Los datos estadísticos apuntados han de adquirir mayor relieve considerando que la explotación agrícola es, dentro de la variedad de sus cultivos, sumamente intensa en todo el territorio. A pesar de su industrialización, la explotación agrícola no ha decaído, pudiéndose afirmar con seguridad que la vida industrial y agrícola -viven paralelamente. Ni en los mismos muros de las fábricas ni en las tapias de los poblados empiezan sin solución de continuidad el campo cultivado, la explotación forestal e incluso, en la mayoría de los -casos, la pecuaria en los pocos bosques que permanecen en pié se ha-

llan estrechamente relacionados con la agricultura, formando un apéndice de la misma en todos los lugares susceptibles de habitación humana. Cabe afirmar sin exageración, que en Cataluña todo el territorio es vega y que en su mayoría es pueblo, por cuanto entre lugar y lugar se halla el terreno constelado de granjas y casas de labranza que constituyen las típicas masoverías o manos de este país.

Los contratos relativos a fincas rústicas son de tipo - consuetudinario, con alguno variante en cada comarca, pero con carácter de absoluta generalidad, pueden clasificarse como sigue:

Masovería en aparcería.- El colono usufructúa un edificio, generalmente capaz, con habitación, corrales, bodega y demás anexos sin pagar por ello merced alguna, puede asimismo criar algún ganado y aves de corral; generalmente disfruta también exclusivamente de - alguna huerta próxima a la casa. Cultiva las tierras entregando al propietario una parte alicuota de los frutos mitad, tercio, cuarto o quinto según la calidad de las tierras o de los productos. Lo - más común es el tercio. Este contrato, aunque convenido generalmente por anualidades, puede durar largo plazo; no es raro que en una misma masovería se sucedan varias generaciones.

Aparcería estricta.- También el contrato estriba en el reparto de frutos en distintas proporciones, pero el labrador no tiene casa ni anexos de la misma.

Arrendamiento a metálico.- No difiere substancialmente del regulado por el Código civil. Es, en general, poco usado; tiene su principal desarrollo en comarcas de huerta o de agricultura industrializada.

Rabassa morta. Propiamente dicha.- Es, en realidad, un contrato enfiteútico análogo al de establecimiento a primeras cepas, - regulado por el artículo 1.656 del Código Civil; la participación de frutos para el propietario oscila entre la mitad y el quinto.

Rabassa impropia.- El nombre de rabassa se ha extendido con harta impropiedad a otros contratos esencialmente diversos, principalmente a toda clase de aparcerías en los viñedos. Muchas veces el nombre de rabassa se aplica a fincas que el aparcero recibe completamente plantadas y en plena producción y a fincas de cultivo distinto de la viña.

Prestaciones del propietario.- Los propietarios contribuyen con prestaciones variadas, generalmente con abonos. Es regla general en los viñedos que proporcionen los sulfatos y azufre necesarios. En algunos casos sólo contribuyen con la mitad; esta última costumbre, general hasta 1914 tiende a desaparecer. En muchos casos facilita - también el propietario los renuevos y satisface los jornales del transporte de las uvas. Frecuentemente los gastos de elaboración corren de su cuenta y presta los lagares y cubas incluso para la parte del aparcero.

Prestaciones del colono.- En algunas fincas debe el colono satisfacer la contribución territorial, pacto que tiende a desaparecer y cabe calificar de abusivo en buena parte de casos.

Subarriendo.— Sólo se acusa en la comarca de Tortosa, — principalmente en el cultivo del arroz; a juicio del Juez de dicho partido tiene con frecuencia un cierto carácter numerario.

Braceros a jornal.— En la mayor parte del territorio son rarísimos. Sólo se observan con carácter habitual en comarcas de agricultura industrializada (Llano del Llobregat, Maresma o Costa de Levante) y en la industria forestal (carbones, bosques de castaño, etcétera) o se emplean sólo para los trabajos especiales como en la siega (los hombres) y en vendimia (las mujeres).

En este particular puede decirse que la industria perjudica a la agricultura ya absorbiendo por la elevación de jornal los braceros propiamente dichos, ya empleando en muchas comarcas a los individuos de las mismas familias agrícolas (hombres y mujeres).

Contratos especiales.— Sólo acusa una modalidad especial — el Juez de Tortosa que observa (Memoria número 3) un contrato de arrendamiento cuya merced consiste en una cantidad fija de frutos generalmente arroz.

PRIMERA CONSECUENCIA QUE SE DEDUCE

DE LO EXPUESTO

Ha de llamar en primer término y poderosamente la atención el hecho de la distribución tan desigual de los juicios. De obedecer éstos a una causa económica no se concibe que siendo visiblemente iguales las condiciones del cultivador del campo no se hayan producido en proporción visiblemente igual en todos los lugares. Dejando aparte

los partidos (6 en Lérida, 3 en Tarragona y 1 en Barcelona) los que pueda decirse que no han sentido el problema, causa extrañeza la desproporción que existe entre los demás, pasando en la sola provincia de Barcelona, de 210 en Berga y 239 en Mataró a más de 9.000 en Villafranca. Cabría suponer que el problema se halla circunscrito a los partidos que han visto solicitar revisiones en todos sus términos. Pero la inteligencia se obnubila al considerar en otros, v. gr., en Vich y en Manresa e incluso en Villafranca mismo que unos términos - han tenido muchas revisiones y en sus alrededores de condición igual con los mismos cultivos, con iguales rentas y no diferentes prestaciones las han presentado en número escaso o no las han presentado.

GÉNESIS DEL CONFLICTO

CAUSAS OCASIONALES

Ha podido comprobarse que las demandas aparecen en su inmensa mayoría impresas con ningún fundamento de hecho y mencionando sólo que se estima la renta abusiva. Figuran por regla general escritas, - no por el cultivador, sino por mano ajena, que es la misma en centenares de demandas. En las regiones vitícolas coincide la prestación y - fecha -y ello es en regla general- con la época de vendimia de 1931,. En otras comarcas es muy posterior.

Sobre las causas inmediatas existen informes curiosísimos. El Juez de Lérida, de Borjas Blancas, Balaguer y Cervera aluden directamente a un D. J., hombre de pocos escrúpulos unido con jefes - comunistas o sindicalistas que, llevando demandas impresas, recorrían los campos de Lérida logrando su firma bajo promesa de partir por mitad los beneficios. Era él mismo quien escribía luego a los propieta-

rios pidiendo cantidades para el desestimiento "Memoria número 1".

El de Gerona, después de consignar que las demandas fueron presentadas en su mayoría dentro del corriente año en el último día del término, menciona que sólo aparece en lugares donde existe alguna organización sindicalista, preferentemente en 33 pueblos (véanse datos curiosos en la Memoria número 2, página 5ª y 6ª).

El de Vich-Granollers alude a los llamados "Sindicatos de Rabassaires" que crearon el conflicto, no por crearlo, sino porque en su inteligencia fácilmente sugestionable prendió la creencia de que iban a lograr importantes reducciones y a subsistir los contratos de aparcería, masovería y rabassa por otros de arrendamientos, siendo estos beneficios para siempre y de que por de pronto cumplían sus obligaciones pagando la mitad de la renta. (Número 6, pág. 10 - de la Memoria).

El de Villanueva hace hincapié en el hecho de que los demandantes desconocían la trascendencia de sus demandas habiendo comprobado en algunos casos, e inducido en la mayoría de ellos, la presión coaccionadora de las Asociaciones a que pertenecían y la investigación de intermediarios. (Memoria número 8).

El de Sabadell-Tarrasa alude a la causa puramente legal de los Decretos de Julio de 1931 y al hecho significativo de que las demandas se interpusieron con posterioridad al pago de rentas y entrega de frutos, a la propaganda política y a la de ciertas sociedades de Agricultores especialmente a la llamada "Unión de Rabassaires". (Memoria número 9).

Es interesantísimo dentro de su concesión el informe del Juez de Igualada, que conoció también de parte del partido de Vilafranca, las demandas aparecen en serie, los demandantes obran con arreglo a las instrucciones que reciben. (Memoria número 10).

Uno de los Jueces de Vilafranca habló del problema artificioso creado por el proceder atropellador de unos pocos que con fines indeterminados y verdaderamente anarquizantes han conseguido por de pronto crear una cuestión que en la agricultura catalana - no tiene razón de existir. (Memoria número 11).

Otro de los Jueces de Vilafranca alude a los impulsores y directores del movimiento, entre los cuales se encontraban significados comunistas, como prueba bastante el que fueran a la revisión la mayoría de los aparceros halagados y engañados por las ventajas que se les ofrecían acaso con fines políticos. (Memoria - número 12).

El de San Feliu de Llobregat dice; "que la mayoría de los juicios de revisión -exceptuando los de arrendamiento- las causas sin dejar de tener un fondo de justicia o de equidad han sufrido - por parte de los dirigentes de esa llamada cuestión Agrícola catalana una inflación desproporcionada de lo que se han valido para ciertos fines que no son del caso exponer aquí. La Memoria número 5, - merece leerse por entero (Vendrell).

CAUSAS Y FUNDAMENTOS

Los jueces informantes excepción tal vez del de Lérida y en parte del de Gerona son los primeros en reconocer que el conflicto planteado tiene otras causas más hondas, es en efecto evidente que si la propaganda y la presión pueden ejercer de momento grande influencia, ésta sería poco eficaz y poco duradera si no prendiese en ánimos predispuestos y no se apoyara en un interés real.

Recogiendo las informaciones y enseñanzas objetivas de la realidad confirmada por los sucesos que al presente se desarrollan el actual conflicto de rabassaires y aparceros obedece a dos causas inconfesables la mayoría de los casos, la primera y gravísima la última.

Cabe afirmar desde luego y con toda seguridad que el actual movimiento agrícola en nada consta la intervención en el de comunistas y sindicalistas, es en su génesis, prosigue siendo y seguirá en lo sucesivo ajeno por entero a toda tendencia colectivista incluso al socialismo moderado. Es puramente individualista, de individualismo familiar y nada más.

Y en cuanto a sus causas reales salvo en los casos en que la excepción confirma la regla, se ha querido sacar partido de los Decretos vigentes que permiten consignar parte de la renta y prohíben el desahucio por falta de pago. A ellos son debidas las mayorías de interpelaciones interpuestas a sabiendas de que a tenor de la legislación aplicable no pueden prosperar. A ello es debido también el ningún celo en procurar la pronta tramitación de las demandas desde su interposición hasta el nombramiento de Jueces -

especiales que han debido proceder de oficio.

En segundo lugar el Decreto de Julio de 1931, hizo concebir esperanzas infundadas. La de que la renta seguiría correspondiente al amillaramiento que en Cataluña es ya muy antiguo y resulta excesivamente bajo. Dado el aumento de valor de los productos la sustitución resultaba un beneficio enorme.

Finalmente ha aparecido otro fenómeno digno de llamar la atención por más de un concepto. En numerosos contratos no se ha pedido una reducción solamente sino una novación del contrato. En afirmarlo, coinciden todos los informes, en algunos Juzgados han llegado tales demandas a formar un grupo especial. Así por ejemplo en las dos jurisdicciones de Villafranca (Memorias números 11 y 12), Vich, Sabadell, Tarrasa, Villanueva, Manresa y Vendrell.

Ello puede implicar y según el Juez de Villafranca Don Miguel Siges (Memoria número 11), implica una tendencia a saber: convertir - la rabassa perfecta e imperfecta y la aparcería en censo, es decir - en contrato enfitéutico pero pagando un canon en metálico muy reducido. La creencia que los Decretos dictados eran de efecto perpetuo representa en esos casos un verdadero ánimo de convertir los contratos rústicos, la aparcería y el arrendamiento en propiedad o sea de que - la propiedad pase de unas manos a otras, de uno a otro dominio.

Este movimiento tal vez inconsciente aun tiene en Cataluña raigambre histórica. No otro fué el llamado en el siglo XV de los - payeses de remensa que suprimió en ese territorio la clase señorial.